

Tesis País **Piensa Atacama** sin pobreza

Volumen 1



FUNDACION
SUPERACION
DE LA POBREZA

SERVICIO PAÍS

Tesis País
Piensa Atacama
sin pobreza

Volumen 1

TESIS PAÍS 2018

PIENSA ATACAMA SIN POBREZA

©Fundación Superación de la Pobreza

N° de Registro: 303.714

ISBN: 978-956-7635-65-8

Director Regional

Jonnatan Hermosilla

Coordinadora regional del Programa Tesis País

Susan Silva

Equipo Editorial

Mauricio Rosenblüth

Susan Silva

Ernesto González

Edición

María José Rubio

Jennifer Abate

Paulina Sepúlveda

Representante Legal

Catalina Littin

Diseño

Bruno Córdova

Portada

Carlos Muñoz

Agradecemos y reconocemos el trabajo de todos quienes oficiaron como tutores institucionales. Ellos apoyaron, nutrieron y orientaron el trabajo de los tesisistas.

Índice

Presentación	7
Introducción	9
1. ¡De estos cerros, no me voy! Reflexiones sobre el proceso de rechazo de la comunidad de Totoral a la termoeléctrica Castilla en la región de Atacama Tesisista País 2017-2018 Javier Flores Zepeda	12
2. Las consecuencias ocultas de la contaminación en zonas urbanas: cómo la segregación social expone a la población más vulnerable a mayores niveles de contaminantes Tesisista País 2017-2018 Pablo Moya Arias	36
3. Desplazamiento forzado de familias de Copiapó debido al aluvión ocurrido el 25 de marzo de 2015 Tesisista País 2016-2017 Simonne Marín Sarria y Allison Martínez Pérez	64
4. Modelo Servicio País Salud Comunitaria: Reflexiones y contribución en torno a la implementación de la Reforma de Salud en Chile Tesisista País 2014-2015 Pía Monardes Morales	84
5. Volver al Valle del Huasco: cuadrando el círculo de las políticas públicas Tesisista País 2009-2010 Claudio Frites Camilla y Felipe Vargas Aceituno	100

Presentación

Tengo el agrado de presentar nuestra primera publicación regional denominada “Piensa Atacama sin Pobreza”. En ella se abordan distintos temas de relevancia para nuestra región y en su elaboración han participado siete estudiantes tesistas de pregrado, participantes del programa Tesis País de la Fundación Superación de la Pobreza en Atacama.

Las temáticas seleccionadas y que se exponen en este volumen, buscan relevar aspectos del territorio que guardan relación con desastres siconaturales, conflictos socioambientales, organización comunitaria y políticas públicas en la región. Teniendo como objetivo evidenciar las dinámicas territoriales presentes en el territorio.

Desde nuestra perspectiva como Fundación, la importancia de esta publicación radica en que se presenta como un medio para dar a conocer problemáticas a las que deben hacer frente de manera cotidiana los y las habitantes de los territorios en Atacama. Y además, es importante para nosotros que a través de estas investigaciones se pueda representar tanto la visión académica o aquella que nace desde lo investigativo, como la visión de las comunidades desde las cuales se levanta la información.

Asimismo, consideramos fundamental este tipo de publicaciones, puesto que contribuyen a la producción de conocimiento con sentido y pertenencia regional, y porque surgen del trabajo de investigadores que han puesto su interés en territorios que por diversos motivos no han sido relevados tanto a nivel regional como nacional.

Con esta edición, quisiéramos contribuir a la reflexión regional sobre las ambigüedades y contrastes sociales presentes en nuestros territorios, poniendo un énfasis en lo comunitario, para así seguir aportando en la construcción conjunta de una región con mayores grados de equidad.

**Jonnatan
Hermosilla
Riquelme**

Director Regional
Atacama
Fundación
Superación de
la Pobreza

Introducción

En sus 23 años de existencia, la Fundación Superación de la Pobreza ha sostenido su compromiso con promover mayores grados de equidad e integración social en el país. Esta misión se ha llevado a cabo por medio de su programa de intervención comunitaria Servicio País, como también desde el área de investigación Propuestas País, desde donde se han elaborado estudios y propuestas que buscan aportar al mejoramiento de la gestión social del Estado.

Bajo el alero de dichos objetivos surge *Tesis País*, promoviendo que jóvenes estudiantes de pre y post grado desarrollen sus tesis en temáticas de pobreza, políticas públicas e integración social. De esta forma, *Tesis País* busca incidir en la formación de estudiantes universitarios, estimulando que nuevos profesionales y especialistas se interesen en investigar y comprender el fenómeno de la pobreza, proponiendo recomendaciones que contribuyan a su superación, desde una mirada multidimensional.

En este marco, la Fundación anualmente desarrolla una publicación nacional con los artículos de investigación más destacados del programa. Asimismo, en un esfuerzo por descentralizar el conocimiento, se han sumado las publicaciones regionales que permiten relevar las problemáticas y recursos locales. Este 2018 es el turno de la región de Atacama, donde la presente edición es el resultado de cinco investigaciones que han permitido *Pensar una Atacama Sin Pobreza*.

El primer artículo de esta edición lleva por título *Las consecuencias ocultas de la contaminación en zonas urbanas: cómo la segregación social expone a la población más vulnera-*

ble a mayores niveles de contaminantes; desarrollado por Pablo Moya Arias. Esta investigación analiza la relación entre las variables de segregación social, ordenamiento territorial y la contaminación derivada de la actividad minera en la comuna de Copiapó, por medio de un análisis científico sobre la distribución de metales pesados en el territorio. El trabajo demuestra cómo las comunidades en situación de vulnerabilidad se desenvuelven en un contexto de injusticia ambiental.

El segundo artículo se denomina *Desplazamiento forzado debido al aluvión ocurrido en Copiapó el 25 de marzo, 2015: análisis bajo la matriz de necesidades y perspectiva de género*, de las autoras Simone Marín Sarria y Allison Martínez Pérez. Este paper publicado en la edición del libro Tesis País 2017, analiza el proceso de desplazamiento forzado que vivieron las familias afectadas por el desastre socio-natural ocurrido en Copiapó, profundiza en el cambio de rol experimentado por las mujeres en el nuevo contexto, y devela así las implicancias de trabajar bajo una gestión del riesgo de desastres sin enfoque de género.

En tercer lugar se encuentra el artículo que lleva por nombre *¡De estos cerros, no me voy! Reflexiones sobre el proceso de rechazo de la comunidad de Totoral a la termoeléctrica Castilla en la región de Atacama*, desarrollado por Javier Flores Zepeda. Se trata de una revisión analítica sobre el conflicto socio-ambiental experimentado por la comunidad agrícola de Totoral, que permite comprender la estrategia de enfrentamiento que desarrollaron los comuneros de esta localidad rural, que lograron frenar la instalación de uno de los proyectos de termoeléctrica a carbón más grande de Latinoamérica.

El cuarto artículo de esta publicación se titula *Modelo Servicio País en Salud Comunitaria: reflexiones y contribución en torno a la implementación de la Reforma de Salud en Chile*, desarrollado por Pía Monardes Morales, exprofesional Servicio

País. Este *paper* fue publicado en una selección de artículos a propósito de la conmemoración de los 20 años del programa Servicio País. Presenta la experiencia de intervención en salud comunitaria durante el ciclo 2013-2014 en la comuna de Caldera y reflexiona en torno a los aportes de este modelo en la transición de la reforma de salud en el país y su aplicación práctica por medio de los centros de salud familiar.

El quinto artículo de esta publicación regional se denomina *Volver al Valle del Huasco: cuadrando el círculo de las políticas públicas*, escrito por Claudio Frites Camilla y Felipe Vargas Aceituno, ex profesionales Servicio País. Este paper también fue publicado en el marco de la celebración de los 20 años del programa Servicio País, y en él se relata el proceso de intervención desarrollado en la comuna de Huasco en el área de trabajo, durante el ciclo 2009-2010, donde los ex profesionales realizan un análisis crítico de aquellas políticas y programas sociales orientadas al fomento productivo en estas comunidades.

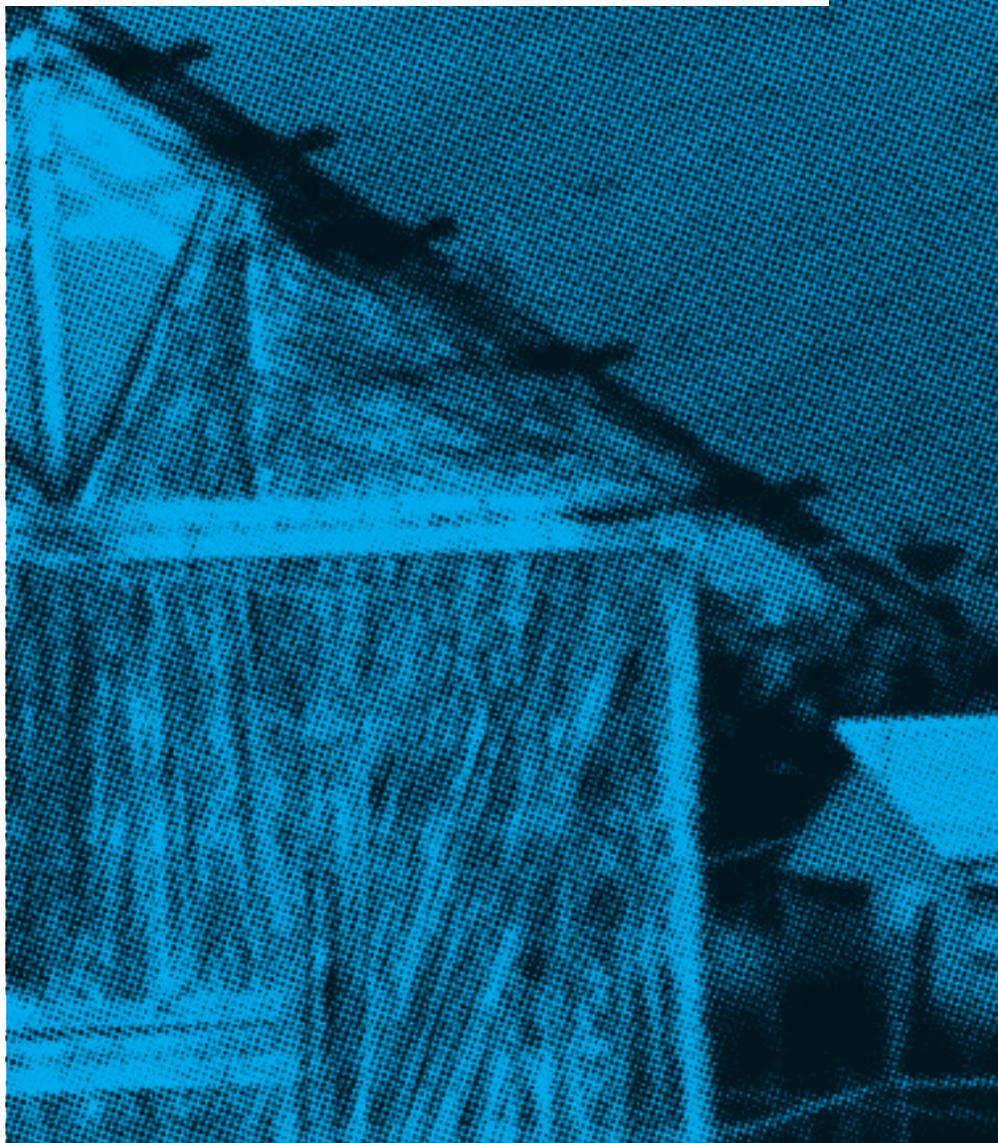
Finalmente, queremos reconocer a los tutores y las tutoras que acompañaron este proceso de creación. Sin ellos, esta publicación no sería posible. Esperamos que esta nutrida y variada colección de trabajos de investigación contribuya a mejorar la comprensión del fenómeno de la pobreza y sus múltiples expresiones en la región de Atacama, enriqueciendo a su vez, el debate sobre posibles formas de superación desde el conocimiento local. La invitación continúa abierta para pensar una región y un país sin pobreza, con más integración y equidad social.

1.

**¡De estos cerros, no me voy!
Reflexiones sobre el proceso de
rechazo de la comunidad de Totoral
a la termoeléctrica Castilla en la
región de Atacama**

Javier Flores Zepeda¹,

Universidad Academia de Humanismo Cristiano



Resumen

El presente artículo nos habla de la experiencia vivida en la localidad de Totoral, en la región de Atacama, frente al proyecto energético termoeléctrica Castilla. Esta es una revisión del contexto en que se desarrolló un conflicto socio-ambiental centrada en describir las características de la comunidad agrícola de Totoral en tanto organización principal de la localidad. A partir de lo anterior se revisan los elementos vulnerables de la comunidad, las organizaciones partícipes en el conflicto y las fortalezas sociales, las que han permitido que las personas que integran esta unidad hayan logrado soslayar un camino que parecía ya definido.

Palabras clave: ruralidad, conflictos ambientales, capital social, identidad.

1/ Antropólogo, Licenciado en Antropología. Artículo basado en la tesis “Dependencias y autonomías economías en Atacama. Estudio etnográfico de economías domésticas en la localidad de Totoral”, realizada para optar al título de Antropólogo. Grado académico: Licenciado en Antropología. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesor guía: Miguel Bahamondes Parrao. Santiago de Chile. 2016.

Introducción

La zona norte de Chile se caracteriza por albergar un sinnúmero de localidades aisladas. Según la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), en el año 2012 la región de Atacama contaba con un total de 751 localidades, de las cuales el 28,2% eran consideradas localidades aisladas (212 localidades) y a su vez, el 1,3% de la población regional se encontraba en situación de aislamiento (Subdere, 2012).

Esto da cuenta de una importante cantidad de localidades en la región con bajos niveles de integración debido a sus propias variables morfológicas, el escaso acceso a bienes y servicios y una débil capacidad del sistema institucional para aumentar los grados de integración de estos territorios. En este sentido, la localidad de Totoral, perteneciente a la comuna de Copiapó, cuenta con un Índice de Aislamiento Territorial de -0,88 (Subdere, 2012), el que da cuenta de una compleja situación de desventaja y desigualdad social respecto al desarrollo del resto de las localidades y comunas de la región.

A estos factores de aislamiento territorial se suman aquellos vinculados al fenómeno de la pobreza y la vulnerabilidad social. Según los datos entregados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), en el año 2015 la región de Atacama

contaba con 26,3% de personas en situación de pobreza multidimensional (Casen, 2015) que tenían dificultades para acceder a salud, educación, trabajo y seguridad social, entre otras dimensiones del bienestar.

Dicha situación se agudiza en aquellas localidades como Totoral, que debido a este complejo entramado de factores socioeconómicos vive una situación de vulnerabilidad que la deja más expuesta a las variabilidades del sistema productivo regional.

De forma paralela, la zona norte de Chile ha entrado en una etapa de rápida expansión de proyectos mineros, energéticos y portuarios, entre otros. Fundamentalmente, son los proyectos mineros los que se han masificado en los distintos territorios, los que van desde explotaciones menores, pasando por la mediana minería, a mega proyectos con miles de trabajadores en sus faenas productivas.

Este aumento sustancial de la producción minera ha traído consigo controversias y conflictos socio-ambientales que han movilizado a las comunidades que exigen respeto y cuidado por el ambiente a través de políticas de desarrollo que no afecten el bienestar de las comunidades.

La expansión minera no sólo ha generado impactos por las características propias de su producción sino que también ha ido aumentando la demanda energética para sus faenas, llegando a absorber el 37% del consumo energéti-

co nacional (Olca, 2015) e incentivando con ello la generación eléctrica a bajos costos. Un 63% de este consumo es producido por medio de termoeléctricas a carbón que perjudican los territorios y la vida de las personas.

Un denominador común en los conflictos socio-ambientales es que estallan principalmente en territorios con poblaciones en situación de vulnerabilidad, aislamiento o que presentan ciertas carencias materiales. La mayoría de estos lugares alberga población que muchas veces no ha logrado desarrollar sus capacidades técnicas o logísticas para protegerse y tener alguna influencia en las decisiones que se toman en sus territorios.

La escasez de servicios, el aislamiento y la falta de comunicación expedita influyen en el bajo desarrollo de estas capacidades y se convierten en un impedimento para que las personas incidan en la toma de decisiones, lo que determina negativamente el grado de información que llegan a manejar las comunidades.

Este modo de desarrollar la economía se encuentra enfocado principalmente en la explotación de recursos naturales destinados a la exportación. Las materias primas han sido un elemento central en este proceso económico que se sigue viviendo y que se ha solidificado en los últimos cuarenta años en el país.

Todo este proceso ha sido incentivado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional

o el Banco Mundial, los que han buscado incorporar las economías nacionales a la economía mundial a través del condicionamiento a ciertos parámetros, que en el caso de Chile y varios países de la región, los sitúa en un papel secundario en la economía global.

Es en estas condiciones de vulnerabilidad, pobreza y expansión económica que se busca posicionar el estudio, donde la pobreza o las carencias presentes en la vida cotidiana de las personas que fueron parte del análisis poseen características que no responden a los mismos elementos, ni tienen formas similares a las que en otros territorios se presentan. En este sentido, las comunidades de la zona norte de Chile han visto la inserción de agentes externos que buscan ejecutar proyectos productivos cercanos a sus comunidades, lo que ha enfrentado las posiciones económicas con los elementos subjetivos y significantes que poseen los grupos humanos.

En resumen, se busca generar una discusión sobre el modelo de desarrollo económico que han asumido las políticas de los distintos gobiernos en Chile.

Las contradicciones internas de este modelo se han convertido en algunos casos en generadoras de pobreza en los territorios rurales, donde la sobreexplotación de los recursos, el deterioro ambiental y la destrucción de los tejidos sociales son el reflejo de la situación que viven algunas comunidades.

En este sentido, toman relevancia las dinámicas de construcción social que éstas han generado en torno al ambiente ecológico en que se desenvuelven. Estas comunidades han estructurado conectores sociales, es decir, construyen percepciones e ideas significativas tanto individuales como grupales, elementos que están en la base de la comunidad y que han formado parte intrínseca del proceso vivido.

1

COMUNIDAD DE TOTAL

La localidad de Ttotal² se ubica en uno de los valles o quebradas transversales que van de este a oeste y que caracterizan el norte semiárido o Norte Chico en la región de Atacama. Estos valles o quebradas presentan condiciones ambientales propicias para la agricultura y la ganadería debido a los regímenes de agua existentes.

Los principales valles de la región son los del río Huasco y el del río Copiapó, los que cruzan su territorio de cordillera a mar con aguas superficiales. A diferencia de estos, la Quebrada de Ttotal surge de la emergencia de

2 / La localidad de Ttotal se articula en torno a tres sectores. Desde oriente a poniente, en el sentido que corre el cauce de la quebrada, se encuentra primero el sector de Perales, luego Bellavista y finalmente Ttotal. Este último sector alberga la mayor cantidad de viviendas y el centro cívico del poblado.

aguas que vienen en forma subterránea desde la cordillera, atravesando gran parte del territorio bajo suelo, para emerger finalmente en esta quebrada.

Este fluir de agua es característico de la región y da vida a los llamados ríos arreicos³.

Los propios lugareños cuentan que esta zona fue una reducción de grupos de familias emparentadas, los que fueron reconocidos por el gobierno colonial en el año 1634. A partir de ese momento quedó bajo el alero de dichas familias un gran territorio, con una amplia gama de recursos económicos. Gracias a ellos, hombres y mujeres mantienen estilos de vida que no han variado de forma abrupta durante más de cien años. El cultivo del olivo es uno de los referentes en los trabajos tradicionales que se han practicado. Se cuenta que los olivos fueron traídos por huestes españolas que visitaron la zona hace más de 400 años⁴.

Actualmente, la principal organización de la localidad es la comunidad agrícola de Ttotal, que agrupa a 138 comuneros y que fue fundada en 2001.

3 / El río en la localidad se podría catalogar como arreico en su parte alta, caracterizado por el no escurrimiento de aguas superficiales. En su parte baja o en la zona de Ttotal este río es endorreico, caracterizado por escurrir superficialmente, pero no logra desembocar en el mar, ya que sus aguas se infiltran o se pierden por la evaporación. Estos tipos de ríos son característicos del norte de Chile.

4 / En algunos predios se pueden observar árboles que superan los 100 años.



Aquí se puede apreciar la quebrada de Totoral. Foto tomada de poniente a oriente en el sector de Bellavista hacia Perales. Fuente: archivo fotográfico del autor.

Esta conformación oficializó los títulos de merced que la Colonia había entregado a los antiguos habitantes de este valle y el Estado chileno reconoció que existe una ocupación ancestral de estas tierras.

Es así como quedaron bajo su jurisprudencia unas 25 mil hectáreas. Esta organización es la encargada de controlar el acceso y utilización de los recursos que poseen en su territorio, así como el uso de los terrenos por las familias y la ubicación de nuevos núcleos familiares. En este mismo sentido, la organización es la que decide finalmente sobre los acuerdos legales que se realizan con agentes externos, tanto públicos como privados.

Es importante señalar que la conformación actual que tiene la comu-

nidad agrícola se realizó con personas de la localidad y personas externas a la misma, es decir, se incluyó gente que nunca había residido en ella, como amigos u otros, que los dirigentes de ese momento estimaron como miembros fidedignos de la comunidad.

En este amplio espacio de control se ha construido la historia del poblado, que ha desarrollado distintas actividades económicas adaptadas al entorno que le han permitido sobrevivir y sustentar su vida a pesar de habitar varios periodos casi aislados de los centros urbanos cercanos, construyendo una autonomía desde tiempos inmemoriales. La constante ocupación de sus distintos ambientes ha permitido el desarrollo de una particular forma de ver la vida.

Parte del poblado de Totoral y de los cerros que la rodean.

Fuente: archivo fotográfico del autor.



Históricamente, los habitantes de esta zona han tenido un contacto estrecho con el borde costero, ya sea para su establecimiento en temporadas estivales o para la realización de trabajos en la extracción de recursos marinos. Gracias a esto ha existido una ocupación permanente y esporádica de las distintas playas.

El actual territorio que posee la comunidad agrícola tiene acceso y control efectivo en la costa sólo en el poblado de Caleta Totoral o también llamada La Laguna. Esta caleta se caracteriza por un pequeño afloramiento de agua que genera un humedal antes de desembocar en el mar. El sindicato existente tiene a su cargo un área de manejo, una porción de mar exclusivo para la extracción de productos marinos. El contexto espacial y físico que han ocupado

sus habitantes ha cimentado una identidad colectiva que agrupa significados simbólicos vinculados a su vida cotidiana, elementos de suma importancia a la hora de desarrollar proyectos o ideas en sectores rurales.

Como se señaló anteriormente, durante décadas la localidad de Totoral ha permanecido en un constante aislamiento, al igual que el sector costero de la comuna de Copiapó y las comunas de Caldera y Huasco.

Se trata de lugares donde los caminos de conexión son en su mayoría de ripio o simplemente tierra, y que ante cualquier lluvia quedan intransitables. Muchas de estas localidades, incluyendo a Totoral, no cuentan con servicios básicos como energía eléctrica pública, agua potable, alcantarillado o algún medio de



Campos de pastoreo y de cultivo en Totoral.
Fuente: archivo fotográfico del autor.

transporte que permita la conexión con los poblados o ciudades de la región⁵. Existe un teléfono público, pero presenta ciertas dificultades de comunicación y es necesario que los técnicos viajen desde Copiapó a repararlo.

“En la costa la gente empezó a llegar como en los ‘70, ahí no vivía nadie y todavía son lugares de pocas personas. Ahora por lo menos algunos se han hecho de vehículos y pueden estar más comunicados, antes era peor”

(Dirigente de junta de vecinos).

5 / Información de trabajo de terreno, periodos entre los años 2009 a 2013. Actualmente, la localidad de Totoral cuenta con luz pública abastecida por una planta fotovoltaica.

A ello se suma la falta de implementos que permitan actuar en alguna situación de emergencia en la posta local, que sólo cuenta con una ronda mensual de salud. Existe una única escuela, unidocente, que llega sólo hasta sexto básico, lo que fuerza un proceso migratorio de niños y niñas hacia los centros urbanos de la región.

“Desde siempre los niños han tenido que irse, algunos han vuelto, pero la mayoría prefiere estar en Copiapó o Vallenar (...) los cabros hoy tienen nuevas ideas”

(Comunero).

A medida que las actividades económicas tradicionales se han ido perdiendo, se ha producido un abandono progresivo

Tabla 1.
Composición etaria habitantes de Totoral:
años 1982, 1992, 2002.

GRUPO EDAD	1982 N° DE PERSONAS		1992 N° DE PERSONAS		2002 N° DE PERSONAS	
	N°	%	N°	%	N°	%
0-14	22	14%	26	30%	12	15%
15-64	126	81%	41	48%	38	46%
65+	7	5%	13	22%	32	49%
Total	155	100%	86	100%	82	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del censo. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1982, 1992, 2002.

y constante de los habitantes de la localidad durante los últimos 30 años⁶.

Gracias a estos datos se puede observar que la población ha envejecido y existe una predominancia de las mujeres, quienes han asumido un papel importante en el funcionamiento y toma de decisiones dentro de distintas organizaciones locales.

El trabajo agrícola y sus actividades asociadas que antaño se realizaban hoy se encuentran supeditados a algunos predios. Si bien las actividades agrícolas han disminuido en su intensidad, éstas no han dejado de ser practicadas a pesar de que las condiciones materiales y la falta de medios de producción hacen más difícil su desarrollo.

Las principales extracciones corresponden a la aceituna y algunas frutas,

actividad que requiere menor esfuerzo físico y menor costo de producción. Asimismo, la producción de hortalizas se sigue practicando, pero a un nivel familiar, destinada prácticamente al autoconsumo, con muy baja comercialización.

En la tabla queda en evidencia cómo el ámbito de los trabajos agrícolas ha decaído profundamente en un rango de 10 años. Actualmente, la situación se ha intensificado, aunque existen elementos para paliar este fenómeno y volver a la generación de trabajos en esta área. Uno de los proyectos que busca colaborar en este sentido es la construcción de una nueva red de agua para tecnificar los riegos de los distintos predios y poder mejorar la producción.

El turismo se ha convertido en una actividad económica emergente en la localidad, por lo que algunos de sus pobladores han construido lugares

6/ Datos INE, Censo de población 1982, 1992 y 2002.

Tabla 2.
**Población de 15 años o más ocupada,
 según grupos de ocupación: años 1992, 2002.**

GRUPOS DE OCUPACIÓN	1992 N° DE PERSONAS		2002 N° DE PERSONAS	
	N°	%	N°	%
Miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos	0	0%	2	8,3%
Técnico y profesionales de nivel medio	0	0%	2	8,3%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio	1	4,2%	2	8,3%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros	22	91,7%	5	20,8%
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios	0	0%	2	8,3%
Trabajadores no calificados	0	0%	11	45,8%
Empleados de oficina	1	4,2%	0	0%
Total	24	100%	24	100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del censo. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1992, 2002.

para hospedar visitantes, así como pequeños restaurantes. A esto se suman otras actividades ofrecidas como cabalgatas por el desierto y degustación de comidas típicas, entre otras. La venta de sus productos se ve favorecida por el auge que tiene cada ciertos años el fenómeno del desierto florido, acontecimiento que también hace aflorar negocios familiares y permite el sustento durante varios meses.

De esta forma, el aislamiento que ha tenido la comunidad se ve superado en los momentos en que el desierto florido se hace presente. Es necesario destacar que este lugar posee elemen-

tos significativos para el resto de la sociedad, que sin el trabajo de estas personas, ya no existirían.

2 EL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

En conflicto ocurrido en Totoral y los territorios aledaños, surgió por la intención de la empresa brasileña MPX de instalar una termoeléctrica a carbón en la costa, vecina a la jurisprudencia de tierras que posee la comunidad agrícola de Totoral, específicamente en el sector

En la fotografía, se observa uno de los últimos crianceros de cabras de la localidad junto a uno de sus sobrinos extrayendo leche.

Fuente: archivo fotográfico del autor.



de Punta de Cachos, distante unos 30 kilómetros del poblado. Este proyecto energético sería el más grande de Latinoamérica en base a carbón y destinaría la energía producida principalmente a la gran minería del norte.

Este proyecto energético ingresó al proceso de evaluación ambiental de Atacama en 2009, en conjunto con el proyecto de construcción de un puerto de embarque cercano a esta misma zona. La termoeléctrica implicaba la instalación de seis turbinas a carbón, además del puerto de embarque y desembarque y un depósito de cenizas de 125 hectáreas.

El proceso desarrollado por los organismos ambientales siempre fue cuestionado por los pobladores, ya que los estudios presentados inicialmente por la empresa no satisfacían las exigencias

mínimas, dejando de lado muchos de los factores relevantes que determinan la contaminación que se puede provocar en un territorio. En primera instancia se buscó la fiscalización y aplicación de la normativa ambiental como forma de no aprobar el proyecto, basándose fundamentalmente en el estudio presentado. Todo esto puso en duda la veracidad de los niveles de contaminación que provocaría esta industria no sólo en Totoral sino también en las localidades costeras de la región de Atacama, lo que fue denunciado por grupos ecologistas de la región y del país.

Las preocupaciones se centraron principalmente en la contaminación atmosférica que provocaría la combustión del carbón, así como las consecuencias que traería para el suelo marino y la vegetación, ya que se trataba de

uno de los lugares donde se presenta el fenómeno del desierto florido de forma más intensa, así como una de las costas menos intervenidas por la actividad antrópica en el país, con lugares prácticamente vírgenes.

Es claro el deterioro ambiental ocasionado por termoeléctricas a carbón en distintos lugares de Chile como Topopilla, Mejillones, Ventanas o Coronel, donde la producción energética ha tenido impactos a nivel marino, terrestre y atmosférico, afectando directamente la calidad de vida de la población.

Estudios realizados en estos lugares han demostrado el aumento de los casos de cáncer (Olca, año 2015). Los conocimientos y experiencias vividas por otras comunidades afectadas por conflictos socio-ambientales levantaron dudas sobre las implicancias de la contaminación que la termoeléctrica produciría en el territorio e hicieron que muchas personas comenzaran a oponerse y cuestionar los posibles beneficios de la construcción de la planta de energía.

A esto se sumó el antiguo conflicto que existía con la Hacienda Castilla, dueños de los terrenos donde se emplazaría el proyecto por lo que desde un inicio siempre existieron grupos de personas que se opusieron a su construcción. Ellos pusieron como piedra angular dentro de sus argumentos la identidad, la memoria local y el medio ambiente.

En este proceso generaron una solidificación de los lazos internos y exter-

nos, consolidando una posición frente a la empresa a cargo de ejecutar el proyecto, eligiendo salvaguardar y mantener la vida en el territorio tal como la vivieron sus abuelos y padres.

Desarrollo

La investigación se estructuró de acuerdo a la metodología cualitativa y la etnografía jugó un papel fundamental para acercarse a la realidad del poblado. Gracias a esto se pudo acceder a la visión de los propios actores sobre su vida social y el entorno en el cual se han desarrollado.

El universo de estudio fue todo el poblado de Totoral, incluyendo los sectores de Bellavista y Perales. Al ser un poblado pequeño, se consideraron todas las viviendas, así como todos los habitantes que en el momento del estudio se encontraban en el territorio. Con este barrido del poblado se comprobó efectivamente el nivel de ocupación de las viviendas, la cantidad de personas que habitan regularmente la localidad y los terrenos utilizados para alguna actividad económica (noviembre-diciembre 2013).

Las entrevistas realizadas fueron fundamentalmente semiestructuradas y abiertas, dejando espacio para un diálogo fluido donde el investigador es parte de la conversación y puede generar empatía y confianza con los informantes.

1

MARCO CONCEPTUAL

Como se señaló anteriormente, la región de Atacama se caracteriza por vivir un proceso económico enfocado principalmente en la minería, conformando en paralelo una estructura productiva que en la región se enfoca casi exclusivamente a este sector. Esto genera un encañamiento de actividades dirigidas a las necesidades de los trabajadores y de los servicios propios de la producción minera.

Este momento histórico ha sido potenciado por la inserción en este espacio de empresas privadas, tanto chilenas como extranjeras, influenciadas fuertemente por el precio internacional del cobre. Sin embargo, también existe una variedad amplia de minerales explotados en la zona.

Es importante recalcar que a su vez, las comunidades han comenzado un proceso de resguardo de sus territorios o medio ambiente en el que se han asentado. Por ello, una forma de entender las dificultades que un agente externo genera en una comunidad es la lectura desde el modelo activos-vulnerabilidad-estructura de oportunidades (Aveo).

Las comunidades poseen elementos basales que les permiten considerar alternativas de manejo dependiendo de la estructura o contexto

social, económico y político en que se encuentren. Esto se relaciona con la estructura de oportunidades a la que un grupo social puede optar a la hora de enfrentar dificultades u otras actividades. Con el enfoque Aveo podemos ver cómo los activos de la comunidad en conjunción con la estructura de oportunidades que proporciona el Estado, el mercado y la sociedad, proporcionan caminos alternativos a las comunidades y los individuos. A partir de ellos es posible movilizar recursos para enfrentar dificultades que siempre dependen de la estructura de oportunidades que el contexto proporciona (Katzman, 1999).

Las capacidades de la comunidad para poner en movimiento sus activos están directamente relacionadas con las estructuras significativas que estos individuos construyen en su espacio físico. En este sentido, la capacidad para oponerse a una problemática socio-ambiental está relacionada con los constructos simbólicos que la comunidad maneja. A partir de ello son capaces de construir un imaginario idóneo sobre sus condiciones de vida y sobre su presente, lo que les permite interpretar las futuras formas que la comunidad tomará.

Estas capacidades instaladas son las que les permiten enfrentar las dinámicas externas y sobreponerse a estas circunstancias con elementos que la propia comunidad ha desarrollado o desarrolla en el proceso.

Resultados

Las carencias y necesidades de los habitantes de las distintas localidades costeras como Totoral fueron usadas por los agentes empresariales de la termoeléctrica Castilla para viabilizar su instalación. Con ella, las carencias materiales serían resueltas y existirían más y mejores oportunidades de trabajo en la zona, lo que posicionaría al poblado como un espacio para la residencia de los nuevos trabajadores. Estas promesas tomaron la forma de ofertas en dinero, becas para estudios y compromisos de capacitación para hombres y mujeres, entre otros. Una de las caletas que alberga un sindicato de pescadores y buzos mariscadores cercana a la localidad fue uno de los primeros grupos que aceptaron los ofrecimientos de la empresa MPX, valorizando monetariamente la zona de manejo exclusivo de recursos que poseían.

Esta situación llevó a conflictos internos en la comunidad, así como entre familiares, lo que afectó la vida social y cotidiana del poblado. Las relaciones tan cercanas entre localidades y personas fueron generando distintas acciones de confrontación entre dirigentes y por tanto, entre distintas familias.

“Hay amigos, parientes, que se dejaron de hablar. Hubieron discusiones en las reuniones cuando

se buscaba llegar a acuerdo con Castilla”

(Miembro junta de vecinos).

Sin embargo, la vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad fue contrarrestada con la movilización de sus recursos internos, los que les permitieron tomar decisiones sobre la amenaza externa. Esta capacidad es parte intrínseca de la comunidad y abarca elementos propios de la subjetividad de los individuos, que construyen significados directamente relacionados con el entorno ambiental en el cual han vivido.

“Los que vivimos acá sabemos lo que es Totoral, nos criamos acá, mis papás y abuelos. Mientras, otros que no viven acá querían vender, por eso nuestra voz era importante”

(Miembro junta de vecinos).

Las enemistades creadas por los agentes externos también se manifestaron en los poblados costeros, donde los distintos grupos de pescadores aglutinados en sus respectivos sindicatos fueron tomando posición, lo que igualmente derivó en conflictos internos y entre localidades.

Estas situaciones de disenso fueron parte de las estrategias que la empresa utilizó, las que asociadas a la entrega directa de dinero a comuneros y pescadores, generaron más roces entre las personas. En este mismo sentido

se comenzaron a realizar contratos y entrega de becas a hijos de pescadores, específicamente en Caleta Pajonales, donde viven varias personas del poblado de Totoral y amigos cercanos. Esta situación indignó a quienes se oponían al proyecto, generando disputas y encaramientos públicos.

“(...) los de Caleta Pajonales le pusieron precio al área de manejo, pero ahí van a quedar sin nada cuando se contamine toda la costa, no van a tener nada”
(Vecino de Totoral).

Como ya se dijo, la comunidad agrícola fue constituida inicialmente por personas que no pertenecían a la localidad junto con otras que sí eran locales. La disputa por la construcción de la termoeléctrica dejó en evidencia estas raíces y produjo una separación entre quienes habitan permanentemente en la localidad y quienes van esporádicamente.

Aceptar o no aceptar el proyecto definió el bando en el que se encontraban las personas. Toda esta situación fue aprovechada por los agentes empresariales para profundizar la indignación interna, insistiendo en las carencias de las personas y la oportunidad única que significaban los beneficios económicos directos que este proyecto traería.

De igual manera, esta situación fue tomada por el grupo contrario al proyecto como una oportunidad de cerrar

filas y ser aún más insistentes en sus peticiones. El aislamiento al que se hizo referencia anteriormente fue simbolizado y significado por las personas desde una perspectiva positiva, ya que consideraron que era importante defender de manera organizada el ambiente cotidiano en el que transcurrían sus vidas.

“La tranquilidad de acá es lo más bonito y lo más me gusta, bueno, la costumbre igual, cuando voy a Copiapó ando rápida para venirme luego, hago mis cosas y me vengo rapidito”
(Miembro junta de vecinos).

Este relato habla de la importancia social y psíquica que representa para las personas un territorio en el cual se sienten cómodos y donde les satisface residir. Esto es parte del carácter emocional que también está en juego en sus relatos, en que los sentimientos hacia sus pares han conformado la comunidad.

1

LA PROFUNDIZACIÓN JUDICIAL

Con los procesos judiciales en curso, las entrevistas de los actores involucrados y los alegatos solicitados, sólo había que esperar que el Poder Judicial tomara una decisión definitiva sobre la ejecución o no del proyecto energético.

“Yo pedí la palabra y hablé en nombre de mi pueblo, le pedí al juez que pensara en nosotros y le entregué un presente, parece que eso no se podía hacer...”

(Comunera de Totoral).

En general, la percepción de la comunidad sobre la resolución judicial no era muy alentadora, pues se pensaba que las maniobras e influencia que poseía la empresa y que había demostrado durante todo el conflicto se reflejarían en equilibrar la balanza hacia su lado. Si bien los alegatos y los argumentos de los abogados de la comunidad y de los representantes fueron de gran importancia, los intereses productivos asociados a este proyecto energético eran mucho mejor considerados que las necesidades o exigencias de las localidades.

2

UNA HISTORIA COMUNITARIA QUE NO ACABA. EL FUTURO Y PASADO COMO ESTANDARTE

La larga data de origen de la localidad permite tener una visión panorámica sobre el significado especial que tiene el poblado, sus tradiciones y sus vínculos en la vida de cada una de las personas, más allá de que se encuentren viviendo o no en el territorio. Existe un vínculo estrecho que mujeres y hombres han buscado hacer perdurar en el tiempo.

Este artículo es un ejemplo de cómo las personas reaccionan contra los poderes institucionales en momentos en que sus derechos como ciudadanos se ven amenazados, en un lugar en que existe una sensibilidad especial por el medio ambiente y en el cual las organizaciones sociales siempre han buscado el beneficio de la comunidad, lo que permitió una organización más fluida y una participación activa en el proceso histórico que vivieron. A través de la organización lograron influir en el conflicto, sensibilizando a más personas sobre sus problemas y el futuro que les esperaba.

Las distintas estrategias y acciones desarrolladas por las personas organizadas que se oponían al proyecto pueden ligarse con los procesos históricos internos que han vivido; sus historias de vida han estado vinculadas a la superación de las dificultades y con ello han llenado de significado su territorio, sus espacios, sus recursos, es decir, todo el espacio ecológico en el que se han desarrollado.

A pesar de que el proyecto no se llevó a cabo, queda la sensación en el ambiente de que los conflictos internos aún no amainan, lo que deja en evidencia que se buscó deteriorar la comunidad y su tejido social. Algunos resabios de las disputas entre familias aún persisten.

Es sumamente importante que la comunidad recomponga sus lazos tal como intenta hacerlo actualmente,

con actividades comunitarias como campeonatos deportivos y la cooperación entre vecinos para mejorar algunos espacios públicos que se encontraban abandonados.

Esta recomposición social es necesaria, ya que deben seguir fortificando sus organizaciones. La cantidad de recursos disponibles, entre ellos el más importante, el agua, es y ha sido motivo de conflictos a lo largo de Chile, así que no es de extrañar que en un futuro cercano deban volver a enfrentar agentes externos que buscan instalarse cerca de sus territorios.

3

DISCUSIÓN

Este estudio se ha sustentado en el trabajo etnográfico realizado en tres oportunidades en la localidad de Totoral. Su enfoque fue el de la antropología social para determinar las características del conflicto socio-ambiental y aquellas que lograron detener la construcción de la termoeléctrica Castilla, una de las más grandes de Latinoamérica.

Gracias a estas referencias metodológicas y teóricas se pueden llegar a comprender las conductas e ideas que motivaron a la población a oponerse, una decisión que no estuvo mediada solamente por elementos económicos o exclusivamente ambientales, sino

que fueron de la mano con la historia social que han construido mujeres y hombres en la ocupación de este privilegiado espacio ambiental.

El fracaso que experimentan muchos de los proyectos que se buscan ejecutar en territorios como Totoral tiene que ver con que tienden a dejar de lado los aspectos significativos e identitarios que las personas han construido con sus espacios ecológicos cotidianos.

La implementación de proyectos que no consideran los aspectos relevantes de la población, es decir, sus modos de ver el espacio, sus vidas u otros, ha traído aparejada una injusticia en el dominio ambiental, ya que existe una distribución desigual de los riesgos y costos que la población local tiene que asumir.

Esto evidencia que dichas comunidades se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ya que están a merced de decisiones asimétricas a las que deben subordinarlas visiones locales.

Debido a esta falta de comprensión de las situaciones locales, los proyectos productivos, extractivos o de otra índole sufren constantes cuestionamientos, lo que se ha visto reiteradamente a nivel nacional en los últimos años, con manifestaciones sociales que han caracterizado las discusiones sobre la instalación de estos proyectos.

Una cuestión que debe considerarse fundamentalmente es que hay que comprender a las localidades que

han estado aisladas durante décadas desde sus propias condiciones de subsistencia a lo largo de los años, las que han dependido principalmente de los recursos naturales de sus entornos, lo que da origen a un estrecho vínculo con su flora y fauna.

Así las cosas, resulta lógico que las personas sientan amenazadas sus prácticas cotidianas con la instalación de estos proyectos. No considerar esta evidencia trae consigo el fracaso de los proyectos impuestos exógenamente.

Es entonces relevante comprender que las comunidades rurales se encuentran en una posición cercana a la de los pueblos indígenas, ya que sus propias lógicas internas nos hablan de un modo de vida disímil del que se vive en los centros urbanos. Esta lógica local provoca un choque de ideas con los pensamientos culturales que se buscan imponer y que son culturalmente aceptables desde los centros urbanos.

Es posible observar cómo varios de los proyectos económicos productivos siguen contribuyendo a la profundización de la pobreza en nuestro país.

La contaminación, la privatización de grandes extensiones de tierra y la sobreexplotación de recursos, entre otros factores, han contribuido a que el desdoblamiento de las zonas rurales se intensifique y a la marginación de esta población en otros lugares.

En el norte de Chile es evidente cómo las mineras han sobreexplotado

distintas cuencas hídricas⁷, deteriorando los modos de vida campesinos y dificultando la permanencia de prácticas económicas familiares que han sido desarrolladas por cientos de años.

La posición social y las ideas preconcebidas que tienen los agentes externos dejan de lado las complejidades socioculturales que tienen las comunidades en su relación tanto con otros individuos como con su medio físico. Esto les impide darse cuenta de los matices que posee la cultura y sus distintas formas de abordar los problemas, a los que evalúan como un conocimiento carente de lógica o validación dentro del razonamiento económico actual.

Lo anterior busca dejar de manifiesto que los elementos culturales de las comunidades no son estáticos, que las dimensiones sociales se desdibujan y sobreponen unas a las otras y que ninguna esfera está por sobre las demás, a diferencia de lo que ocurre en la cultura metropolitana, donde la economía es el elemento aglutinador.

En las sociedades rurales o más ligadas a la naturaleza, las esferas sociales están en un constante diálogo con las otras, es decir, con la identidad, la memoria, la política, sus organizaciones, sus creencias religiosas, entre otras, para las que se busca establecer

7/ Caso de Quillagua, en la región de Antofagasta.

equilibrios que permitan a los individuos desenvolverse en su medio.

Por otra parte, considerando el marco teórico que proporciona la perspectiva Aveo, se pudo observar que existe un cúmulo de activos en la comunidad, principalmente el que dice relación con el capital social que han erigido a partir de conflictos anteriores y experiencias de vida en la localidad, los que han permitido la generación de un proceso de movilización en el que se desplegaron las organizaciones sociales que buscaban hacer frente a la posible contaminación de su entorno inmediato.

Las organizaciones fueron las que promovieron la protección y la unión entre las personas y las que permitieron superar la vulnerabilidad a la que se vieron enfrentadas cuando fueron testigos de cómo los agentes privados eran capaces de permear los aparatos evaluadores del Estado para ejecutar el proyecto.

Esta falta de credibilidad hacia las autoridades del Estado y de la empresa (mercado) generó una limitada estructura de oportunidades, donde los resquemores fueron acrecentándose por parte de la comunidad. De esta forma, la estructura organizacional fue tomando el efecto deseado por sus miembros.

Su identidad y la significación que entregan al medio en que viven fueron los elementos que sacaron a la luz los riesgos del proyecto, que traería mayores daños que los señalados por los técnicos.

Gracias a este proceso fueron conscientes del peligro y emprendieron acciones para evitarlo. Su historia y su espacio vital se vieron amenazados, puestos en riesgo, lo que fue significativo para sus habitantes no sólo en sus conductas cotidianas sino también en los aspectos psicológicos, poniendo en alerta sus herramientas sociales.

Allí se vio reflejado el capital social de la comunidad, donde la confianza, la cooperación y la reciprocidad estuvieron presentes entre las personas que se unieron. Esto no quiere decir que el fenómeno de cohesión se haya dado de manera nítida o pura, pero las personas se fueron aglutinando en diferentes niveles sin perder su eje de acción, que era evitar la instalación del proyecto.

Las organizaciones se fueron uniendo, cooperando unas con otras y generando con ello redes de acción con otras organizaciones de los centros urbanos y de la capital, estableciendo canales de comunicación donde existía una retroalimentación constante a pesar del aislamiento de Totoral, ya que siempre había alguien dispuesto a traer o llevar información y establecer contactos.

Varios fueron los triunfos asociados a la detención de la construcción de la termoeléctrica. En primer lugar, el Estado debió realizar evaluaciones relativas a la legislación ambiental, ya que fue cuestionada su eficiencia. Esto motivó cambios en la estructura de evaluación de proyectos y condujo

al reemplazo, en 2013, de la Conama⁸ por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, comenzó la revisión de los planos reguladores de la región para asegurar las características que debían tener las distintas zonas y estructurar una visión de región a futuro.

La enseñanza que quedó después del triunfo de este grupo de personas fue que la opinión de la comunidad es sumamente relevante y que las experiencias y conocimiento que son capaces de manejar a nivel local pueden ser considerados de forma activa en las decisiones de carácter ambiental que se tomen a futuro.

La participación de las comunidades es fundamental, ya que allí se encuentran los principales pasos y elementos necesarios para implementar proyectos en zonas vulnerables.

El camino de la judicialización que tomó la comunidad para resolver el conflicto trajo consigo una variada gama de críticas, pues algunos los catalogaron como caprichosos y egoístas por tener intereses personales por sobre los beneficios que el proyecto traería a muchas más personas y al país en general.

Sin embargo, proteger su entorno siempre fue considerado más importante para este grupo de personas que la generación de beneficios inmediatos, lo que fue difícil de entender para los entes empresariales. La comunidad entregó

una lección de honestidad y superación de las adversidades en el proceso vivido.

Además, la invocación del sistema judicial para resolver el conflicto dejó en una posición de incertidumbre a la comunidad, pues no sabían si esto abriría la posibilidad de una derrota. En esa línea, fue muy relevante que la comunidad haya recurrido a la Constitución Política de la República, específicamente a su artículo 19 No.8, que ha establecido el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en los siguientes términos:

“La Constitución asegura a todas las personas: 8. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no se vea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”

(Constitución Política de Chile, artículo 19).

A través de esta disposición legal se buscó desestimar el proyecto termoeléctrica Castilla, emprendiendo un camino judicial que nunca había sido acogido y para el que no existía evidencia alguna de un fallo a favor de las comunidades.

Finalmente, el fallo a favor de la comunidad fue acogido con regocijo por

sus habitantes, simpatizantes y quienes colaboraron en este largo proceso. Sin embargo, a nivel comunicacional y de opinión pública el fallo fue cuestionado ampliamente, poniendo en discusión la pertinencia de la Corte Suprema sobre proyectos de inversión privados.

El fallo emitido por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 28 de agosto de 2012 es un hito en la historia de la región, pues abre nuevas formas de comprender jurídicamente las controversias socio-ambientales. Éste estableció que la industria que se intentaba construir era contaminante y que tanto el puerto de embarque como la central termoeléctrica formaban parte de un mismo proyecto, por lo que todos estos elementos debieron evaluarse en conjunto. Con esta decisión se puso atajo a una de las mayores amenazas que ponía en peligro la vida de las comunidades y el medio ambiente de esta zona de Atacama.

El fallo de la Corte Suprema chilena, puso en evidencia que existen elementos que están por sobre lo puramente técnico, dentro de los cuales hay otros ámbitos de la vida social de las personas que están en juego en este proceso y que son de igual o mayor importancia.

Por vez primera se resolvía un fallo luego de entrar en vigencia la Ley General de Bases del Medio Ambiente, a favor de la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación, antes que la contaminación afecte el lugar y sea

producida en el territorio, ello bajo el principio preventivo.

Esta resolución sorprendió al mundo financiero, económico y político, ya que la legislación ambiental en ese momento funcionaba para viabilizar los proyectos de inversión, poniendo en un segundo lugar el cuidado del medio ambiente y por tanto, la salud de las personas.

Sin embargo, frente a los cuestionamientos políticos y económicos de ciertos grupos empresariales, se demostró con hechos los errores de procedimiento que tenía el sistema de evaluación y los mecanismos por medio de los cuales se aprobaban las inversiones privadas.

La falta de acuerdo con la comunidad en etapas preliminares, extendiendo el conflicto a instancias técnicas, institucionales y jurídicas, solo hicieron acrecentar el conflicto. Con ello se evidenció la falta de espacios de participación reales de las comunidades en las decisiones de proyectos en sus territorios.

Es menester del Estado lograr que estas poblaciones rurales, aisladas y con una alta vulnerabilidad debido a su situación de pobreza puedan paliar el déficit existente de mano de obra, permitiendo que sus producciones o actividades económicas se puedan mantener o bien complementarse con otras fuentes de ingresos locales.

La transferencia de tecnología, equipamiento agrícola u otros per-

mitirían un desarrollo sostenible de la localidad y del entorno en el cual se encuentran inmersos.

La potencialidad que tiene el desierto florido en sus tierras y las innumerables cualidades estéticas que lo hacen único son algunos de los elementos importantes que salen a la luz hoy en día. Sin embargo, este fenómeno natural no es habitual, por lo que es necesario potenciar otros elementos que puedan ser controlados por las personas.

Las lógicas económicas de corto plazo sólo entregan más empobrecimiento y vuelven los costos ambientales y sociales más grandes que los beneficios, por lo que se hace necesario pensar y establecer un modelo de desarrollo regional.

Este desarrollo debe tener como eje central al ser humano y su relación con los ecosistemas que habita. Así se podrían establecer los límites de los impactos que se aceptarán, las formas de participación que tendrá la comunidad, los tipos de utilización de los territorios y las fuentes energéticas que se desarrollarán según las distintas

regiones y necesidades de las mismas, entre otros. Además, esto permitiría establecer los tipos de explotación de recursos y por tanto, el futuro que se busca para las generaciones venideras.

Estructurar la sociedad a partir de las coyunturas económicas internacionales ha llevado a desdibujar los elementos que definen a la sociedad a nivel nacional, homogenizando los territorios y perdiendo sus características particulares.

En algunos casos, es necesario cambiar la matriz de exportación de materias primas por una que privilegie la capacidad creativa de las personas, potenciado la educación en todos sus niveles y ampliando el abanico de oportunidades a los sectores con menos capacidad de acceso.

Se hace necesario evaluar las características que la gran minería está tomando en la zona norte de Chile. Los costos que deben asumir los poblados y las comunidades en las distintas cuencas hidrográficas deben ponerse en la balanza, junto con consecuencias como el desabastecimiento de agua para consumo humano y agrícola.

Bibliografía

Annan, K. (1999). *An increasing*
Aguirre Baztan, A. (1995). “Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural”, Editorial Barcelona, España.

Barfield, T. (1997). “Diccionario de antropología”, Siglo XXI Editores, España.

Constitución política de la República de Chile.

Cordero, M. Repetto, P. Arbour, M. (2013). “Lo que nos enseña el 27F en Chile sobre el impacto de un desastre natural en la salud infantil”. *Revista Chilena de Pediatría*.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 1982, 1992, 2002.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca) (2015). “Termoeléctricas: institucionalidad, impacto y calentamiento global. Rutas territoriales rumbo al carbón cero”. Documento elaborado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca gracias al apoyo de pequeñas subvenciones de la Red Internacional sobre el Carbón (International Coal Network/www.endcoal.org) administrado por el The Sunrise Project (Australia).

Subdere (2012). “Localidades aisladas”.



2.

Las consecuencias ocultas de la contaminación en zonas urbanas: cómo la segregación social expone a la población más vulnerable a mayores niveles de contaminantes

Pablo Moya Arias¹,

Pontificia Universidad Católica de Chile
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable²



Resumen

La segregación social dentro de la zona urbana de Copiapó expone una problemática de injusticia ambiental donde la población más vulnerable se ve desplazada espacialmente y como consecuencia se ve potencialmente expuesta a mayores niveles de contaminación. Esta situación es causada por una mala planificación territorial que no considera ni consideró aspectos de contaminación ambiental en las nuevas zonas a poblar. Gran parte de esta contaminación se encuentra asociada a los más de 30 relaves de origen minero que se encuentran en el área urbana y periurbana de Copiapó. En este trabajo se analiza la distribución de metales pesados en suelos y polvos de calles de zonas, como también el enriquecimiento respecto a la línea base natural de metales del sector. Se demostró que la distribución de metales dentro de la ciudad perjudica a los sectores más vulnerables, exponiéndolos a mayores concentraciones de metales pesados. Potencialmente, existen múltiples consecuencias en la salud debido a la contaminación, pero en este trabajo se abordan las consecuencias para la población que a primera vista se encuentran ocultas.

Palabras clave: relaves mineros, contaminación, metales pesados, segregación residencial.

1/ Ingeniero Civil, Diploma en Ingeniería Ambiental. Artículo basado en la tesis *Identificación de fuentes contaminantes en suelos y polvos de calle: el caso de Copiapó, Chile*, realizada para optar al título de Ingeniero Civil y Magister en Ciencias de la Ingeniería. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ingeniería. Profesor guía: Pablo Pastén. Santiago, 2017.

2/ El autor agradece al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus), financiado por el programa Fondap 15110020, y a Marina Coquery de Irstea en Francia por su apoyo en la investigación.

Introducción

Los conflictos socioambientales en Chile poseen una larga historia de ocurrencia; entre el año 2010 y 2012 se reportaron en todo el país al menos 97 de estos conflictos, de los cuales 35 se relacionan con la minería extractiva (INDH, 2012). Sólo en la región de Atacama se reportaron 16 conflictos socio-ambientales entre la ciudadanía, los privados y el Estado. Un caso relevante en esta región es la afectación de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud o el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, debido a las emisiones de la fundición de cobre Hernán Videla Lira (Paipote) que han afectado a las comunas de Tierra Amarilla y Copiapó (INDH, 2012).

La minería ha sido la principal actividad económica de Chile y su desarrollo a lo largo del tiempo no ha estado exento de consecuencias para el medio ambiente. Un ejemplo del legado de la minería en Chile es la cantidad de relaves mineros presentes en el país. Un relave minero corresponde al material sobrante del proceso realizado para extraer el metal de interés económico desde la roca; además, el relave posee todos los restos de aditivos utilizados para el procesamiento del mineral como también otros metales potencialmente tóxicos para la salud de las personas. Según el ca-

tastro de relaves mineros realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, existen 696 relaves a nivel nacional, de los cuales 436 se encuentran no activos y 148 abandonados, es decir, sin medidas de cierre que los mantengan estables física y químicamente. En el caso de la región de Atacama existen actualmente 155 relaves y 22 de ellos se encuentran en situación de abandono (Sernageomin, 2015). Este hecho demuestra la alta actividad minera en la región, coincidente con la exportación de este sector económico, que en mayo de 2017 correspondió al 96,6% del total regional (INE, 2017).

Copiapó, la capital de la región de Atacama, ha sufrido diversos desastres socio-naturales a lo largo de su historia, los que incluyen terremotos, inundaciones, aluviones y sequías. Pero la población identifica la existencia de un desastre más, distinto a los anteriores y caracterizado por ser omnipresente y constante en el tiempo, un desastre subyacente y antropogénico: la contaminación de origen minero (Fundación Superación de la Pobreza, 2016). Esta percepción se agrava durante otros desastres naturales, como aluviones o terremotos, cuando la población se ve expuesta a potenciales amenazas físicas o químicas debido a la gran cantidad de relaves mineros inadecuadamente contenidos y ubicados en las zonas urbanas y periurbanas de Copiapó.

1

RELAVES URBANOS EN COPIAPÓ

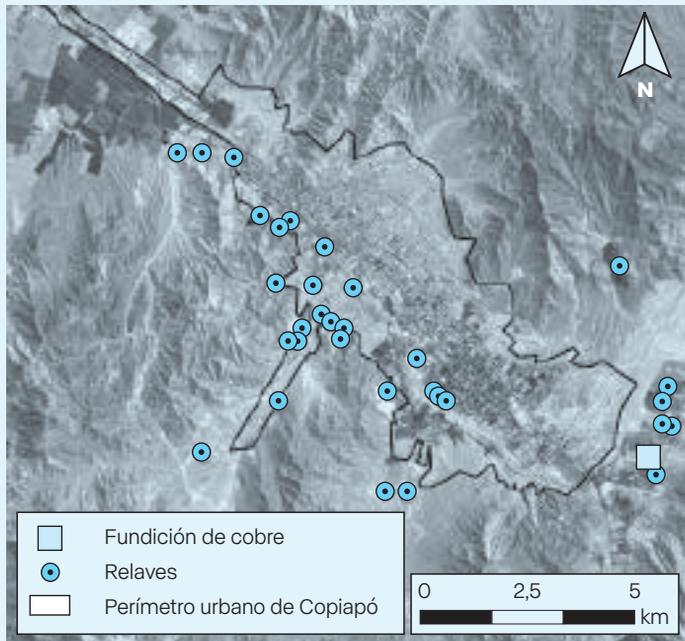
Existen registros que indican que desde la época incaica y prehispánica se desarrollan actividades mineras en Copiapó (Zori & Tropper, 2013; Zori, Tropper, & Scott, 2013), las que hasta el día de hoy continúan representando la principal productividad econó-

mica de la ciudad. Debido a un explosivo crecimiento demográfico en el siglo XIX y a causa del crecimiento de la industria minera, se ha entrelazado la expansión urbana con los relaves mineros abandonados en la ciudad. Como resultado existe una ocupación del territorio que en forma paralela es de carácter residencial-urbano y posee sectores destinados al almacenamiento de residuos mineros y zonas industriales (figura 1).

Figura 1.

Relaves mineros y fundición de cobre en Copiapó

La mayor parte de los relaves mineros se encuentra dentro del perímetro urbano o en los sectores periurbanos. La fundición de cobre Paipote se ubica a 8 km del centro de la ciudad.



Fuente:
Moya, 2017.

Existen dos grandes grupos de fuentes contaminantes en Copiapó, las emisiones industriales mineras (entre las que se incluye la fundición de cobre) y los relaves. Para el caso de las emisiones de la fundición de cobre, modelaciones de dispersión de contaminantes demostraron que dependiendo de las condiciones de viento, las localidades más afectadas son Tierra Amarilla y Copiapó (Williams & Brown, 1994). Se ha estimado también que las emisiones de arsénico de la fundición podrían tener al menos una dispersión a nivel regional, alcanzando por el norte a la localidad de Chañaral y por el sur a la ciudad de Vallenar (Gidhagen, Kahelin, Schmidt-Thomé, & Johansson, 2002). Ambos estudios señalan a esta zona como la más afectada a causa de las emisiones de la fundición de cobre Paipote, lo que concuerda con la existencia de una zona saturada por anhídrido sulfuroso y con el amplio registro de eventos críticos de saturación en Tierra Amarilla. Previo al proceso de modernización, que terminó el año 2000, se contaban más de 400 eventos por año y para el año 2011 se alcanzaron aproximadamente tres eventos anuales (INDH, 2012).

Si el material de relave no se encuentra contenido adecuadamente, puede ser transportado a través de la ciudad debido a la acción erosiva del viento. Estudios en la ciudad han analizado las excesivas concentraciones

de metales pesados que existen en los relaves mineros (Carkovic et al., 2016; Cenma, 2012; Sernageomin, 2016). Diversos mecanismos de transporte trasladan los contaminantes desde estos residuos mineros hacia los sectores aledaños y los más relevantes corresponden a fenómenos naturales como la lluvia, los aluviones y el viento.

Las precipitaciones sobre el material de relave producen lixiviación de metales hacia los suelos y cuerpos de agua cercanos (Sims, Hooda, & Gillmore, 2013). Los aluviones, aunque son eventos ocasionales, se convierten en un potencial riesgo para los relaves que se ubican en los cauces principales de los aluviones. Debido a esto, el flujo de lodos y agua erosiona los relaves, dispersando el material.

Un caso emblemático fue el ocurrido en marzo de 2015, cuando algunos relaves ubicados en la ribera del río se vieron afectados por el flujo aluvional. Sin embargo, debido a la alta cantidad de lodos, los contaminantes del material de relave arrastrado se diluyeron y no presentaron un riesgo para la población (Cedeus, 2015).

Por último, el mecanismo de transporte más prevalente para el material de relaves es el viento. Éste erosiona constantemente la superficie descubierta de los relaves, re-suspendiendo el material fino y transportándolo a los sectores cercanos. En otros países, estudios han reportado dispersiones de hasta 1.800 metros desde el depósito

de relave (Davies & White, 1981). Estos tres mecanismos de transporte dispersan el material hacia las zonas urbanizadas cercanas y exponen así a la población a altas concentraciones de metales que pueden afectar su salud.

Diversas consecuencias para la salud se atribuyen a la ingesta de metales pesados como el arsénico [As], cobalto [Co], cobre [Cu], mercurio [Hg], plomo [Pb] y zinc [Zn] (Plumlee & Ziegler, 2003). Por ejemplo, cuando ocurren exposiciones a altos niveles de arsénico, se producen problemas en el sistema digestivo, hemorragias y edemas pulmonares; además, este elemento es considerado como un agente cancerígeno en condiciones de exposición crónica. Por otro lado, si bien el cobre es un elemento esencial en la dieta, altas ingestas o inhalaciones afecta el sistema intestinal, el hígado las células sanguíneas.

Uno de los metales más tóxicos es el mercurio y la exposición crónica conduce a desórdenes en el sistema nervioso central y daño en riñones y pulmones. Cuando ocurren exposiciones agudas genera daños severos al sistema nervioso central y periférico, sistema gastrointestinal y fallas renales. Este metal también es un teratógeno, es decir, produce malformaciones en fetos cuando la madre se ve expuesta a él durante el periodo de gestación. Por último, la ingesta de plomo es muy tóxica para fetos y niños, ya que es un neurotóxico que genera malforma-

ciones y retraso mental. En adultos, el plomo afecta la presión sanguínea, causa infertilidad, trastornos nerviosos y afecta la concentración y la memoria, además de ser cancerígeno.

A pesar de la amplia evidencia de las consecuencias para la salud y de la toxicidad de estos elementos, en Chile no existe una norma de calidad de suelos que regule la cantidad aceptable de metales en este componente del medio ambiente. Un caso emblemático en el país es el de Polimetales de Arica³, tras el cual se estableció una norma que regula la cantidad de metales pesados en polvos y que es aplicable sólo en el sector afectado. Lo anterior indica que a nivel nacional existe una conciencia del daño potencial de estos metales, pero no se han dictado las normas necesarias para la regulación de suelos y polvos del resto del país.

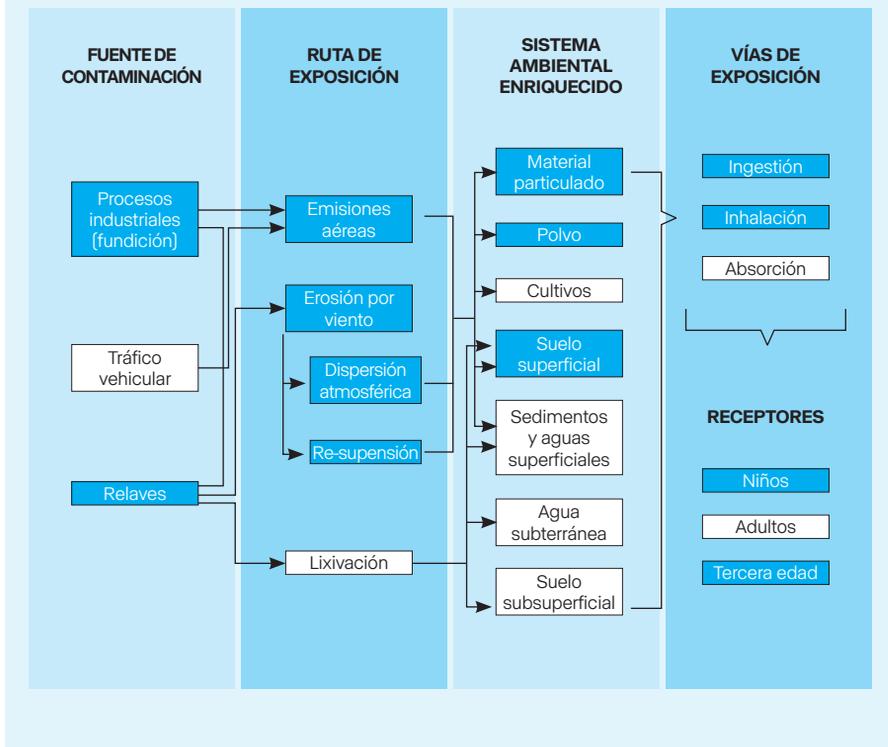
El entrelazado urbano-industrial del territorio ha producido que las comunidades se vean expuestas a riesgos debido a la contaminación de origen minero. El diagrama de la figura 2 muestra cómo la población que habita el territorio urbano-industrial puede exponerse a contaminantes mediante diversas rutas de exposición como

3/ Caso de contaminación urbana en que el traslado de residuos mineros a través de la ciudad de Arica favoreció la dispersión del material rico en metales pesados, enriqueciendo los suelos y polvos urbanos y afectando la salud de la población en sectores específicos de Arica.

Figura 2.
Diagrama de exposición de la población en ciudades de origen minero

Se destacan las secciones predominantes para la ciudad de Copiapó.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Cedeus, 2015.



son la ingestión, inhalación y absorción cutánea de materiales sólidos. Esto corresponden a componentes ambientales dentro de la ciudad que se encuentran enriquecidos con metales (Carkovic et al., 2016; Cedeus, 2015; Cenma, 2012, 2016), de los que los

más relevantes para este trabajo son el material particulado, los polvos de calles y los suelos urbanos. Finalmente, los contaminantes dentro de estas matrices alcanzan a los receptores más vulnerables, que corresponden principalmente a niños y adultos de la tercera edad.

2

¿EXISTE CONTAMINACIÓN EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES DE COPIAPÓ?

Investigaciones previas han demostrado que los polvos de calle y los suelos de la ciudad poseen altas cantidades de metales pesados (Carkovic et al., 2016). Este estudio analizó muestras de suelos urbanos obtenidos en zonas agrícolas, parques y plazas de Copiapó, con el objetivo de estudiar el efecto de las acciones humanas, principalmente de las actividades mineras.

Para entender cómo los metales pesados se distribuyen en la ciudad, se realizó un muestreo en una malla regular de 1 km², buscando una representación espacial completa de la ciudad. Los análisis realizados indicaron que metales como el cobre, arsénico, zinc y plomo (todos relacionados a actividades mineras) se encontraban en altas concentraciones tanto en los polvos de calle como en los suelos de la ciudad. También se demostró la existencia de distribuciones espaciales diferentes para cada metal, indicando que su origen puede atribuirse a las múltiples fuentes de emisión. Ante este estudio surgieron nuevas interrogantes relacionadas al origen de los metales: ¿se generan naturalmente o son antropogénicos?

3

SEGREGACIÓN ESPACIAL COMO EXPRESIÓN DE LA SEGREGACIÓN SOCIAL

El caso de Copiapó y de la región en su conjunto da cuenta de una realidad dual donde un modelo de desarrollo económico se enfrenta con las condiciones de vida de sus pobladores.

En este sentido, la actividad extractivista minera ha promovido el crecimiento urbano y demográfico de la ciudad. Sin embargo, la poca regulación del territorio y su escasa planificación territorial han favorecido la segregación espacial en la comuna. Este concepto refiere a cómo dos grupos de la sociedad viven en sectores diferentes del área urbana, lo que genera barrios agrupados según carácter socioeconómico (PNUD, 2017). Estos sectores segregados y agrupados se caracterizan, en el caso de los estratos bajos, por estar ubicados en áreas de la periferia y en altas densidades de población (Sabatini & Julio, 2010), que en el caso de Copiapó coinciden con el entramado de emplazamientos urbanos y relaves mineros. Ejemplo de ello es la proliferación de campamentos en los sectores periféricos de Copiapó.

Según el catastro de campamentos del año 2016 realizado por TECHO Chile, sólo en la comuna de Copiapó

existen 25 campamentos, lo que la convierte en la cuarta comuna a nivel nacional con mayor cantidad de este tipo de viviendas.

El fenómeno de la segregación residencial en las zonas urbanas es la expresión de las desigualdades del país en el territorio (PNUD, 2017) y acarrea como consecuencia la segmentación de la ciudad, vinculando directamente, en este caso, la exposición a contaminantes con los grupos más vulnerables de la población.

Chile es el país con ingresos más desiguales dentro de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); el ingreso del 10% de la población chilena más rica es 26 veces el ingreso del 10% más pobre (OCDE, 2016; OECD, 2015). Esta situación se repite en las regiones del país y en especial en Atacama, donde según mediciones de la encuesta Casen 2015, el 26,3% de la población regional se encuentra en situación de pobreza multidimensional y la ubica como la segunda del país en dicho índice. Cabe destacar que la pobreza por ingresos es de 6,9%, lo que instala a la región en el cuarto lugar con menos pobreza por ingresos a nivel nacional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

Esta disparidad frente a las diversas mediciones de la pobreza da cuenta de cómo ésta se expresa dentro de la región, donde el ingreso monetario no corresponde a la mejor estimación de la

pobreza sino que lo es el enfoque multidimensional. Esto, a consecuencia de los altos ingresos por las actividades productivas en la región, que terminan por encubrir la real pobreza de Atacama.

Múltiples estudios realizados en Copiapó han demostrado la presencia de metales pesados en los distintos componentes ambientales de la ciudad (Carkovic et al., 2016; Cedeus, 2015; Cenma, 2012). En este trabajo se analizará el enriquecimiento de metales pesados en la ciudad con respecto a la condición natural de la zona, focalizando en los sectores periféricos donde viven los grupos más vulnerables y donde también se ubican los relaves mineros. De esta manera, se analizarán los escenarios de exposición a contaminantes que se observan desiguales para la población y las potenciales consecuencias en diversos aspectos de la vida de las personas.

Desarrollo

Este trabajo se centró en la contraposición de las condiciones naturales de la región con la cantidad de metales pesados en suelos urbanos y polvos de calles de Copiapó. Se obtuvo el enriquecimiento de metales en las zonas urbanas respecto a la condición natural y también cómo se distribuye espacialmente por la ciudad, para luego analizar las con-

secuencias socio-ambientales para la población vulnerable.

- **Metales pesados de origen natural versus urbano:** En las zonas periurbanas alejadas de posibles fuentes de contaminación se obtuvieron muestras de suelo naturales para conocer la línea base de metales en la zona. Al comparar estos valores representativos de la parte natural con las concentraciones de metales en las muestras de suelo y polvo obtenidas por Cedeus en Copiapó (Carkovic et al., 2016), se obtienen los factores de enriquecimiento (FE). Estos son indicadores del nivel de enriquecimiento que posee una muestra con respecto a la condición natural. Se establecieron rangos de enriquecimiento para los FE y se clasificaron como enriquecimiento mínimo si los valores se encontraban entre 0 y 2; enriquecimiento moderado entre 2 y 5; enriquecimiento significativo entre 5 y 20; enriquecimiento muy alto entre 20 y 40; y extremadamente enriquecido para valores sobre 40 (Sutherland, 2000).
- **Fuentes contaminantes en Copiapó:** El origen de los metales pesados en la ciudad está

relacionado con las diversas actividades mineras y los residuos de los procesos. La ubicación de los relaves mineros se obtuvo del catastro de relaves mineros del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin, 2015). Además, a ocho kilómetros del centro de Copiapó se ubica otra fuente de metales, la fundición de cobre Hernán Videla Lira (Paipote).

- **Grupos socioeconómicos en la ciudad:** Se utilizó el mapa desarrollado por el Centro de Investigación Social de TECHO Chile para conocer los grupos socioeconómicos por manzana en la ciudad. Este mapa se basa en una clasificación según cinco grupos socioeconómicos (ABC1, C2, C3, D y E) realizada a partir del nivel educacional del jefe de hogar y la posesión de 10 bienes distintos (Adimark, 2002). Esto permitió caracterizar socioeconómicamente la población y abarcar la extensión espacial de la ciudad de Copiapó. A pesar de que este método se centra solamente en una mirada de la pobreza a través de los ingresos, se utilizó debido a la cobertura espacial que se puede lograr al utilizar los datos por manzana del Censo del año 2002.

Resultados

La alta actividad minera de la región de Atacama augura los resultados de metales obtenidos en las zonas naturales de Copiapó. Altos contenidos de metales fueron observados en las zonas naturales y a pesar de esto, el enriquecimiento de metales en las zonas urbanas sigue existiendo. Es decir, a pesar de tener una línea base de metales alta, el enriquecimiento urbano es aún mayor y atribuible al aporte de las fuentes humanas (Moya, 2017).

1

ENRIQUECIMIENTO DE METALES EN ZONAS URBANAS

Los valores de los factores de enriquecimiento (FE) nos indican, en términos simples, cuántas veces sobre la línea base se encuentra la concentración de metales en una muestra. En el caso de los FE en los polvos de calles, la Figura 3 muestra que para los seis metales aproximadamente el 70% de las muestras se encuentran clasificadas como enriquecimiento moderado o mínimo. Es decir, al menos 30% de las muestras se encuentran con algún nivel de enriquecimiento que no es atribuible a las condiciones naturales de la zona. Existen casos más extremos

de enriquecimiento correspondientes a metales como el cobre y el mercurio, ambos elementos relacionados a las actividades mineras.

En cuanto a la distribución espacial de los FE de polvos de calle, en el centro histórico de Copiapó se obtuvieron valores altos para arsénico, mercurio y plomo. El cobre se encuentra enriquecido a lo largo de toda la ciudad, pero existen mayores enriquecimientos en la población El Palomar y el sector de San Fernando, ambos cercanos a relaves mineros (Moya, 2017).

En el caso de los FE en los suelos de la ciudad (Figura 4), se observa un enriquecimiento general que es mucho menor que el encontrado en los polvos de calle. Más del 93% de las muestras presentan enriquecimientos mínimos o moderados para todos los metales, a excepción del mercurio. Dos aspectos son relevantes en estos resultados: (1) el caso del mercurio, que presenta más del 50% de las muestras con niveles de enriquecimiento sobre significativo; y (2) la existencia de casos de enriquecimiento extremo. Un ejemplo de esta situación son los altos enriquecimientos de cobre y mercurio en la plaza Cacique Colipi, donde antes existió un relave minero.

Como se detalló anteriormente, existen casos de altos enriquecimientos de metales en los suelos de sitios específicos de la ciudad, principalmente relacionados a metales como

Figura 3.

Porcentaje de muestras de polvo de calle por clasificación de factor de enriquecimiento.

Aproximadamente el 70% de las muestras de polvos de calles se encuentran entre enriquecimiento mínimo o moderado para todos los metales. Se destacan también los casos de enriquecimiento extremo para cobre y mercurio.

Fuente: Moya, 2017.

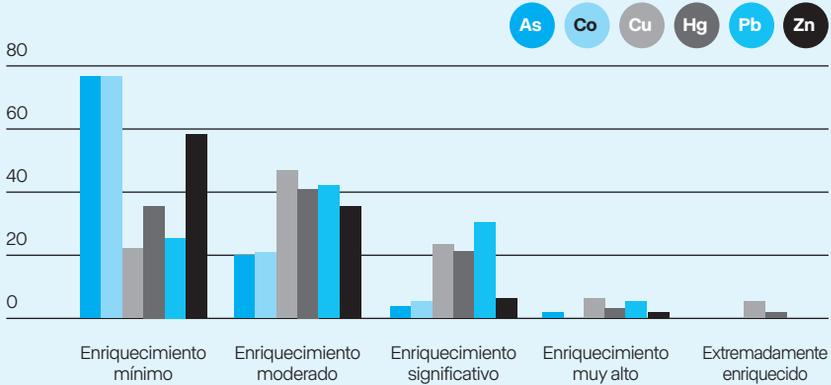
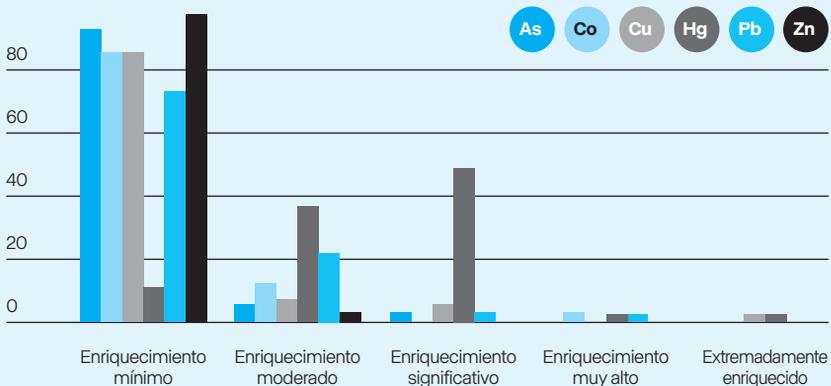


Figura 4.

Porcentaje de muestras de suelos urbanos por clasificación de factor de enriquecimiento.

Más del 93% de las muestras de suelos urbanos se encuentran entre enriquecimiento mínimo o moderado para todos los metales. A modo general, los polvos de calles se encuentran más enriquecidos que los suelos urbanos. Se destacan los casos de enriquecimiento extremo para cobre y mercurio como también que el mercurio posee sobre el 50% de las muestras con enriquecimientos sobre el nivel significativo.

Fuente: Moya, 2017.



el arsénico, cobre, plomo y mercurio, presentes en suelos cercanos a relaves mineros abandonados. Pero también existen casos de enriquecimientos a lo largo de los suelos de toda la ciudad, como ocurre con el caso del mercurio. Esto repite lo observado en los enriquecimientos de mercurio para los polvos de calle.

Los resultados de enriquecimiento de metales pesados en polvos de calle y suelos de la ciudad indican que:

- Existe un enriquecimiento de metales generalizado en toda la ciudad, que no es atribuible a los aportes naturales del sector.
- Hay mayores niveles de enriquecimiento en sectores cercanos a los relaves mineros o en zonas donde estos existieron.
- Sectores como la población El Palomar, San Fernando y el centro histórico de la ciudad presentan los casos de enriquecimientos más altos de todo Copiapó.
- La ubicación de los relaves, el enriquecimiento observado y la segregación residencial dentro de la ciudad muestran que la población vulnerable es potencialmente la más expuesta a metales pesados.

2

ZONAS SEGREGADAS Y RELAVES MINEROS

El resultado más gráfico e ilustrativo obtenido es el mapa mostrado en la figura 5, donde se observan los cinco grupos socioeconómicos predominantes por manzana en Copiapó, junto con los relaves y campamentos en la ciudad.

La estimación de la pobreza por medio del nivel educacional del jefe de hogar y por la tenencia de bienes, así como la evaluación por ingresos, por consumo o por insuficiencia de recursos no se encuentra exenta de problemas. La pobreza es causada por diversos factores y su expresión afecta diversas dimensiones de la vida de las personas.

El 26,6% de la población de la región de Atacama se encuentra en pobreza multidimensional, situación muy distinta de la que representa el 6,9% de la estimación de pobreza por ingresos (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). Ambos valores sugieren que la estimación de los grupos socioeconómicos utilizada en esta investigación puede subestimar la real pobreza multidimensional presente en Copiapó, pero es útil para conocer la distribución espacial de los grupos socioeconómicos dentro de la ciudad.

La segregación espacial dentro de Copiapó se acrecienta en los tres grupos de menor ingreso, quienes se ubican en la periferia de la ciudad, hacia

los cerros y en las proximidades de los relaves. A diferencia de los grupos de menor ingreso, los grupos más acomodados tienden a concentrarse en el eje central de la ciudad.

Esto es consistente con el análisis de la ubicación de los campamentos en la ciudad, localizados en los sectores periféricos del perímetro urbano, al

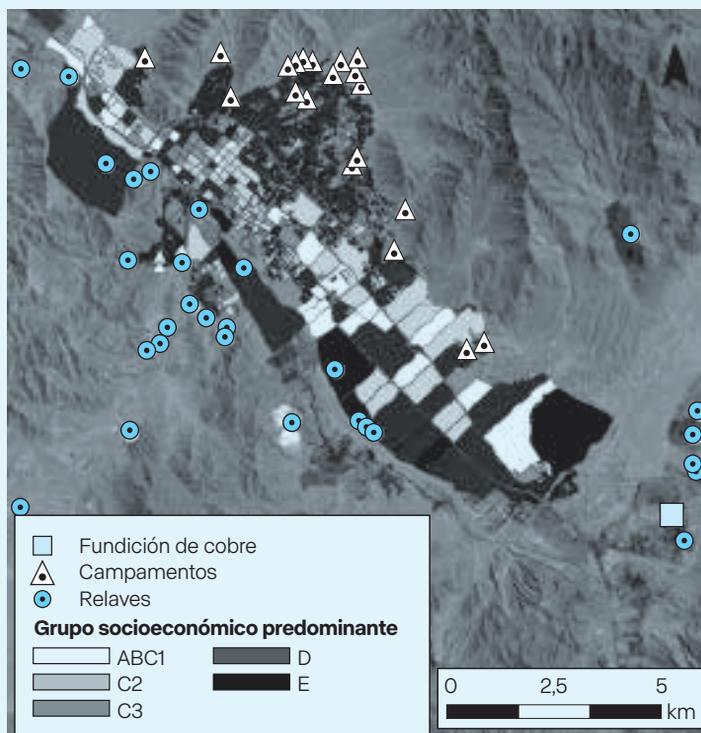
igual que los relaves mineros. Sólo tres de los 23 campamentos en la ciudad se encuentran en las proximidades de relaves mineros, situación que ocurre en la población El Rosario.

Lo anterior se explica por la alta dependencia de recursos hídricos por parte de la minería, que concluyó en la ubicación de los relaves en las cercanías

Figura 5.

Relaves y grupos socioeconómicos predominantes en Copiapó

Se observa que los relaves mineros se ubican predominantemente en grupos de sectores socioeconómicos D y E.



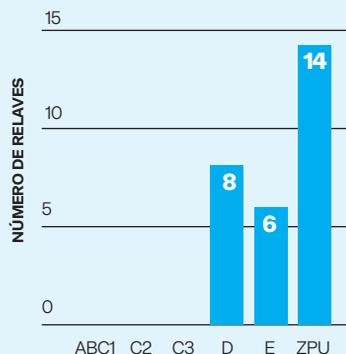
Fuente:
 elaboración propia en base a Moya, 2017; Centro de Investigación Social de TECHO Chile, 2014; Techo Chile, 2016 y Sernageomin, 2015.

del río Copiapó, donde por ahora sólo existen estos tres campamentos. A pesar de esto, los sectores cercanos a los campamentos son clasificados como grupos D y E, donde la población en situación de pobreza es la más afectada.

El resto de los campamentos se encuentra en la zona Pie de Monte, lejos de los relaves mineros pero con otros problemas ambientales, como los basurales ilegales en las quebradas del sector.

Figura 6.
Número de relaves según grupo socioeconómico predominante y en zonas periurbanas

Los grupos socioeconómicos D y E poseen relaves en las cercanías a estas manzanas. Por otro lado, 14 relaves se encuentran en las zonas periurbanas donde potencialmente pueden asentarse nuevas familias en situación de pobreza.



* ZPU: Zonas periurbanas

Fuente: Moya, 2017.

La figura 6 muestra el número de relaves cercanos a cada grupo socioeconómico y a los sectores periurbanos. Estos datos dan cuenta de la desigualdad en la ciudad de Copiapó. Los grupos D y E poseen ocho y seis relaves respectivamente, a diferencia del resto de los grupos socioeconómicos, que no conviven con ningún relave. Otros 14 relaves se encuentran en las zonas periurbanas donde las nuevas familias inmersas en la pobreza se ven forzadas a ubicarse por temas de segregación residencial dentro de la ciudad.

El análisis de los factores de enriquecimiento promedio según los grupos socioeconómicos se indica en la Figura 7. En promedio, el arsénico, cobalto y zinc presentan enriquecimientos bajos o cercanos a dos, lo que corresponde a valores mínimos, sin diferencias de enriquecimiento entre los diversos grupos socioeconómicos.

Por otro lado, el cobre presenta enriquecimientos promedio sobre cinco, correspondientes a un enriquecimiento significativo. Se observa que el enriquecimiento en el grupo socioeconómico E es mayor con respecto al resto de los grupos. La situación anterior coincide con la ubicación de estos grupos socioeconómicos en los sectores periurbanos con mayor presencia de relaves de la minería del cobre.

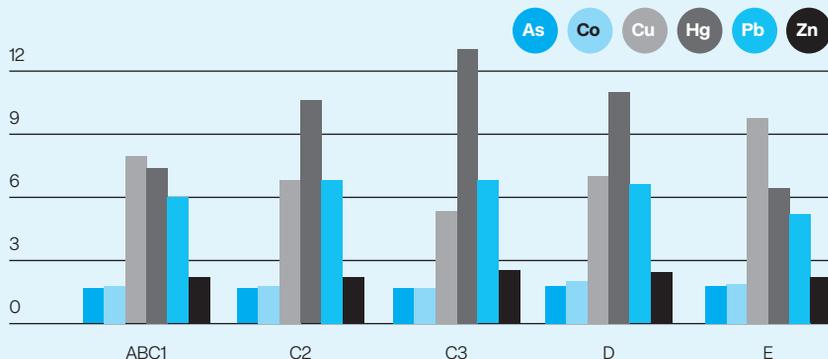
En el caso del plomo, se observa en promedio un enriquecimiento significativo y similar en todos los grupos. Cabe destacar que el plomo es comúnmente asociado a las emisiones del tráfico ve-

Figura 7.

Factor de enriquecimiento promedio según grupo socioeconómico predominante por manzana

Existen bajos niveles de enriquecimiento promedio para arsénico, cobalto y zinc, sin diferencias según grupo socioeconómico. El cobre y el plomo presentan un enriquecimiento promedio significativo en todos los grupos socioeconómicos, a excepción del cobre, que en el grupo E presenta un leve aumento en el enriquecimiento. El mercurio presenta mayores enriquecimientos en los grupos C2, C3, y D, aunque posee enriquecimientos significativos en todos los grupos

Fuente: Moya, 2017.



hicular. Por último, el mercurio presenta enriquecimientos promedio significativos para todos los grupos socioeconómicos, lo que sugiere una distribución de mercurio uniforme, aunque con enriquecimiento mayor en los grupos C2, C3, y D.

Del análisis de la ubicación de los relaves y el enriquecimiento de los metales comparados con los grupos socioeconómicos predominantes en Copiapó se desprende que:

- La segregación residencial en Copiapó y la ubicación de los relaves mineros crean una situación de desigualdad ambiental. En este caso, la población más

vulnerable se ve enfrentada a mayores niveles de metales pesados y resulta expuesta a potenciales consecuencias.

- A pesar de que sólo tres campamentos se ven directamente expuestos a relaves mineros, el resto de ellos puede exponerse a otras situaciones de contaminación ambiental como en el sector Pie de Monte y los múltiples basurales ilegales en las quebradas del sector.
- En los grupos socioeconómicos D y E se contabilizaron ocho y seis relaves, respectivamente; en los grupos de mayor ingreso

el conteo fue nulo. De la misma forma, aún existen 14 relaves en los sectores periurbanos, donde futuras familias en situación de pobreza podrían establecerse. En la ciudad existe un enriquecimiento generalizado para metales como el cobre, mercurio y plomo. Pero existen diferencias según el grupo socioeconómico y los grupos C3, D y E son los más perjudicados.

2.1. IMPLICANCIAS

Los resultados presentados exponen el enriquecimiento de metales en las zonas urbanas de Copiapó y permiten constatar que la población más vulnerable de la ciudad se encuentra expuesta a altos enriquecimientos de metales pesados. Esta situación es causada por la existencia de zonas mixtas urbano-industriales, por la presencia de relaves mineros dentro del perímetro urbano y por la segregación espacial en la ciudad. A continuación se abordarán las causas de la segregación socio-ambiental y los aspectos de la vida que se ven afectados por la contaminación en sectores urbanos.

Existen múltiples causas que originan la segregación socio-ambiental dentro de Chile. Por un lado está la desigualdad de la sociedad chilena, que se expresa en gran parte de sus ciudades como una segregación es-

pacial causada por la existencia de un mercado de suelos sin una correcta regulación del Estado (Rasse, 2016).

Este sistema de precios conduce a que los suelos periféricos de la ciudad sean los de menor valor y por lo tanto, se conviertan en los más accesibles para la población con mayores niveles de pobreza. Frente a este escenario no existe una elección de un nuevo sector para vivir sino que se trata de una decisión forzada y determinada por la pobreza (Annan, 1999), situación que en Copiapó obliga a las personas a vivir en áreas enriquecidas en metales.

De manera similar, existe en muchos casos un proceso de segregación forzada, donde las políticas de viviendas sociales que intentaron cubrir el déficit habitacional de Chile facilitaron la construcción de nuevos condominios sociales en zonas con disponibilidad de terreno de bajo costo en la periferia de las zonas urbanas (Hidalgo, 2007; Sabatini y Julio, 2010). Ambas situaciones profundizan las desigualdades en múltiples aspectos y la exposición a metales tóxicos se vuelve un factor que acrecienta aún más la brecha de la desigualdad. Se genera un acceso diferenciado a los servicios que provee la ciudad, oportunidades e infraestructura (PNUD, 2017; Rodríguez & Sugranyes, 2005), el que se expresa además como un acceso desigual al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Una segunda causa de la segregación espacial en las ciudades mineras es la inexistencia de un ordenamiento territorial. Los planes reguladores actuales no se encuentran adecuados para las condiciones locales ni tampoco se han adaptado para las situaciones particulares que se presentan en estas ciudades. Los planes actuales no consideran los relaves mineros ni las zonas contaminadas para establecer las nuevas zonas a urbanizar. Como resultado, existen las zonas mixtas urbano-industriales que legalmente admiten la existencia de depósitos de relaves a metros de viviendas. Esto permite el establecimiento de asentamientos humanos en zonas con potenciales consecuencias para la población debido a la exposición a metales pesados.

2.1.1. Aspectos de la vida afectados por la contaminación

Comúnmente, las situaciones de contaminación son directamente asociadas a problemas tangibles como lo son las consecuencias para la salud de la población. Se trata de problemas ampliamente estudiados en el ámbito internacional pero no a nivel país, y que en este caso no serán abordados para analizar así las consecuencias intangibles, que son el producto del entrelazado entre la contaminación y la segregación socio-espacial.

La existencia del mercado de suelos conduce a las familias de bajos in-

gresos a ubicarse en barrios periféricos y segregados.

Estos presentan desigualdad de oportunidades, educación, trabajo y recreación que desencadenan nuevas desventajas. Las familias buscan en estas nuevas poblaciones una mejor calidad de vida y un mejor entorno (Rasse, 2016), objetivos que en el caso de Copiapó se ven coartados por la contaminación.

Las familias se ven forzadas a vivir en un entorno contaminado, situación que se encuentra fuera del control familiar y que conduce a la aparición de cuestionamientos que pueden desencadenar efectos emocionales y que influyen en el núcleo familiar: ¿cómo les garantizo un ambiente no contaminado a mis hijos si vivimos inmersos en un entorno enriquecido en metales pesados, situación que no puedo controlar con mis capacidades? (Fundación Superación de la Pobreza, 2016).

Por otro lado, la segregación tiene un efecto sobre la vida de las personas. Los espacios donde los adultos desarrollan sus actividades generalmente están alejados de sus viviendas, pero niños y adultos mayores desarrollan su vida en los barrios (Browning y Soller, 2014). Estos últimos se ven expuestos a más metales pesados y se desenvuelven cotidianamente en ambientes enriquecidos en metales, como ocurre en el caso de Copiapó.

Estos dos grupos etarios son físicamente, además, los receptores más

vulnerables a los efectos de los metales pesados. La población identifica la contaminación como un desastre subyacente que no tiene punto de partida, que se acrecienta ante desastres naturales como los aluviones de marzo de 2015 y que a la vez los hace vivir y percibir un constante riesgo para ellos y sus familias (Fundación Superación de la Pobreza, 2016).

Individualmente, las consecuencias de la pobreza y de un entorno contaminado afectan la concepción del espacio que rodea a las personas y su relación con él.

Esta situación determina su percepción, valores, comportamiento y significado del medio ambiente para su ser, para su calidad de individuo (Rosenblüth, 2013).

Al condicionar su forma de ser se modifica su concepción de bienestar, lo que normaliza las situaciones de contaminación y las hace parte de sus vidas y de su bienestar. Esta situación aumenta la brecha de las desigualdades en la concepción del bienestar condicionado por la pobreza y la contaminación.

La pobreza no sólo se refiere a bajos ingresos sino que se manifiesta en múltiples dimensiones establecidas como salud, educación, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, redes y cohesión social (Ministerio de Desarrollo Social, 2016).

Algunas de estas dimensiones se ven perjudicadas al vivir en un entor-

no contaminado. Los problemas para la salud son la consecuencia más comúnmente conocida debido a los potenciales efectos que los contaminantes tienen en los seres humanos.

Por otro lado, la dimensión vivienda y entorno está sujeta a cambios en la habitabilidad del sitio contaminado, un emplazamiento de las familias que se ve condicionado y forzado a una exposición a metales pesados.

En la dimensión de redes y cohesión social pueden surgir dos situaciones: por un lado, un efecto positivo ya que la lucha contra la contaminación genera comunidad, redes y lazos dentro de los barrios, como es el caso de Maipú y La Farfana⁴ (Rosenblüth, 2013).

Pero en caso contrario puede existir un cambio en el sistema cultural de las comunidades donde la contaminación condiciona las actividades que pueden realizar en sus barrios. Se modifican sus oportunidades de vida porque no disponen de un espacio urbano sin contaminación donde puedan desarrollar de mejor manera su vida social, lo que afecta la formación de una comunidad dentro del barrio. De esta manera, la contaminación controla las capacidades y recursos que estos individuos tienen para enfrentar o sobrellevar la misma

4/ Caso en el que los habitantes de Maipú trabajaron como comunidad para enfrentar los problemas de olores emanados desde la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana.

contaminación que los condujo a esto (Fundación Superación de la Pobreza, 2016; Rasse, 2016).

Vivir en un ambiente contaminado y además en situación de pobreza tiene consecuencias en los aspectos de la existencia humana, el ser, el tener, el hacer y el estar. Un entorno contaminado condiciona el estado físico y emocional de una persona, su ser. Acentúa deficiencias en oportunidades y recursos; tiene una vivienda inmersa en un sitio contaminando. Limita su hacer cotidiano, el uso del espacio público, las relaciones sociales y el desarrollo como comunidad; se encuentra condicionada por habitar un ambiente y entorno contaminado. Por último, determina el estar, ya que debe desenvolverse y desarrollar su vida en un territorio condicionado a convivir con la contaminación, factor que se encuentra fuera de su control.

3

REFLEXIONES FINALES

La actividad minera extractivista, la mala planificación urbana y un mercado de suelos sin regulación han conducido a un escenario donde la segregación socio-espacial dentro de las zonas urbanas expone a la población en pobreza a metales pesados.

Las zonas urbano-industriales, los relaves mineros abandonados y

la contaminación son el legado de la minería histórica en la ciudad. Se trata de consecuencias que pueden ser compensadas por la actual minería de la zona como forma de retribuir a la población la vulneración de su derecho constitucional a un medio ambiente libre de contaminación.

Al no existir responsables o dueños de los relaves mineros, estos se convierten en responsabilidad del Estado, conocidos como pasivos ambientales, clasificación que indica una deuda de los privados mineros con el medio ambiente y la población.

Un ejemplo de una de las acciones que pueden realizar los privados es el retiro y reprocesamiento del material de relaves abandonados en los sectores urbanos, que en conjunto con un correcto proceso de descontaminación de los suelos puede dar paso a nuevos usos de estos sitios y una disminución del potencial riesgo de exposición.

Sin embargo, cabe destacar que cuando no se realizan procesos de descontaminación adecuados pueden ocurrir situaciones como la existente en la plaza Cacique Colipi. Esta plaza presenta altas concentraciones de metales debido a que en el lugar existió un relave minero que fue retirado y donde luego se construyó una plaza, sin las medidas de descontaminación del suelo necesarias.

Esta situación expone a metales pesados a la población que utiliza este espacio

público. Un método para lograr que las empresas mineras desarrollen este tipo de acciones es la exigencia de medidas de compensación, las que pueden ser requeridas por el Servicio de Evaluación Ambiental a proyectos que presenten impactos ambientales inevitables.

El Estado, a través de sus órganos, debe velar por un medio ambiente libre de contaminación para la población del país. Es esencial la coordinación entre los diferentes órganos competentes del Estado, en este caso el Servicio Nacional de Geología y Minería, los Ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, y Desarrollo Social, como también las municipalidades respectivas.

Este objetivo permitirá velar por la calidad de vida de las personas y suplir la falta de planificación urbana que expone a la población a metales pesados.

A pesar de la escasa planificación, el caso de Copiapó es aún más extremo, ya que existe enriquecimiento de metales pesados a través de toda la ciudad.

La población expuesta a metales puede vivir en diferentes sectores de la ciudad y no sólo en zonas segregadas, a pesar de que la exposición a metales se intensifica en los sectores más pobres de la ciudad. La solución a esta problemática se encuentra en la eliminación de las fuentes contaminantes y no sólo en una mejor planificación territorial.

Por otro lado, es esencial que el Estado establezca una regulación del mercado de suelos con el objetivo de limitar la segregación socio-espacial en la ciudad,

que además de las consecuencias aquí expuestas, tiene consecuencias en las capacidades, recursos y oportunidades de las comunidades afectadas.

En temas regulatorios, es de vital importancia la creación de una norma de calidad de suelos que permita abordar la capacidad máxima de metales pesados que son admisibles en zonas residenciales, con el objetivo de evitar riesgos para la salud de la población.

La anterior norma podría facilitar el establecimiento de zonas de riesgo y desencadenar acciones que protejan no sólo la salud de la población sino que disminuyan los riesgos producto de desastres naturales cada vez más comunes en la zona.

Por último, la falta de un monitoreo regular en variables de salud pública limita el conocimiento respecto a la ocurrencia de efectos en la salud, causados potencialmente por las condiciones ambientales en las que se ve inmersa la población.

A nivel regional, entre los años 2007 y 2017 existió la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama (Erda), que estableció nueve grandes lineamientos con el objeto de ser el instrumento que dirigiera la planificación y desarrollo en la región (Gobierno Regional de Atacama, 2007).

Algunos lineamientos y objetivos se relacionaron con las temáticas tratadas en este trabajo, como lo son la coordinación entre instituciones públicas, mejoramiento de competencias de funcionarios públicos, promoción de la

investigación, ordenamiento territorial integral y armónico, disminución del déficit habitacional y un medio ambiente para el desarrollo sustentable.

La evaluación realizada a la Erda hasta el año 2015 indicó un muy bajo cumplimiento de estas metas. A modo global, se identificó un avance de 46% de las metas y se destacó que el lineamiento relacionado a un medio ambiente para el desarrollo sustentable alcanzó un avance del 32% (Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama, 2016).

El incumplimiento de estas metas fue atribuido a la gran dependencia del desarrollo regional de la actividad minera, a los múltiples desastres naturales ocurridos en ese periodo de tiempo y a los problemas de coordinación y liderazgo institucional.

Es necesario continuar con los lineamientos no cumplidos en este periodo para lograr en el futuro la integración de estos temas en la planificación del desarrollo regional. Como se expuso previamente, la coordinación entre instituciones es de vital importancia para evitar el aumento de las problemáticas de segregación espacial y exposición a contaminantes.

La capacitación y mejoramiento de las competencias de los profesionales de instituciones públicas es un complemento a lo anterior y ampliar el conocimiento sobre las potenciales consecuencias de los contaminantes

de origen minera es esencial para una mejor coordinación.

El desarrollo de la investigación en temas prioritarios para la región que ayuden a solucionar los problemas de segregación espacial y exposición a metales debe ser reforzado y temáticas ya planteadas en la Erda 2007-2017 como investigación en el área social, salud, vivienda social, medio ambiente y sectores productivos relevantes, deben ser fomentadas.

El ordenamiento territorial integral y armónico debe considerar, entre los múltiples aspectos, la segregación espacial como expresión de la desigualdad y también como un fenómeno que intensifica las situaciones de exposición a metales pesados.

De la misma manera, zonas contaminadas o enriquecidas en metales que potencialmente son un riesgo para la población no son consideradas dentro de la planificación urbana. Un objetivo que se debe alcanzar a nivel tanto regional como nacional es la integración de estos temas al ordenamiento territorial.

Por último, el lineamiento de un medio ambiente para el desarrollo sustentable debe concordar con la garantía del Estado hacia su ciudadanía de un medio ambiente libre de contaminación, situación al debe en casos como Copiapó.

En Chile existen diversos tipos de conflictos ambientales que enfrentan a las comunidades, los privados y el Estado. Más de 97 conflictos fueron infor-

mados por el INDH entre los años 2010 a 2012, de los cuales 35 se relacionan con privados mineros (INDH, 2012).

El resto se refiere a conflictos relacionados con basurales ilegales, extracción de agua, centrales termoeléctricas, zonas de sacrificio, embalses y rellenos sanitarios, entre muchos otros.

Todos son problemas que potencialmente presentan un efecto que se vería intensificado bajo la segregación espacial, un fenómeno que se expresa de maneras diferentes según la territorialidad de la misma problemática como también del propio fenómeno de la pobreza. Las metodologías utilizadas en este estudio establecen las bases para nuevos estudios que busquen abordar otras

problemáticas en Chile desde un enfoque socio-ambiental.

Finalmente, esta investigación abre las puertas para someter a este análisis a otras ciudades del país. Casos como Chañaral, Andacollo, Calama, El Salado, Diego de Almagro y Tierra Amarilla son algunos ejemplos que presentan problemas de origen minero similares a Copiapó.

Estos poblados y ciudades se convierten en indicadores de la situación que se vive a nivel nacional y establecen una nueva gran interrogante: ¿cuánta población está expuesta a contaminantes a causa de una minería extractiva que ha priorizado y prioriza sus utilidades por sobre la calidad de vida de las personas?

Bibliografía

- Adimark (2002). Mapa socioeconómico de Chile, nivel socioeconómico de los hogares del país basado en datos del Censo.
- Annan, K. (1999). An increasing vulnerability to natural disasters. *The New York Times*. Recuperado a partir de <http://www.nytimes.com/1999/09/10/opinion/an-increasing-vulnerability-to-natural-disasters.html>
- Browning, C., y Soller, B. (2014). Moving beyond neighborhood: activity spaces and ecological networks as contexts for youth development, 16(1), 1–31.
- Carkovic, A. B., Calcagni, M. S., Vega, A. S., Coquery, M., Moya, P. M., Bonilla, C. A., y Pastén, P. A. (2016). Active and legacy mining in an arid urban environment: challenges and perspectives for Copiapó, Northern Chile. *Environmental Geochemistry and Health*, 38(4), 1001–1014. <https://doi.org/10.1007/s10653-016-9793-5>
- Cedeus (2015). Screening geológico en áreas urbanas de Atacama: evaluación ambiental preliminar y perspectivas post aluviones de marzo de 2015. Recuperado a partir de <http://pubs.cedeus.cl/omeka/files/original/4e0d2d1a7d9d0f60810f6c4bae1e2249.pdf>

- Cenma (2012). INFORME FINAL “Investigación suelos con potencial presencia de comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
- Cenma (2016). Diagnóstico y evaluación de potenciales riesgos en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.
- Centro de Investigación Social de TECHO Chile (2014). Grupos socioeconómicos Copiapó: mapas de vulnerabilidad territorial. Recuperado a partir de <http://www.techo.org/paises/chile/cis/vulnerabilidad/>
- Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (2016). Evaluación de la Estrategia Regional de Desarrollo de Atacama 2007 - 2015 y Propuesta de Rediseño.
- Davies, B. E., y White, H. M. (1981). Environmental pollution by wind blown lead mine waste: A case study in wales, U.K. *Science of the Total Environment*, The, 20(1), 57-74. [https://doi.org/10.1016/0048-9697\(81\)90036-X](https://doi.org/10.1016/0048-9697(81)90036-X)
- Fundación Superación de la Pobreza (2016). Más allá del barro.
- Gidhagen, L., Kahelin, H., Schmidt-Thomé, P., & Johansson, C. (2002). Anthropogenic and natural levels of arsenic in PM10 in central and northern Chile RN - *Atmos. Environ.* 36, 3803-3817. *Atmospheric Environment*, 36, 3803-3817.
- Gobierno Regional de Atacama (2007). Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama 2007-2017.
- Hidalgo, R. (2007). ¿Se acabó el suelo en la gran ciudad? Las nuevas periferias metropolitanas de la vivienda social en Santiago de Chile, XXXIII, 57-75.
- INDH, (2012). Mapa de conflictos socioambientales en Chile.
- INE (2017). Boletín de exportaciones. Región de Atacama - Mayo 2017.
- Ministerio de Desarrollo Social (2016). Ampliando la mirada sobre la pobreza y la desigualdad. Diagnóstico nacional y principales resultados regionales.

- Moya, P. M. (2017). Identificación de fuentes contaminantes en suelos y polvos de calle: el caso de Copiapó, Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- OCDE, (2016). Income inequality remains high in the face of weak recovery. Recuperado a partir de <http://www.oecd.org/social/OECD2016-Income-Inequality-Update.pdf>
- OCDE, (2015). Todos juntos. ¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia?, 62–65. Recuperado a partir de <https://www.oecd.org/chile/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Chile.pdf>
- Plumlee, G. S., y Ziegler, T. L. (2003). The medical geochemistry of dusts, soils, and other earth materials. *Treatise on Geochemistry*, 9–9, 1–61. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043751-6/09050-2>
- PNUD, (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile.
- Rasse, A. (2016). Segregación residencial socioeconómica y desigualdad en las ciudades chilenas.
- Rodríguez, A., y Sugranyes, A. eds. (2005). Los con techo. Un desafío para la política de vivienda social, Santiago de Chile. Recuperado a partir de <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=81>.
- Rosenblüth, A. (2013). El conflicto de La Farfana: un caso de justicia medio ambiental visto desde la psicología ambiental. En Tesis País 2013, Piensa un País sin Pobreza.
- Sabatini, F., y Julio, G. (2010). Tendencias de la segregación en las principales ciudades chilenas: análisis censal 1982–2002. PUC, INE. Recuperado a partir de <https://books.google.cl/books?id=Xx6lXwAACAAJ>
- Sernageomin (2015). Catastro depósitos de relave, 1, 12. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sernageomin (2016). Geoquímica de superficie de depósitos de relaves de Chile.

Sims, D. B., Hooda, P. S., y Gillmore, G. K. (2013). Mining activities and associated environmental impacts in arid climates: a literature review. *Environment and Pollution*, 2(4), 22–43. <https://doi.org/10.5539/ep.v2n4p22>

Sutherland, R. A. (2000). Bed sediment-associated trace metals in an urban stream, Oahu, Hawaii. *Environmental Geology*, 39(6), 611–627. <https://doi.org/10.1007/s002540050473>

TECHO Chile (2016). *Catastro de campamentos 2016*.

Williams, M. D., & Brown, M. J. (1994). Development of methods evaluating options for improving the air quality in Santiago, Chile and its environs.

Zori, C., & Tropper, P. (2013). Silver lining: evidence for Inka silver refining in northern Chile. *Journal of Archaeological Science*, 40(8), 3282–3292. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.03.020>

Zori, C., Tropper, P., & Scott, D. (2013). Copper production in late prehispanic northern Chile. *Journal of Archaeological Science*, 40(2), 1165–1175. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.09.012>

3.

Desplazamiento forzado de familias de Copiapó debido al aluvión ocurrido el 25 de marzo de 2015

Simonne Marín Sarria y Allison Martínez Pérez¹,

Universidad de Atacama



Resumen

La presente investigación aborda el cambio de rol experimentado en un nuevo contexto por la mayoría de las mujeres que integró el grupo de familias que debió desplazarse forzosamente desde Copiapó debido al aluvión del 25 de marzo de 2015. Este trabajo da cuenta de la pérdida de autonomía económica, los riesgos a la salud y la sobrecarga de responsabilidades domésticas experimentadas por estas mujeres, lo que ofrece la oportunidad de realizar una reflexión en torno a cómo estos elementos dificultaron la satisfacción adecuada de sus necesidades existenciales de ser, tener, hacer y estar establecidas por la matriz de necesidades de Max-Neef. A la luz de estos resultados y para conseguir una mejor intervención futura se propone dotar de un enfoque de género a la gestión del riesgo del Estado.

Palabras clave: desplazamiento forzado, género, roles, ámbito público y privado.

1/ Trabajadoras sociales. Artículo basado en la tesis *Desplazamiento forzado de familias de Copiapó debido al aluvión ocurrido el 25 de marzo, 2015*, realizada para optar al título de Trabajadora Social y al grado académico de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama. Profesora guía: María Cristina González Campos. Copiapó, 2015.

Introducción

Chile es un país que debido a sus características geográficas está constantemente amenazado por sismos, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y aluviones, entre otros fenómenos, los que han provocado desastres que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la resiliencia de los afectados.

Además de las evidentes pérdidas humanas y materiales, en Chile y el mundo las consecuencias de estas amenazas incluyen los desplazamientos forzados e inesperados que tienen lugar frente a un peligro inminente (Peterson, 1958. Como se cita en Jiménez y Soledad, 2011).

La comunidad internacional reconoce cuatro tipos de migraciones forzadas: refugiados, desplazados internos, desplazados inducidos por el desarrollo y desplazados ambientales. Este último concepto fue definido por primera vez por El Hinnawi (1985) para aludir a personas que se han visto forzadas a dejar su entorno tradicional, de forma temporal o permanente, debido a un evidente trastorno ambiental ocasionado por peligros naturales o provocado por la actividad humana (como se cita en Jiménez y Soledad, 2011).

El aluvión que tuvo lugar el 25 de marzo de 2015 en la región de Atacama fue un evento desatado por las fuertes lluvias que se registraron entre los días

24 y 27 del mismo mes y que afectaron casi a la totalidad de sus comunas.

Esto produjo la crecida y desborde de los ríos Copiapó y Salado, lo que impactó fuertemente en el territorio, causando daños estructurales y pérdidas materiales y humanas, como la muerte de 31 personas, la desaparición de 16 personas y el registro de 35.086 damnificados (Gobierno de Chile, 2015).

Precisamente debido a la incertidumbre que introdujo este contexto de catástrofe, innumerables familias decidieron desplazarse desde Copiapó hacia otras ciudades de la región y el país, sin saber cuánto tiempo tardaría la recuperación y reestructuración de la ciudad y la reactivación de sus actividades después de la emergencia.

Entre las principales causas del desplazamiento familiar estuvieron la inhabilitación de las viviendas cubiertas por el barro, la escasez o incluso inexistencia de servicios básicos y comerciales, la suspensión de clases, la contaminación ambiental y la emergencia sanitaria.

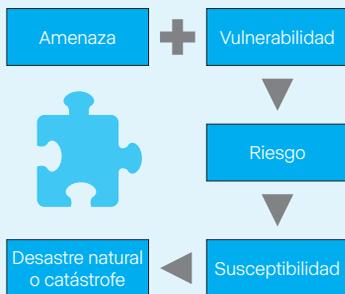
Todo esto produjo una crisis que dejó insatisfechas las necesidades habitualmente cubiertas y que a su vez determinó de manera negativa las dimensiones existenciales del ser, tener, estar y hacer establecidas por Max-Neef. En este contexto surgió el interés por comprender el proceso experimentado de manera compartida por las familias a través de la matriz de necesidades y perspectivas de género.

1

UNA NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DESASTRES: TEORÍA DE LA SOCIEDAD DEL RIESGO

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (2009) afirma que en el mundo existen más de 22 millones de refugiados y 30 millones de desplazados internos dentro de las fronteras de sus Estados. Sin embargo, en los últimos años los desastres naturales han producido, por primera vez en la historia, más refugiados que las guerras y los conflictos armados (Sola, 2012). ¿A qué se debe este fenómeno?

Esquema 1.
Riesgo de desastres



Fuente: Elaboración propia.

Primero, resulta pertinente destacar la teoría de la sociedad del riesgo del sociólogo Ulrich Beck (2006), la cual es pertinente para un mundo que puede caracterizarse por la pérdida de una distinción clara entre naturaleza y cultura y en donde el desarrollo industrial no regulado por el sistema político produce riesgos de una nueva magnitud: incalculables, imprevisibles e incontrolables (como se cita en Hernández, 2010). Los riesgos pueden definirse como la posibilidad de daño ante la ocurrencia de un fenómeno natural determinado (Foschiatti, 2004), lo que constituye una amenaza (factor externo al que se exponen las personas, representado por la potencial ocurrencia de un fenómeno que puede producir un desastre al manifestarse) para las personas y sus formas de vida. Sin embargo, la amenaza no existe sin la preexistencia de la vulnerabilidad, entendida como la característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural (Blakie y Canon et al., 1996. Como se cita en Foschiatti, 2004).

Una sociedad puede enfrentar vulnerabilidades físicas, naturales, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, educativas, culturales, ecológicas e institucionales, las que sumadas generan vulnerabilidad global (Wilches Chaux, 1989. Como se cita en Foschiatti, 2004).

Entre las vulnerabilidades más comunes que se detectaron en el contexto de catástrofe a causa del aluvión estuvieron la económica, la educacional y la social. La primera, referida a la incertidumbre que generó en las familias la inactividad laboral durante la primera semana de emergencia. La segunda, vulnerabilidad educacional, debido a la suspensión de clases por tiempo indefinido; y la tercera, vulnerabilidad social, por los servicios básicos y comerciales limitados que expusieron a las familias a la contracción de infecciones o enfermedades y a un posible desabastecimiento.

Todo esto se sumó a la vulnerabilidad física por la inestabilidad habitacional en el nuevo contexto por la condición de allegados, continuas mudanzas por demora en la entrega de la nueva vivienda, o por el terremoto que afectó a La Serena y Coquimbo meses después del aluvión en Copiapó.

Para terminar, cabe destacar la relevancia de la reconceptualización de los desastres naturales a desastres sicionaturales, debido a que no basta con la ocurrencia de una amenaza natural para que estos últimos se desencadenen, sino que es más bien la preexistencia de vulnerabilidad en una determinada sociedad lo que convierte a las amenazas naturales en desastres. De otro modo, se trataría de perturbaciones naturales sobre espacios vacíos que sólo pondrían a prueba la resiliencia de los ecosistemas (Arteaga y Tapia, 2015).

1.1. ENFOQUE DE DERECHOS: LA IMPORTANCIA DEL ROL ESTATAL

El enfoque de derechos establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de derechos de todos los ciudadanos. Los desastres como terremotos, tsunamis, sequías e inundaciones suelen limitar el ejercicio de los derechos humanos, impactando la seguridad, educación, salud, vivienda y el acceso a satisfactores de primer orden.

En muchos casos, la amenaza a los derechos humanos de los afectados no procede directamente del desastre, sino más bien de una inadecuada planificación, prevención y respuesta por parte de las autoridades.

En Copiapó, la suspensión de clases por un periodo aproximado de dos meses, el difícil acceso a servicios comerciales de productos de primera necesidad, riesgos a la salud por escasez de agua, contaminación ambiental, problemas sanitarios e inhabitabilidad de viviendas a causa del barro fueron algunas de las dificultades que implicaron una vulneración de derechos durante las semanas que se extendió la emergencia.

Por tanto, en lo que respecta a la seguridad, protección y fortalecimiento familiar (artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, 2005), no fue el Estado el que se encargó de su resguardo, sino las mismas familias, que al experimentar vulneraciones de

sus derechos decidieron desplazarse a fin de resguardar la salud física y mental de sus integrantes.

Visualizando las consecuencias del reciente desastre en la región de Atacama y según la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2014), el ordenamiento territorial, soluciones habitacionales integrales, reducción del riesgo de desastres en su concepción inicial, atención a la emergencia bajo un enfoque inclusivo y la coordinación eficaz y eficiente de la primera respuesta a la emergencia, son algunos de los elementos relevantes y prioritarios para el enfrentamiento de desastres bajo una visión prospectiva.

1.2. ENFOQUE DE CAPITAL SOCIAL: UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA RESILIENCIA

Este enfoque entrega un marco de conocimiento que permite analizar el rol que desempeñan las redes y relaciones durante el proceso de desplazamiento y adaptación de las familias en el nuevo contexto. La comunidad, los lazos y las redes sociales resultan de vital importancia al momento de enfrentar problemas cotidianos y de alcanzar la realización del ser humano y enfrentar las situaciones de riesgos de desastres.

Cuando estos ocurren, quienes se desplazan lo hacen porque perciben que su vida o la de sus familiares peligran, por lo tanto es una estrategia para sal-

vaguardar la vida y unidad familiar. Sin embargo, cuando las personas se desplazan se ven obligadas a abandonar o perder no sólo propiedades y pertenencias, sino también relaciones y afectos construidos por años (Bello, 2004).

Esto puede implicar cambios en distintos ámbitos, incluido el social, debido a que la mayoría de las redes cultivadas por largo tiempo se desintegran, generando un quiebre en el tejido social. No obstante, las familias de Copiapó se desplazaron a una ciudad determinada en función de las redes de apoyo que poseían previamente al desastre, facilitando el proceso de adaptación y resiliencia en el nuevo contexto.

Este concepto apela a la capacidad de una persona de seguir proyectándose en el futuro a pesar de haber vivido acontecimientos desestabilizadores, condiciones de vida difíciles y traumas (Cyrulnik, 2010). Como se cita en Comité Nacional de Protección de la Salud Mental en Emergencias y Desastres, (2010).

1.3. ENFOQUE DE GÉNERO: UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE EL ROL FEMENINO EN LA ACTUALIDAD

El carácter traumático de un desastre siconatural permanece durante un periodo de tiempo en las personas, familias y comunidades.

Los efectos de este trauma son experimentados de manera distinta por

hombres y mujeres, pues dependen de las vivencias individuales durante el contexto de desastre o posterior a este, así como de los roles y funciones desempeñados en ese momento.

Moreno (2015) destaca que el concepto género no refiere a cuestiones de identidad, es decir, no apela a las diferencias por ser hombre o mujer, sino a las relaciones que se dan entre ambos sexos o entre los mismos hombres y mujeres. Por tanto, la noción de género no corresponde a una característica física o superficial, sino a una estructura social que incide en el establecimiento de estas relaciones.

Según la misma autora, en Chile los roles, funciones e identidades han estado históricamente marcados por la desigualdad y la subordinación. Sin embargo, actualmente es posible visualizar ciertos cambios estructurales referentes a esta dinámica cultural y ordenamiento tradicional de género gracias a los cuestionamientos de diferentes movimientos sociales liderados por mujeres a partir del siglo XX.

Una de estas transformaciones fue la autonomía física relacionada con el uso de anticonceptivos, la que permitió desvincular los conceptos de sexualidad y reproducción, posibilitando una participación mucho más activa de las mujeres en el espacio público.

No obstante, la inserción laboral de las mujeres en el mercado ha implicado una extensión de su tiempo de trabajo, en especial entre aquellas que son también madres. Esto, debido a

que la mayoría debe cumplir de todas formas las responsabilidades familiares, lo que significa que a pesar del avance que implica tener mayor autonomía económica, aún se mantiene para ellas la obligación de realizar un trabajo no remunerado.

Por su parte, en los hombres aún no se distingue con claridad una conciliación entre ambos ámbitos (público y privado). Si bien hombres y mujeres pueden disponer de un trabajo remunerado -independientemente del tiempo o frecuencia del mismo-, las labores domésticas y de cuidado son realizadas en su mayoría por las mujeres, casi como un trabajo exclusivo (Cepal, 2011).

Por lo mismo, se identifica una sobrecarga laboral sobre la figura femenina debido al tiempo que las mujeres dedican al cumplimiento de ambas responsabilidades. Esto es particularmente visible en las familias monoparentales compuestas sólo por madre e hijo (os), un sistema familiar carente de otra persona adulta que apoye en la ejecución de determinadas labores.

Sobre todo cuando se evalúa el cambio de rol que experimentó la mayoría de las mujeres en el nuevo contexto, el enfoque de género permite conocer, tanto en hombres como en mujeres -específicamente en la familia-, la relación entre el desplazamiento y el grado de afectación sobre la autonomía económica y toma de decisiones, roles desempeñados y riesgos para la salud mental, entre otros.

Método

La investigación fue de carácter cualitativo. Se entrevistó a un total de diez familias desplazadas a la ciudad de Caldera, La Serena y Coquimbo, las cuales aún permanecían en la ciudad de acogida al momento de concretar las entrevistas. Como técnica de recolección de datos se utilizaron la entrevista semi-estructurada y el análisis de discurso para el planteamiento de resultados.

Cabe destacar que ocho de las entrevistas se realizaron a mujeres, quienes en su mayoría fueron las que se desplazaron a la ciudad de acogida junto a sus hijos. Por lo mismo, uno de los principales hallazgos de la investigación fue el cambio de rol que estas experimentaron en el nuevo contexto.

Resultados

Al considerar los elementos anteriormente destacados y el discurso de las sujetas(os) entrevistadas, emergieron los siguientes resultados:

1

PÉRDIDA DE AUTONOMÍA DE LA MUJER: DEL ROL REPRODUCTIVO AL PRODUCTIVO Y VICEVERSA

Antes del desplazamiento, las mujeres tenían autonomía en el ámbito económico y a la hora de tomar decisiones a nivel familiar. La mayoría de ellas contaba con ingresos propios provenientes de remuneraciones laborales, pensiones o trabajos independientes previos.

Luego del aluvión y del periodo de excepción constitucional que surgió del mismo, la fuente de ingreso de las sujetas (os) se vio interrumpida por un margen de tiempo, lo que generó incertidumbre sobre lo que sucedería con los ingresos y con la economía familiar en general en el futuro.

Respecto a esto, Terminiello (2013) señala que los desastres afectan directamente el desarrollo de los sujetos en áreas tan distintas como la laboral, educacional y social, exacerbando de esta manera vulnerabilidades preexistentes y restringiéndoles el aprovechamiento de sus derechos civiles.

Posterior al desplazamiento -decisión mayoritariamente consensuada entre hombres y mujeres-, sólo una parte de las mujeres mantuvo ingresos propios debido a la pérdida de sus fuentes laborales, término de contrato o por decisión individual y/o familiar.

Frente a esta situación de inactividad laboral, las mujeres comenzaron a ejercer un rol más activo en el hogar, ya fuera en labores domésticas o de cuidado. Este rol se fortaleció después del desplazamiento debido a que en la ciudad de Copiapó la mayoría de

las mujeres entrevistadas mantenía, al igual que sus maridos, una fuente de ingresos que les permitía remunerar a una tercera persona (igualmente mujer) para que cumpliera con las responsabilidades en el ámbito privado. No obstante, posterior al desplazamiento y pérdida de la fuente laboral por los diversos motivos antes mencionados, los recursos debieron distribuirse para poder realizar los gastos que demandaba el nuevo contexto. Esto suscitó que el tiempo de las mujeres, antes dedicado a trabajar, se empleara en los quehaceres domésticos y crianza de los hijos:

“Nosotros tenemos nana, siempre hemos tenido gente trabajando en la casa, en cambio acá no, pues acá uno tiene que trabajar y aparte hacer todo en la casa, almuerzo, lavar, limpiar, cosas que antes yo no hacía, porque hay que ahorrar”
(Familia N°6).

El aumento de la inserción de la mujer en el mundo laboral ha tenido como consecuencia una sobrecarga de responsabilidades y, por lo mismo, una extensión de su tiempo de trabajo tanto remunerado como no remunerado (Cepal, 2011). En consecuencia, la autonomía e independencia logradas hasta entonces por las mujeres se sacrifica, posterga o disminuye en función de la familia o de la economía

familiar post desplazamiento. Esto se evidencia particularmente en las mujeres que debieron adoptar ambos roles, es decir, rol de “dueña de casa” y rol “extradoméstico”, lo cual se rescata desde el discurso de las sujetas:

“(…) y lo otro negativo es que yo tengo que hacer como todo al final, porque ahora mi marido se fue, entonces yo tengo que hacer todo en la casa y más encima almuerzo, después tengo que ir a trabajar, voy al gimnasio, eh... andar trasladando a los niños y después llegar de nuevo a hacer almuerzo, a hacer las cosas, entonces como que para mí es más pega de lo que tenía antes”
(Familia N°8).

El ser una mujer independiente; tener seguridad mediante una carrera y/o trabajo que contribuye a la autovaloración, realización personal y equidad de derechos; hacer tareas y actividades para acceder a recursos y satisfacer necesidades personales y/o familiares; y estar en un espacio o ambiente para interactuar con grupos sociales fuera del ámbito privado corresponden a necesidades existenciales que dejaron de satisfacerse en el momento en que las mujeres perdieron su autonomía debido al cambio de rol.

Si bien algunas mujeres lograron continuar satisfaciendo estas necesidades mediante la conciliación entre el

ámbito público y privado, vieron disminuida la satisfacción de sus necesidades axiológicas de participación y libertad debido a la sobrecarga de responsabilidades domésticas y extradomésticas. Por ende, en lo que respecta a la autonomía de la mujer, en ambas situaciones se identifica algún grado de pérdida, no así en los hombres, quienes en su mayoría mantuvieron su rol productivo tanto en Copiapó como en la ciudad de acogida.

2

APECTACIÓN DE LA MUJER A NIVEL PSICOLÓGICO Y SOCIAL

La invisibilización del tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico no remunerado impide muchas veces dar cuenta de la existencia de la sobrecarga laboral que ello implica. Es más, no sólo la participación femenina en el trabajo remunerado se relaciona con las responsabilidades familiares, sino también las oportunidades y obstáculos que ellas tienen en la cotidianidad (Milosavljevic, 2007).

La mayoría de las mujeres entrevistadas sufrió reacciones psicológicas y fisiológicas derivadas de la experiencia misma del aluvión, la contaminación y/o de las pérdidas producidas por este fenómeno en alguna etapa del desastre o del desplazamiento.

En contextos de catástrofe, las mujeres ejercen un rol protagónico en las comunidades afectadas, organizando a sus grupos familiares en función de la protección de los (as) hijos (as), huyendo del peligro, buscando alimentos y además como un soporte afectivo para otros (as) (Pezoa Navarro, 2010. Como se cita en Magaña et al., 2010).

Todas estas labores de organización y protección generan una mayor responsabilidad a la hora de asumir y actuar frente a una circunstancia inesperada. Por lo mismo, se espera que frente a la ocurrencia de un desastre natural y desplazamiento familiar, las personas, y en especial las mujeres, experimenten reacciones psicológicas y fisiológicas a causa del mismo.

Entre las principales manifestaciones psicológicas de las mujeres desplazadas se rescata el estrés post traumático, la angustia, la depresión, el aislamiento, la irritabilidad y el bloqueo emocional y mental.

“Como que yo igual perdí un poco la noción del tiempo y el espacio, tengo como todavía un bloqueo... no me acuerdo de qué día pasó y todo”
(Familia N°5).

“(...) a mí me produjo una depresión, yo fui a mi casa después, ya cuando habían sacado el barro, pero el ver eh... los muebles destruidos (...) me hizo muy mal”
(Familia N°1).

Dentro de este contexto y debido a la invisibilización del rol de las mujeres en la superación del desastre, estas se encuentran en un escenario de mayor vulnerabilidad.

Esto se refleja en que en las acciones de reparación psicosocial impartidas por el Estado y organizaciones no gubernamentales, las mujeres no están contempladas como sujetas prioritarias de atención, sino más bien como un vehículo que les permita llegar a los otros (as) integrantes de la familia, con el fin de realizar oportunamente las intervenciones (Magaña et al., 2010). Esto, a pesar de que ellas sufren de manera particular frente a diversas situaciones relacionadas con el desastre:

“... bueno, en realidad, sí (...) me ha afectado harto mi estrés todas esas cosas, el trabajo de viajar, de no poder ver bien a mi hijo, y... me dio... me enfermé mucho, mucho, mucho (...) pero ya estoy mejor, ya más tranquila, ya me siento en paz, igual, y súper bien... no, súper bien... si ahora... es un proceso, no más (...) que... que en realidad uno tiene que pensar que hay cosas peores”

(Familia N°2).

Es pertinente destacar que el estrés post traumático, angustia, depresión, aislamiento, irritabilidad, bloqueo emocional y mental son manifestaciones psicológicas post desplazamiento derivadas

de necesidades existenciales y axiológicas no satisfechas.

Según la matriz de necesidades de Max-Neef, la salud mental y física corresponde a satisfactores del ser y de subsistencia, y los sistemas de salud corresponden al satisfactor del tener y de protección. Si analizamos tanto las necesidades como sus satisfactores, las mujeres que experimentaron alteración psicológica posterior al desplazamiento no recibieron atención para su tratamiento; es más, algunas de ellas habían superado la afectación mediante sus propios factores resilientes.

No obstante, en aquellas mujeres cuyos factores o capacidades eran menores, permanecían algunas alteraciones psicológicas incluso ocho meses después del desplazamiento. Esto, debido a que el satisfactor nuevo contexto o ciudad de acogida, relevante para satisfacer la necesidad de estar y de protección, interfirió en la identidad y pertenencia de las mujeres y en su adaptación a determinada ciudad.

En palabras de Max-Neef, estaríamos entonces frente a un “destructor o violador”, pues para la protección del grupo familiar, el desplazamiento surge como un supuesto satisfactor, que, no obstante, imposibilitó la satisfacción adecuada de otras necesidades como identidad, participación y libertad en el nuevo contexto. Al mismo tiempo imposibilitó a las mujeres la satisfacción de la necesidad de afecto por distancia-

miento con sus parejas, familia y amigos, provocando en ellas efectos colaterales en sus estados de salud.

3

QUIEBRE DEL TEJIDO SOCIAL

La familia extensa y las amistades de las mujeres desplazadas podrían considerarse como un factor protector frente a las reacciones anteriormente señaladas. Esto, debido a que en los discursos de las sujetas (os) se detecta el rol fundamental y facilitador que cumple, particularmente, la familia extensa, que las ayuda a adaptarse en el nuevo contexto.

Massey et al. (1998) menciona que las redes corresponden a los vínculos interpersonales que conectan a una persona con la ciudad de origen y de destino a través de lazos de parentesco y amistad (como se cita en Abad, 2001). En este caso, en el discurso de las sujetas (os) la familia extensa se identifica como una red de apoyo circunstancial dentro del proceso de adaptación en la ciudad de acogida:

“bueno... mi yerno tiene mucha familia acá, entonces ellos, yo te digo, nosotros llegamos aquí, no teníamos muebles, no teníamos nada, entonces nos facilitaron, por aquí un primo nos facilitó un refrigerador, el otro primo nos facilitó una cocina (...) no sé

(...) el otro nos facilitó una litera y así (...) no teníamos nada, si nosotros salimos de la casa, como te digo, con lo puesto, entonces, bueno, mi hermano también, que cualquier cosa yo corría donde él”

(Familia N°1).

Sin embargo, se percibe en el discurso cierto grado de nostalgia por no disponer de la cercanía de sus amistades en la ciudad de acogida. Es más, la mayoría de las mujeres describe su círculo social acotado a la familia extensa y no especifica otras redes de apoyo en el nuevo contexto más que esta:

“(...) acá es distinto, acá... o sea, para mí, por lo menos, porque por ejemplo amistades muchas no tengo, o sea, aparte de mis primos, que no es lo mismo que las amistades, pues, entonces eso como que se extraña más... por lo menos yo”

(Familia N°8).

Frente a esto, cabe mencionar que las personas en situación de desplazamiento forzado se ven obligadas a abandonar o perder no sólo propiedades y pertenencias, sino también relaciones y afectos construidos por años (Bello, 2004). En este punto es necesario destacar que la necesidad existencial del tener amistades en el nuevo contex-

to contribuiría a subsanar la necesidad axiológica de afecto, amortiguando los efectos que conlleva un desplazamiento en el ámbito emocional, laboral, familiar y social.

4

PROYECCIÓN DE LAS MUJERES MEDIANTE EL SER, TENER, HACER Y ESTAR

Dependiendo de las características de sus procesos de desplazamiento y adaptación al nuevo contexto, así como sus respuestas respecto a su proyección en los próximos cinco años, se dividió a las mujeres en dos grupos, correspondientes a las necesidades existenciales y axiológicas de Max-Neef.

El primer grupo correspondió a las mujeres que eran independientes pre desplazamiento o que se independizaron después de este por quiebre matrimonial o distanciamiento familiar temporal.

En ambos casos las mujeres se proyectaron en función del trabajo comunitario en la ciudad de acogida o capacitación laboral en sus trabajos vigentes en la ciudad de Copiapó. Por ello, en base a la matriz de necesidades, el ser independientes propicia la satisfacción de la necesidad de participación laboral y/o comunitaria, además del hacer que implica estudiar y trabajar para la satisfacción de la necesidad de libertad, creación y entendimiento.

El segundo contempló específicamente a dos mujeres cuyo desplazamiento a causa del aluvión no correspondía a la primera experiencia migratoria, debido a que el desplazamiento desde sus ciudades o país de origen hacia la ciudad de Copiapó había tenido lugar muchos años atrás. Por ende, en lo que respecta a las redes de apoyo pre y post desplazamiento a causa del aluvión, estas se acotaron a su núcleo familiar, ya que sus familias extensas se encontraban en sus ciudades o países de origen (Ecuador y Valdivia). En consecuencia, recogiendo el discurso de ambas mujeres, su proyección se orientó de acuerdo a las posibles fuentes laborales de sus maridos, por lo que se identifica cierta dependencia de ellos en materia económica y/o emocional, a pesar de que ambas mujeres contaban con una profesión:

“Nosotros proyectamos acá hasta que mi hija salga de cuarto medio, porque ella quiere estudiar, pero se quiere ir al sur. Ahora depende del trabajo no más de mi marido, si no, van a tener que estudiar acá”

(Familia N°10).

Al estar lejos de sus ciudades y familias de origen, el núcleo familiar de estas mujeres representaba la red de apoyo más cercana. Por tanto, el interés de permanecer junto a sus maridos se relacionaría con la necesidad de tener afecto y protección, además del fortalecimien-

to del ser referido a la autoestima por la identidad y pertenencia familiar.

Finalmente, en lo que respecta a la proyección de las mujeres en función de la familia, se reconoce un cambio de perspectiva respecto a una mayor valoración familiar y un cuestionamiento del estilo de vida que llevaba la mayoría de ellas antes del aluvión.

Generalmente se espera que un desplazamiento familiar forzado posterior a una situación de emergencia genere cambios negativos en la dinámica familiar, debido a que no se trata de una acción voluntaria que se realiza por búsqueda de mejoras laborales u oportunidades educativas, sino un desplazamiento muchas veces dramático que expone a las personas a situaciones de vulnerabilidad y a la violación de sus derechos (Acevedo, 2011). Sin embargo, para este grupo de mujeres este suceso provocó un cambio positivo en lo que respecta a la familia:

“Yo lo que destaco del cambio es como que... como que, claro, mejoró la comunicación entre mi hija y yo... entre mi hija y su hermano (...) igual me aprendí a conocer más con mi hermano, que él, cómo pasaba acá, yo no lo veía casi nunca... yo pasaba más en Copiapó”

(Familia N°8).

Lo mismo sucedió con las mujeres que debieron efectuar el desplazamiento sin

sus parejas, ya que la mayoría mantuvo su fuente laboral en Copiapó luego del aluvión. Por tanto, la valoración familiar surge a raíz de este distanciamiento, el cual, según el discurso de las sujetas, se visualizó como un posible riesgo de desintegración familiar. Según Grinberg (1984), los vínculos de familia sólidos y estables contribuirán a afrontar y tolerar en mejores condiciones las experiencias de cambio; por el contrario, si los vínculos familiares son conflictivos, la situación post desplazamiento agudizará las discrepancias y será la causante de rupturas matrimoniales, problemas entre padres e hijos y desintegración familiar (como se cita en Bello, 2004). No obstante, en este grupo de mujeres prevalece la necesidad de proteger los vínculos familiares con la convicción de una pronta reunificación.

Por tanto, según el análisis basado en la matriz de necesidades, el ser conscientes de los estilos de vida familiar que tenían antes del aluvión y desplazamiento satisface la necesidad de entendimiento de esta realidad de las mujeres, lo que les brinda la oportunidad de buscar nuevos satisfactores para las necesidades axiológicas de afecto mediante el hacer de compartir, cuidar y cultivar las relaciones familiares; y estar en el hogar. Asimismo, la necesidad de hacer identidad y ocio en familia corresponde a una proyección que desde el desplazamiento se direcciona en pos del fortalecimiento de este grupo.

5

DISCUSIÓN

Al considerar todo lo expuesto anteriormente, en los resultados surgen ciertas interrogantes. ¿El Estado de Chile ha incorporado en la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la perspectiva de género? De ser así, ¿qué garantías y herramientas entrega el Estado a las mujeres luego de un desastre? Finalmente, ¿cómo la sociedad patriarcal y el neoliberalismo inciden en la afectación de las necesidades humanas existenciales de las mujeres, tales como el ser y el hacer?

Para intentar dar respuesta a la primera interrogante es importante señalar que la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres implementada por el Estado contempla principios rectores que la guían, los cuales consideran temáticas que se deben trabajar transversalmente y que se encuentran inscritas de manera implícita en los ejes estratégicos sobre los que se fundamenta dicha política (Onemi, 2016).

Entre los principios rectores figura la gradualidad, la seguridad, la prevención, la solidaridad, la descentralización, la sustentabilidad, la coordinación, la responsabilidad, la complementariedad y la equidad (Onemi, 2016).

Este último principio considera la vulnerabilidad socioeconómica, la equidad de género, la diversidad cultural y la situación de personas con

necesidades especiales, tanto en la elaboración como en la implementación de medidas asociadas con la reducción y prevención del riesgo (Onemi, 2016). Por lo tanto, si bien la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contempla la equidad de género en sus planes y programas, desde el discurso de las entrevistadas se puede inferir que cuando los programas bajan desde el nivel central al local se produce una disyuntiva entre lo estipulado y lo ejecutado.

Considerando lo anterior y la experiencia de las entrevistadas podemos señalar que la sociedad patriarcal y el neoliberalismo inciden directamente en la afectación de necesidades existenciales como el ser y hacer.

De esta forma se favorece la generación de desigualdades e individualismo, lo que contribuye de manera directa a la perpetuación de roles, funciones y estereotipos que se han intentado disipar a lo largo de la historia por diversos movimientos sociales.

Por tanto, no es extraño evidenciar parte de estas desigualdades en las experiencias de las mujeres que se desplazaron tras el aluvión, ya que si bien se reconoce en ellas una sobrecarga laboral por el hecho de cumplir con las responsabilidades en las esfera pública y privada, no se evidencia un cuestionamiento sobre la escasa participación de sus parejas en el quehacer doméstico y de cuidado de sus hijos(as).

RECOMENDACIONES

Se destaca la importancia de contar con estudios e investigaciones sociales que den cuenta de la realidad y consecuencias invisibles que producen los desastres en los y las pobladores (as) de Chile.

El aumento de conocimiento en estas áreas es un aporte al debate nacional y a la generación de estrategias de intervención, las que deberían incluir en sus objetivos la perspectiva de género, propiciando, de esta forma, la inserción y participación de todos los sectores de la sociedad civil, con lo que se podría lograr una política pública realmente inclusiva en el ámbito de la gestión de riesgos. Asimismo, resultan fundamentales procesos gestionados por las localidades en situaciones de desastres, educación en materia de reconstrucción, reactivación y reparación, seguidos de un diálogo ciudadano permanente, participativo y vinculante.

Finalmente, en lo que respecta a las nuevas dimensiones para la medición de la pobreza multidimensional en Chile, la educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda fueron ámbitos que en su mayoría se vieron afectados por el aluvión y posterior desplazamiento.

Tomando en cuenta el Informe de Desarrollo Social de 2015 se podría decir que en el ámbito educativo la suspensión de clases de los establecimientos educa-

ciones durante la emergencia limitó la posibilidad de desarrollo e integración social de niños, niñas y adolescentes.

En salud, condición necesaria para el desarrollo de las capacidades humanas en distintos ámbitos de la vida, se identificaron mermas por alteraciones psicológicas post traumáticas como bloqueo emocional, mental, depresión, aislamiento e irritabilidad, entre otras. El trabajo, medio para acceder a recursos y satisfacer las necesidades personales y familiares, se pierde luego del desplazamiento o bien debe complementarse, en el caso de las mujeres, con las responsabilidades domésticas y de cuidado en la ciudad de acogida, lo que sobrecarga el rol femenino.

Por último, la inestabilidad habitacional a la que se vieron enfrentadas las familias cuyas viviendas sufrieron daños estructurales a causa del barro y que tuvieron que vivir en situación de allegados en la ciudad de acogida, afectó su bienestar, dignidad y la posibilidad de desarrollo de sus capacidades.

Todo lo anteriormente enunciado permite señalar que si bien las familias desplazadas tenían una situación económica estable en la ciudad de Copiapó, el cambio de contexto forzado por condiciones externas extremas expuso a las familias, y en especial a mujeres y niños (as), a la experimentación de vulnerabilidades que, en ausencia de factores protectores en la ciudad de acogida, pudieron llevarlas a un estado o situación de pobreza en una o más de estas dimensiones.

Bibliografía

- Alegría, J.; Estrada, A. (2012).
Abad, R. (2001). La decisión de emigrar y el papel de las redes migratorias en las migraciones a corta y media distancia. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, (5) 11.
- Acevedo, P. (2011). Desplazados ambientales, globalización y cambio climático. Una mirada desde los derechos humanos y los pueblos. *Observatorio Ciudadano*.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2009). Informe anual sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos.
- Arteaga, C. y Tapia, R. (2015). Vulnerabilidades y desastres siconaturales. Experiencias recientes en Chile. *Universitaria*.
- Beck, U. (2006). *Cosmopolitan vision*. Polity.
- Bello, M. (2004). Identidad y desplazamiento forzado. *Revista Aportes Andinos*, 8(2).
- Cepal. (2011). Informe anual. El salto a la autonomía “de los márgenes al centro”.
- Constitución Política de la República de Chile (act. 2010). Capítulo I, sección I, art.1. Chile. Recuperado de http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf

- Foschiatti, A. (2004). Vulnerabilidad global y pobreza. Consideraciones conceptuales. *Revista Geográfica Digital*, 1 (2). Recuperado de <http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/archivos/vulglobal.pdf>
- Gobierno de Chile (2015). Plan de reconstrucción Atacama. Recuperado de <http://reconstruccionatacama.subdere.gov.cl/download/PlanReconstruccionAtacama.pdf>
- Hernández, J. (2010). Vulnerabilidad social, neoliberalismo y desastre. Sueños y temores de la comunidad desplazada/damnificada por el terremoto/tsunami. *Sociedad Hoy*. (19) 113-140. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90223044008>
- Jiménez, C. y Soledad, J. (2011). Los desplazados ambientales, más allá del cambio climático. Un debate abierto. *Cuadernos Geográficos*. (49) 201-215. Recuperado de http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29674/1/Egea_Medioambiente.pdf
- Magaña, I., Silva-Nadales, S. y Rovira, R. (2010). Catástrofe, subjetividad femenina y reconstrucción: aportes y desafíos desde un enfoque de género para la intervención psicosocial en comunidades afectadas por el terremoto. *Terapia psicológica*, 28(2), 169-177
- Max-Neef, M. (1994). *Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Barcelona: Leiria Editorial S.A.
- Milosavljevic, V. (2007). Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y tendencias en América Latina.
- Ministerio de Desarrollo Social (2015). *Informe de Desarrollo Social*.
- Ministerio del Interior y Seguridad Pública (2014). *Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres*. Recuperado de <http://repositoriodigital.onemi.cl/web/bitstream/handle/2012/1710/PoliticaNacRRD2014.pdf?sequence=1>

Moreno, C. (2015). Introducción a los conceptos de sexualidad y género. Material del curso “Sexualidades en la escuela” impartido en UAbierta, Universidad de Chile. Catástrofe, subjetividad femenina y reconstrucción: aportes y desafíos desde un enfoque de género para la intervención psicosocial en comunidades afectadas por el terremoto.

Onemi (2016). Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Sola, O. (2012). Desplazados ambientales. Una nueva realidad. Deusto Digital. (66) 9 -111. Recuperado de: <http://www.deustopublicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho66.pdf>

Terminiello, J. (2013). Hacia un cambio de paradigma en el abordaje de los desastres naturales y el cambio climático como amenaza a los derechos humanos. Revista de Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo. 2 (2). 99-140. Recuperado de http://www.palermo.edu/derecho/pdf/DA_N3_03.pdf

4.

Modelo Servicio País Salud Comunitaria: Reflexiones y contribución en torno a la implementación de la Reforma de Salud en Chile

Pía Monardes Morales¹



Resumen

La Reforma de Salud acentuada en el inicio del año 2000 pretendía ser un cambio sustancial en la totalidad del sistema de salud, desde el enfoque que lo sustentaba, hasta en los equipos de salud y su manera de implementar este nuevo modelo.

Sin embargo, este proceso “ha introducido transformaciones no exentas de complejidades técnicas y operativas” (Méndez, 2009, p.279). Por tanto, el cambio que promovía la Reforma de Salud ha tenido una “etapa de transición (...) muy lenta” (Ibarra et al, 2012:3), afectando que dicho proceso pueda ser implementado en su totalidad. Son diversos estudios –(Ibarra et al, 2012); (Pomodoro, 2009) (Püschel et al, 2013) y (Méndez, 2009)– los que analizan esta problemática.

El presente *paper* tiene como objetivo analizar algunas variables que podrían obstaculizar una implementación totalmente exitosa de la Reforma, reflexionando en torno a las intervenciones de Servicio País Salud Comunitaria, y cómo éstas han sido un aporte al desarrollo e implementación de la Reforma en localidades donde aún existen obstáculos para ello.

Todas las intervenciones de Servicio País promueven un modelo promocional, poniendo al centro a las personas, hogares, comunidades y organizaciones, enfoque que va acorde

(Sigue en la página siguiente)

1/ Trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesional Servicio País ciclo 2013-2014 en la comuna de Caldera, Región de Atacama. Actualmente se desempeña como Coordinadora Gestión RSE de la Fundación Urbanismo Social.

a los principales lineamientos de la Reforma. Se propicia un trabajo en conjunto con los Centros de Salud.

Los profesionales del programa permiten que se genere y fortalezca el trabajo conjunto con los equipos de salud, logrando incluso -a través de sus conocimientos, metodologías y herramientas- que los equipos conozcan nuevas estrategias, las cuales se pueden replicar en instancias futuras. Servicio País Salud Comunitaria permitiría visibilizar las acciones que se realizan en comunas aisladas, y servir de ejemplo a otras localidades, incluso compartir experiencias con otras iniciativas locales, teniendo como horizonte que la promoción de la salud puede ser desde lo local, con actores locales, impulsado y facilitado por programas como Servicio País, bajo el alero y queriendo aportar a la Reforma de Salud.

Palabras clave: salud comunitaria, intervención social, políticas públicas.

1

MODELO DE SERVICIO PAÍS Y SERVICIO PAÍS SALUD COMUNITARIA

Uno de los propósitos² con que el Programa Servicio País actúa en sus intervenciones sociales es que las personas en situación de vulnerabilidad social puedan visibilizar y activar sus capacidades para desenvolverse en alguno de los ámbitos de bienestar (salud, trabajo, cultura, educación y hábitat).

Este propósito es crucial para comprender el enfoque conceptual con que Servicio País observa y ejecuta las intervenciones. Superar la pobreza no es sólo tener más ingresos, sino que se requiere que las personas puedan desenvolverse en diversos ámbitos del desarrollo: “El bienestar de las personas no se vincula sólo a la dimensión del tener, sino que se relaciona también, y cada vez con mayor fuerza, al hacer, ser y estar” (FSP, 2013, p.10).

Las propias personas señalan que sienten impotencia por no poder concretar sus proyectos de vida, sentirse invisibilizados frente a la sociedad (Voces de la Pobreza, 2010). Es por

ello que Servicio País aporta con sus profesionales a que las personas, hogares, comunidades y organizaciones puedan desarrollarse en esos ámbitos, contribuyendo a la equidad e integración social.

La definición de pobreza para el programa alude que es fenómeno multifactorial en sus causas, multidimensional en sus manifestaciones, mutiarquetípico en sus expresiones socioculturales (FSP, 2013, p.10), implicando que toda intervención tiene que ser necesariamente integral en su mirada, y tiene que estar situada y contextualizada a la realidad local de las personas, hogares y comunidades, para así poder lograr una intervención eficaz y sustentable.

La salud, para Amartya Sen, es una de las capacidades humanas básicas para la superación de la pobreza. Por lo tanto, poder contribuir desde el Programa a que las personas, hogares, comunidades y organizaciones puedan desenvolverse en este ámbito, confirma que la pobreza no se vincula sólo con el tener.

De hecho, la salud no es un tema privativo de la medicina, es un concepto que ha sido tema para diversas disciplinas. Por lo mismo, el concepto se ha ido modificando en el tiempo, demostrando con ello que “es un término vivo, dinámico y por ello relativo” (Sciotto, S/A, p. 2), lo que se vuelve fundamental si se considera que la salud puede ser comprendida como la

2/ El segundo propósito del programa alude a que quienes sean facilitadores de la intervención puedan también generar competencias en intervención e investigación social en contexto de pobreza.

valoración y dinámica que las personas le entregan según la sociedad en la que se insertan.

Junto a ello, el rol que tiene la salud en la vida de las personas es fundamental, ya que “nunca podrá perder su importancia y significatividad (...) porque es una categoría que enmarca la propia esfera del ser y del estar éste en-el-mundo” (Castañón, 2009, p.1).

La salud abarca mucho más allá que la ausencia de enfermedades, es eso y más³. El hecho de que la salud sea transversal en todos los ámbitos de desarrollo es porque se vincula directamente con el quehacer del ser humano en la sociedad, teniendo repercusiones en el bienestar, satisfacción y calidad de vida, la salud es “uno de los anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la cualidad previa para poder satisfacer cualquier otra necesidad o aspiración de bienestar y felicidad” (Castañón, 2009, p. 2).

A partir de lo expuesto, se reflexiona el concepto de Salud Comunitaria, ámbito de desarrollo con el que trabaja Servicio País. Dicho concepto no es muy conocido en el imaginario colectivo, pues el concepto general que se tiene de Salud ha sido vinculado históricamente a un enfoque biológico y asistencial. Por lo mismo, es un desafío comprender y a la vez difundir el con-

cepto de Salud Comunitaria a quienes participan en las intervenciones.

Salud Comunitaria puede definirse como “una estrategia o enfoque que se identifica con lo local, considera a los determinantes de la salud y pone al centro a las personas y a su entorno” (FSP, 2013,p.19). O dicho de otra manera, es la conjunción de la salud individual y de grupos en una comunidad definida, determinada por la interacción de factores personales, familiares, así como por el ambiente socioeconómico-cultural y físico” (Gofin J, Gofin, 2010 p. 269).

Este ámbito de acción necesariamente conlleva el desarrollo comunitario⁴ como estrategia de intervención social, por tanto, implica varios procesos que son necesarios para su éxito: participación social, consideración de los contextos, situar las intervenciones, una acción interdisciplinaria, etc. Esta participación activa de las personas y comunidades ha sido vislumbrada

3 / En el X Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana (1976), definen a la salud como aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa.

4 / Según el documento de la Fundación Superación de la Pobreza “Intervención Social en Salud Comunitaria” (2013), el enfoque implica la Participación Social constante por parte de los actores, con procesos de permanente reflexión individual, grupal y comunitario, considerar aspectos macro y micro-sociales, etc., lo que implica que los aspectos locales donde se realiza la intervención social es crucial a la hora de seleccionar y ejecutar las acciones que se deban tomar para el éxito y sustentabilidad de la intervención, de hecho se requiere poner al centro a las personas y comunidades, reconociendo su singularidad, es decir, se sitúa a la persona como protagonista, pudiendo decidir sobre su propia vida y de su comunidad.

da desde la proclamación de la Carta de Ottawa (1986), que alude a que las personas tienen el poder de realizar las transformaciones que requieran, las cuales irían en dirección de mejorar y asegurar el buen vivir, disminuyendo toda causa que amenace su bienestar.

Por todo lo anterior es que el Profesional Servicio País de Salud Comunitaria actúa como un facilitador de procesos, promoviendo que las personas y organizaciones puedan fortalecer sus propios recursos y capacidades, acercándolos a la estructura de oportunidades del sector público, privado y de la sociedad civil, logrando que las personas puedan desarrollarse y tomar el control de sus propias vidas y el de su comunidad, pudiendo tener una vida mucho más saludable.

2

REFORMA DE SALUD: LOS OBSTÁCULOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

En la década de los años 90, en la región de América y el Caribe comenzaron a iniciarse procesos de reforma social y dentro de ellos comenzó la Reforma de Salud en Chile, la cual fue motivada por la existencia de una población no satisfecha con el sistema de salud. Por lo mismo, los objetivos que guiaron a la Reforma aludieron a tener “a) mayor equidad

en el acceso y calidad de los servicios de salud; b) eficacia en las acciones realizadas; c) adecuada protección financiera frente a los eventos de enfermedad; d) mayor y mejor respuesta a las expectativas de la población; y e) mayor participación de la población” (Gobierno de Chile, 2007.p.4).

La Reforma de Salud ha sido un proceso largo y gradual, intensificándose en los inicios del año 2000, pues “ha introducido cambios radicales que están transformando el Sistema de Salud Chileno” (Subsecretaria de Redes Asistenciales, 2008:7). Su principal propósito fue satisfacer las demandas de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Por lo mismo, la Reforma trae consigo un cambio de paradigma, sobre todo en la Atención Primaria⁵, la que “contemplaba originalmente un fortalecimiento de la atención primaria y un cambio en el modelo de atención, desde uno esencialmente curativo a otro que incorporara con mayor fuerza la prevención y la integralidad en la atención” (Püschel et al, 2013, p.28.), dando paso a un modelo biopsicosos-

5 / En un estudio sobre la Reforma de Salud en Chile, los propios usuarios definían el modelo anterior como “tradicional, antiguo y paternalista centrado en la relación paciente-médico, donde este último ejerce la autoridad, con una intervención sólo biológica, es decir: centrada en la patología (...) también hacen referencia a que este modelo se centra en el rendimiento, es decir, mayor número de atención versus la calidad de atención otorgada” (Ibarra et al, 2012:2).

cial que, según (Colomer , 2001), permitiría una atención más eficiente y eficaz, tratando al paciente y a su enfermedad como un conjunto que debe ser tratado de manera integral, considerando la adaptación al medio físico, cultural y social.

Este paradigma se concretiza en la génesis de los llamados Centros de Salud Familiar (Cesfam) y Centros Comunitario de Salud Familiar (Cecof). Ambas institucionalidades responden al “nuevo modelo de atención que, de carácter integral, familiar y comunitario, hace suyas las demandas ciudadanas”(Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2008, p.14).

Se esperaba que dicho cambio pudiera implementarse de manera transversal en todo el país. Sin embargo, diversos estudios referidos a la implementación de la Reforma-Ibarra et al 2012; (Pomodoro, 2009), (Püschel et al, 2013) y (Méndez, 2009)-, coinciden en que la respuesta no ha sido así, ya que existen ciertos obstáculos para su implementación. De hecho, la Reforma” ha introducido transformaciones no exentas de complejidades técnicas y operativas” (Méndez, 2009, p.279), por tanto, el cambio que promovía la Reforma de Salud ha tenido una “etapa de transición (...) muy lenta” (Ibarra et al, 2012, p.3).

Lo anterior puede explicarse, en parte, por diversas variables, como la poca dotación de profesional del área en los centros de salud (sobre todo en

localidades aisladas), la alta rotación de profesionales, resistencia del modelo tanto por parte de los profesionales como de los usuarios, entre otras.

Estas variables se han podido observar, por ejemplo, en lo mencionado por el Plan Trienal (2013-2015) confeccionado por el Cesfam Caldera⁶, quien identifica diversas brechas que obstaculizan el cumplimiento total de sus objetivos, las cuales son: el constante cambio del personal de salud, la falta de recurso profesional (enfermero, nutricionista y matrona), la falta de recurso humano en algunas áreas, y la falta de inducción al personal nuevo del Cesfam sobre el Plan, entre otros. De hecho, durante el año 2014, se realizó un operativo médico social⁷ que indicaba la necesidad de contar con más profesionales para atender, en sus diversos niveles, a la población de la comuna.

Sumado a estas variables, se agregan las “ausencias” que obstaculizarían su implementación:

6/ La comuna de Caldera, Región de Atacama, posee intervenciones de Servicio País Salud Comunitaria desde el año 2012.

7/ 29 profesionales de la Salud (médicos, profesores y becados) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile brindaron más de 500 prescripciones, entre visitas domiciliarias, consultas médicas, charlas preventivas a la comunidad, etc. La iniciativa se realiza desde hace tres años y beneficia a comunidades vulnerables y con necesidades especiales de salud, como el caso de la comuna de Caldera.

“La reforma del sector salud, en general, carece de consideraciones sustanciales en cuanto al personal sanitario, nueva infraestructura, equipos y consumibles, lo que se traduce en una de las grandes limitaciones al momento de ejecutar cualquier proceso de cambio” (Sepúlveda-Álvarez en Méndez, 2009: 278).

En relación al déficit de equipos y/o infraestructura en salud, por ejemplo en la comuna de Caldera, existía déficit de ambulancias. Este escenario fue identificado por el Programa a través de la intervención de Salud Comunitaria durante el ciclo 2011- 2012, aportando mediante la postulación a fondos concursables⁸ la adquisición de una ambulancia para el Cesfam.

Según un estudio chileno realizado en regiones, la mayoría de los profesionales y técnicos de salud “manifiestan que existe una serie de dificultades, (...) no se han visto cambios en la atención que se entregaba antiguamente en un

8/ El nombre del proyecto fue “Salud comunitaria y rural sobre ruedas, Caldera se acerca con una salud equitativa para su comunidad”, cuyo objetivo fue incrementar la flota de vehículos con que cuenta el CESFAM Caldera y EL CECOSF, mediante la adquisición de una Ambulancia que permita entregar una atención oportuna y de calidad a las personas de la Comuna de Caldera, especialmente a aquellos que se encuentran en zonas aisladas y rurales como son: Puerto Viejo, Barraquilla y María Isabel. La adquisición fue gracias a la postulación al fondo de la Embajada de Japón.

consultorio, para muchos sigue siendo lo mismo” (Ibarra, 2012, p. 3).

Incluso la situación se argumenta más debido a que se sigue priorizando el número y la cantidad de usuarios atendidos, en vez de priorizar la atención integral que es ofrecida al paciente desde la implementación de la Reforma.

La situación descrita anteriormente alude a que no se ha podido implementar a cabalidad la Reforma dentro de los equipos de salud, lo cual evidenciaría un problema latente, ya que estos tienen un rol primordial para su exitosa implementación.

De hecho, la Reforma contemplaba un cambio importante dentro de los roles y funciones que venían trayendo los equipos del área, pasando de profesionales cuyo objetivo era curar, a uno que pudiera “asumir los roles de facilitador y animador de grupos, promotor de organización y desarrollo local, educador, integrados y coordinador con la comunidad” (Neira y Corbalán, 2002., p.11).

A pesar de los obstaculizadores mencionados, se ha podido observar este cambio de rol en diferentes iniciativas de la APS⁹ a nivel nacional, que fueron expuestas en un banco de buenas prácticas, cuyo objetivo es fortalecer e intercambiar experiencias que puedan ser replicables en los distintos establecimientos, adaptándolos a sus contextos locales.

9/ Atención Primaria en Salud.

Un ejemplo sobresaliente –y el ganador del concurso de buenas prácticas 2014– es el del Cesfam de Salud San Pedro, comuna de Quillota, con su iniciativa “Feria Ecológica San Pedro”, la que permitió demostrar que se puede realizar un trabajo intersectorial, en base al diagnóstico participativo liderado y organizado por el equipo de salud y la propia comunidad.

3

SERVICIO PAÍS SALUD COMUNITARIA Y SU APORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA

La discusión anterior permite tener una visión más amplia de lo que ha significado, en lo operativo, la implementación de la Reforma de Salud. Todos los obstaculizadores mencionados no han permitido que la Reforma pueda desplegarse en su totalidad, mermando la posibilidad de que los usuarios del sistema de Salud puedan beneficiarse de ella, sobre todo en los aspectos donde la persona juega un rol protagónico, como en las instancias comunitarias y participativas que la Reforma propiciaba.

Es en ese panorama donde podrían desempeñar un papel importante los Profesionales de Salud Comunitaria de Servicio País, pues la visión de intervención social que posee el programa

sería complementaria a las funciones de los equipos de salud.

Las intervenciones promocionales¹⁰ pretenden que los profesionales sean facilitadores de procesos sociales, propiciando que personas, hogares, comunidades y organizaciones puedan acceder a las diferentes oportunidades que otorgan el Estado, el sector privado y la sociedad civil, y de esa forma, generar instancias donde sean ellos – usuarios, sujetos y/o actores sociales de intervención– quienes, desde la visibilización y activación de sus recursos y capacidades, puedan ser protagonistas de su desarrollo.

Las intervenciones de Salud Comunitaria de Servicio País se enmarcan, principalmente, en la acción social realizada por los centros de salud de la APS (Cesfam y Cecof), ya que éstos son los que promueven lineamientos comunitarios de manera explícita para la atención de salud.

Junto a ello, son estos centros de salud los que tienen como origen a la comunidad, la cual participa y colabora en las prestaciones que debiesen tener, pues están insertos en un determinado territorio, potencialmente permitirían disminuir las brechas de acceso, oportunidad y calidad de sus servicios. Por lo tanto, y a partir del lineamiento comunitario que poseen,

10 / Enfoque de las intervenciones del Programa Servicio País.

son conocedores de la realidad local, la que se observa desde sus diagnósticos comunitarios, iniciativas locales, etc.

Esta situación muestra que dichos establecimientos son lugares institucionales idóneos para que el Profesional Servicio País pueda desarrollar la intervención comunitaria con enfoque promocional, pues permitiría una acción conjunta y colaboradora con los equipos de salud.

Otros ejemplos, en los que ha participado el PSP, aluden a propiciar espacios donde los usuarios puedan ejercer una ciudadanía activa, es decir, participar activamente en las instancias institucionales que promueven los Centros de Salud.

Los Consejos de Desarrollo Local¹¹ persiguen objetivos comunes, permitiendo que la comunidad pueda interactuar a través del diálogo con los diferentes actores involucrados en el territorio –carabineros, juntas de vecinos, equipos de salud, autoridades, departamentos municipales, etc.–, donde cada uno de ellos poseen roles diversos, pero complementarios entre sí.

Participar en estas instancias permite mirar desde diferentes ópticas la realidad local, y a partir de ello, iden-

11/ Esta instancia participativa tiene como propósito fortalecer la acción comunitaria para que los usuarios participen y decidan sobre los asuntos de salud que les afectan, crear estilos de gestión participativa en los planes y programas del sector, e impulsar una acción intersectorial a favor de la promoción de la salud.

tificar las principales problemáticas para poder generar conjuntamente acciones locales que permiten aportar a la solución de dichos escenarios.

Un ejemplo de ello, alude al Consejo de Desarrollo de Salud en Caldera¹², instancia que se reactivó en el año 2013, y que culminó ese año con una nueva directiva y actualización de su personalidad jurídica por 3 años más, trabajo que se realizó en conjunto con los profesionales de Servicio País Salud Comunitaria. Dicho proceso permitió que trabajaran durante todo el año 2014, de manera constante, logrando una directiva conformada durante todo el año, pudiendo convocar a diferentes actores sociales de la comuna para identificar falencias y buscar soluciones conjuntas¹³.

Otro punto a considerar en el aporte que dan las intervenciones de Salud Comunitaria en las comunas y localidades, se vincula con la relación que tiene el Programa Servicio País con las contrapartes institucionales de cada intervención.

En cada comuna y localidad donde el programa se inserta, desde el inicio,

12/ El Consejo de Desarrollo de Salud de Caldera es la máxima instancia ciudadana de Salud, donde su rol es "facilitar el control social de la gestión pública, contribuyendo al buen funcionamiento de los establecimientos de salud, y dar respuestas adecuadas a los ciudadanos (Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2005).

13/ La directiva del Consejo de Desarrollo Local de Salud son integrantes de la agrupación Mensajeras de Salud, lo cual demuestra el nivel de empoderamiento y ganas de participar en el ámbito de su expertís.

se promueve un trabajo conjunto con el gobierno local –municipalidades–, pues son ellos los principales conoedores de la realidad de su comuna, logrando una construcción conjunta de los lineamientos generales donde las intervenciones del programa debieran apuntar.

Este escenario da pie a que se generen relaciones de confianza y reciprocidad entre la contraparte y el programa, logrando que las intervenciones de Salud Comunitaria puedan apoyar la gestión de estas instituciones de diversas formas: generar y/o fortalecer redes del equipo comunal con el sistema de salud, generar mayor acercamiento entre los usuarios de los centros con el equipo municipal, brindar mayor información de los programas municipales, entre otros.

Una experiencia que demuestra el trabajo articulado con el gobierno local, sus departamentos municipales y los establecimientos de salud, son las diversas acciones que se realizó en la comuna de Caldera durante el año 2013, donde se trabajó en conjunto con el área de Promoción del Cesfam en diferentes operativos de salud; destacándose el día mundial sin fumar, el día mundial de la alimentación, celebración del mes del corazón, y una plaza saludable con alumnos voluntarios de la Universidad Santo Tomas, Cesfam y Departamento de Deportes.

Adicionalmente, en la misma comuna, se generó y logró potenciar el

trabajo en red, involucrando a diferentes actores comunales e institucionales en la conformación de la Mesa Comunal dirigida a la Propuesta de Buen Trato y Prevención del Abuso Sexual en niños y niñas de la comuna de Caldera¹⁴.

Para ambas instituciones, generar una alianza de trabajo conjunta permite obtener logros a favor de la ciudadanía: por un lado, el gobierno local consigue ser más visible y cercano a la gente, pues lo ven en su propio territorio y barrio, permitiéndoles un acceso más fácil y expedito a sus servicios; y por el otro, los Centros de Salud demuestran estar coordinados con la municipalidad, trabajando intersectorialmente, y logrando acercar la estructura de oportunidades a los usuarios de los establecimientos.

Servicio País Salud Comunitaria permite ser un enlace entre ambas instituciones y todos los actores cuya temática de interés sea la salud, espe-

14 / Esta propuesta fue ideada por el Jardín Infantil Olitas de Mar, perteneciente a la red Junji, la cual fue apoyada por el equipo Servicio País Cultura – 2012-. Dicha propuesta fue implementada en los Jardines Infantiles municipales y cursos de prebásico en establecimientos municipales, y se transformó en una propuesta innovadora, pues se trabajó con la metodología “cuentacuentos”.

Para el año 2013 se potenciaron e incorporaron diversas temáticas en torno a mejorar la propuesta, además de incluir a los Jardines Infantiles y Sala Cuna de Fundación Integra en la mesa comunal. Se potenció el trabajo gracias al aporte del equipo municipal de Senda Previene, el cual fue un actor clave desde el diseño hasta la implementación de la propuesta.

cíficamente en el área de promoción y comunidad. Por tanto, las intervenciones del Programa Servicio País permiten que sus acciones aporten y posibiliten que la implementación de la Reforma se lleve a cabo, pues sus lineamientos van en la misma dirección que los que la Reforma propone, en su caso, desde la política pública.

Por todo lo anterior, se considera que las intervenciones de Servicio País Salud Comunitaria son un verdadero aporte para lograr que la implementación de la Reforma de Salud en la APS pueda ser exitosa; desde aportar sus conocimientos, metodologías y herramientas a las instancias comunitarias en salud, hasta generar y fortalecer iniciativas territoriales a favor del desarrollo local, vinculadas al ámbito de salud¹⁵.

Todas estas acciones son realizadas necesariamente con la participación activa de la comunidad, donde ésta identifica problemas, soluciones y temas de interés, por tanto, y gracias al trabajo colaborativo, las intervenciones sociales del programa logran ser pertinente a la realidad local, se sitúan tanto en su contexto geográfico

15 / Las actividades que se enmarcan en fortalecer las iniciativas de desarrollo local son el asesoramiento que los jóvenes profesionales realizan a las diferentes organizaciones sociales en temas de salud, los servicios de capacitación y formación (talleres, coloquios, etc.), la vinculación que se genera y/o fortalece con los diversos actores del territorio vinculado a la salud, permitiendo fortalecer el tejido social, entre otras.

como en su contexto social y cultural, permitiendo que las acciones tengan el componente de sostenibilidad, es decir, que a pesar que se terminen los ciclos de intervención de Salud Comunitaria, las organizaciones con las que se trabajó puedan seguir fortaleciéndose, logrando su completa madurez y autonomía, proyectando sus acciones más allá del apoyo temporal que brinda el programa.

Para finalizar, cabe mencionar que la mayoría de las organizaciones con las que se trabajó durante todo el ciclo de intervención de Salud Comunitaria en Caldera lograron elementos que les permiten seguir realizando sus labores, incluso proyectando acciones que trascienden lo local. Por ejemplo, Las Mensajeras de Salud actualmente son reconocidas y validadas por sus pares, conocidas a nivel comunal y regional, poseen un fuerte sentimiento de pertenencia e identidad con su agrupación, llevándolas a tener altos niveles de corresponsabilidad en lo que hacen; constantemente se autocapacitan y autogestionan, entendiendo que esa es la forma para seguir informándose y estar al día con los problemas de salud; además, han fortalecido la alianza con los centros de salud y organizaciones pertinentes, así como desarrollan de manera innovadora las réplicas de salud.

Todo esto las ha llevado a querer salir de sus fronteras comunales y llevar este modelo promocional de salud a nivel nacional. Este tipo de iniciativa

permitiría visibilizar las acciones que se realizan en comunas aisladas, y servir de ejemplo a otras localidades, incluso compartir experiencias con otros promotores de salud, teniendo como horizonte que la promoción de salud puede ser desde lo local, con actores locales, impulsado y facilitado por Programas como Servicio País Salud Comunitaria, bajo el alero de la Reforma de Salud.

4

CONCLUSIONES

Salud Comunitaria es uno de los ámbitos de acción con que el Programa Servicio País quiere aportar para que personas, hogares, comunidades y organizaciones puedan desenvolverse y desarrollarse de manera plena en la sociedad. Para ello, mayoritariamente las intervenciones de dicho ámbito se enmarcan dentro de los Centros de Salud de cada comuna y localidad, debido a que sus lineamientos – implementados desde la Reforma de Salud en Chile– coinciden con los ejes de acción que Servicio País Salud Comunitaria posee.

La Reforma de Salud ha tenido ciertos obstáculos para poder implementarse con éxito en su totalidad, como por ejemplo, la poca dotación de profesional del área en los centros de salud (más aún en localidades aisladas), la alta rotación de profesionales,

resistencia del modelo tanto en profesionales como en los usuarios, ausencia de infraestructura y/o equipos, etc.

Es por ello que, a partir de la revisión de ejemplos de buenas prácticas, y de la experiencia del Programa Servicio País en la comuna de Caldera, Región de Atacama, se puede pensar que Servicio País Salud Comunitaria podría convertirse en un gran aporte para que la Reforma en Salud pueda implementarse de manera exitosa, pues los lineamientos que tiene el programa– implementación y trabajo que posee con las diferentes organizaciones e instituciones relativas al tema, los servicios que ofrece, y el rol de facilitador que tienen los profesionales– permiten generar condiciones de posibilidad para que sea la comunidad la protagonista de sus procesos y pueda empoderarse de su rol en el ámbito de salud, que es lo que justamente promueve la Reforma.

Uno de los ejemplos claros que se ha plasmado en el presente artículo, el vinculado a la agrupación femenina Mensajeras de Salud, permite demostrar con evidencia que trabajar de manera colaborativa entre las intervenciones de Servicio País Salud Comunitaria, Centros de Salud y equipo municipal, permite desarrollar iniciativas locales cuyo horizonte es ser referentes de la salud comunitaria, específicamente en el área de promoción de salud.

Esto último es uno de los propósitos que tiene la Reforma, lograr una ciudadanía activa y empoderada, corresponsable de sus acciones, que pueda incluso

controlar las acciones del sistema de salud a favor del buen desenvolvimiento de sus prestaciones hacia la comunidad.

Esto demuestra la importancia que tienen las intervenciones de Salud Comunitaria en las comunas y localidades donde se insertan, pues detonan procesos sociales a través de la visibilización y activación de las capacidades de las organizaciones, funcionan

como un puente o enlace entre los diversos actores, propiciando el diálogo entre ellos y concretizándose en iniciativas como las mencionadas en este *paper*, y lo más importante, que finalmente las agrupaciones puedan proyectar sus acciones más allá del apoyo temporal que realizan los profesionales, demostrando que el objetivo del programa ha sido logrado.

Bibliografía

- Asociación Chilena de Municipalidades, 2014. “5to concurso de Buenas Prácticas”. [en línea] Chile. Disponible en: <http://buenaspracticaps.cl/banco-de-practicaps/50-concurso-de-buenas-practicaps-asociacion-chilena-de-municipalidades/> [obtenido el 16 de enero de 2015].
- Bastías, G. y Valdivia, G., 2007. “Reforma de Salud en Chile; el Plan Auge o régimen de garantías explícitas en salud (GES). Su origen y evolución”. Boletín de Escuela Medicina UC, Pontificia Universidad Católica de Chile. Volumen 32 N°2.
- Cardenas, C. y Pinninghoff, C., 2013. “Modelo Integral de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario: Experiencias en la implementación desde un equipo de atención hospitalaria”. Revista Chilena Salud Pública. Vol. 17 (2), pp.139-146.
- Castañón, 2009. “El concepto de Salud” [en línea]. Disponible en: <http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/03/concepto-de-salud.pdf/> [obtenido el 10 de marzo de 2015].
- Cesfam Caldera, 2013, “Plan Trienal Cesfam Caldera 2013-2015”. [en línea] Chile. Disponible en: <http://www.calderatransparente.cl/Salud/plan/plantrienal.pdf>
- Gofin J, Gofin R. Essentials, MA: Jones & Barlett Learning, 2010. Essentials of global community health. [en línea]. Disponible en: http://samples.jbpub.com/9780763773298/73298_FMxx_00i_xxii.pdf [obtenido el 10 de marzo de 2015].
- Fundación Superación de la Pobreza., 2013. “Intervención Social en Salud Comunitaria Servicio País”.
- Fundación Superación de la Pobreza, 2013. “Primer Informe Técnico de Avance Servicio País, periodo enero-junio 2013. Convenio FSP-MDS ciclo 2013-2014.
- Ibarra, Jacqueline; Hernández, Arlette y Meza, Samuel, 2012. “Percepción de la transición del modelo biomédico al modelo

- biopsicosocial en usuarios internos del Cesfam Pinares, comuna de Chiguayante”. Trabajo de Investigación Medwave. Año XII, No. 1, Enero 2012. Open Access, Creative Commons.
- Maceira, D., 2007. “Actores y reformas en salud en América Latina”. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible.
- Méndez, C., 2009. “Los recursos humanos de salud en Chile: el desafío pendiente de la reforma”. Universidad Austral de Chile.
- Monardes, P., y Morales, R., 2013. “Informe Final Intervención Enfoque de Género y Desarrollo”. Servicio País. Fundación para la Superación de la Pobreza.
- Neira, O., y Corbalán, P., 2002. “Implementación del Modelo de Salud Familiar, un cambio complejo para los equipos de salud”. Centro de Salud Familiar La Reina. Facultad de Medicina. Universidad Austral de Chile.
- Püschel, K., Téllez, A y Montero, J., Brunner, A., Peñaloza, P., Rojas, Poblete, M., F, Pantoja, T., 2013. Pontificia Universidad Católica de Chile “Hacia un nuevo modelo de atención primaria en salud: evaluación del proyecto de salud familiar Ancora UC”. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Pomodoro, L., 2009. “Concepto de Atención Primaria y Modelos de Atención”. Matrona Docente [en línea]. Disponible en: <http://docslide.net/documents/concepto-de-mpa-y-modelos-de-atencion-primaria.html>
- Subsecretaria de Redes Asistenciales, 2008. “En el camino a centro de salud familiar”. Gobierno de Chile.
- Superintendencia de Salud, 2007. “Evaluación de la Reforma de Salud y Situación del Sistema Isapres. Diseño Metodológico y Definición de Líneas Basales”. Gobierno de Chile.
- Subsecretaria de Redes Asistenciales y Organización Panamericana de la Salud, 2013. “Orientaciones para la implementación del modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria”. Gobierno de Chile.

5.

Volver al Valle del Huasco: cuadrando el círculo de las políticas públicas

Claudio Frites Camilla¹, Felipe Vargas Aceituno²



Resumen

A continuación, se presentan reflexiones sobre las intervenciones del Programa Servicio País realizadas en el Valle del Huasco durante el ciclo 2009. En primer lugar, se describen someramente las características e historia del territorio. Luego, se caracteriza a las comunidades, que son percibidas como vulnerables ante el desempleo y atrasadas en lo productivo, reproduciendo un sistema dependiente y precario en múltiples dimensiones. En tercer lugar, se analiza el rol del profesional Servicio País, inserto en este contexto y cuáles son los principales desafíos que enfrenta. Por último, se ofrecen algunas conclusiones.

El trabajo busca evidenciar las contradicciones que deben enfrentar en el quehacer los profesionales de Servicio País, en un territorio complejo y diná-

mico, a partir de la implementación de políticas públicas orientadas de manera primaria al fomento productivo y que favorecen espacios de gobernabilidad, en lugar de espacios de autonomía para las comunidades. Surgiendo entonces la pregunta: ¿se busca superar la pobreza, o estandarizar modelos de vida?

Estas ideas se desarrollan a partir de las intervenciones de Servicio País en que participaron los autores durante el ciclo 2009-2010 en el Valle del Huasco, relatando las tensiones que se debieron enfrentar y resolver, frente a los conflictos de las comunidades y organizaciones con las autoridades políticas y técnicas de la provincia.

Palabras clave: intervención social, políticas públicas, pobreza.

1/ Sociólogo. Profesional Servicio País ciclo 2009-2010 en la comuna de Vallenar, Región de Atacama. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo del Programa Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) - Universidad de Santiago.

2/ Geógrafo. Profesional Servicio País ciclo 2009-2010 en las comuna de Huasco y Vallenar, Región de Atacama. Actualmente se desempeña como Profesional en el Programa Quiero mi Barrio, en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

1

VALLE DEL HUASCO, EL TERRITORIO Y SUS CARACTERÍSTICAS

Salud Comunitaria es uno de los ámbitos de acción con que el Programa Servicio País quiere aportar para que personas, hogares, comunidades y organizaciones puedan desenvolverse y desarrollarse de manera plena en la sociedad. Para ello, mayoritariamente las intervenciones de dicho ámbito se enmarcan dentro de los Centros de Salud de cada comuna y localidad, debido a que sus lineamientos – implementados desde la Reforma de Salud en Chile – coinciden con los ejes de acción que Servicio País Salud Comunitaria posee.

El Valle del Huasco se ubica dentro de la región de Atacama, comprendiendo, de este a oeste, las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco. En lo productivo, históricamente este valle ha tenido su vocación en la agricultura y la minería. Sin embargo, no se trata de fenómenos comparables en el tiempo, dado su impacto, dimensión y escala, puesto que pasamos de los pequeños agricultores y pirquineros de hace algunas décadas, a la agroindustria y la mega minería de la actualidad³.

3 / La gran minería ingresa de forma intensiva recién a partir de los años 60, gracias a la presencia de importantes yacimientos de hierro y al micro auge industrial

El proceso que acompaña este desarrollo ha sido caracterizado por Harvey (2004) como de acumulación por desposesión, dinámica de territorialización a partir de la que se manifiestan los desarrollos desiguales, que se caracterizan por la dispar distribución espacial entre la explotación, la contaminación y la acumulación del capital⁴ (Harvey, 2007; Smith, 1991; O'Connor, 2003).

En línea con esta construcción de un territorio en tensión y constante cambio⁵, se llevan a cabo, en paralelo, una serie de políticas públicas que le-

chileno (vinculado a la generación de acero por parte de la CAP), para luego pasar al holding CMP durante la dictadura chilena. Ya hacia los años 90, se inserta Eléctrica Guacolda, ayudada por la especulativa generación de energía barata, en un supuesto escenario de sequías y crisis energéticas. Ya hacia el año 2000 llega la mega minería de la mano de Barrick Gold, y la Agroindustria en el valle, con el caso de Agrosuper. Todo esto sin contar el impacto local de la agrícola Campillay.

4 / Para el caso de la gran minería de oro el ejemplo es evidente, mientras Barrick cuenta con su centro de operaciones en Toronto, Canadá, su centro de faenas se ubica a miles de kilómetros de distancia, en el Valle del Huasco, Chile.

5 / “Tras siglos de una relativa estabilidad empírica y simbólica de las realidades agrarias, no solo se han producido enormes transformaciones, sino que la idea misma de cambio se ha instalado también en el centro de los territorios sociales de la ruralidad. Esto ha acreado una enorme convulsión en la relación de los habitantes y trabajadores rurales con sus territorios, en sus pertenencias y extrañezas” (PNUD, 2008. P. 53).

gitiman las invasivas formas de percibir el desarrollo en la región.

De este modo, se irrumpe en un valle que es el último oasis que detiene el desierto de Atacama y que acoge, en gran medida, algunos imaginarios de lo rural: “campesinos, mineros, pescadores, artesanos, empresarios agrícolas y los dedicados al sector servicios como pobladores rurales” (PNUD, 2008. p, 19), con distintas actividades que van de cordillera a mar-minería, agricultura, termoeléctricas y pesca- que pujan y compiten por recursos limitados.

Formas invasivas dedesarrollo encuentran, en otro imaginario de lo rural, un espacio “atrasado” y “primitivo”, un espacio de transformación especulativa, donde las tierras vírgenes deben ser puestas en producción (Woods, 2011).

El río Huasco, que atraviesa el valle por todas sus comunas, debe sustentar una serie de actividades que se contraponen y devienen en incompatibles, situación frente a la que el corolario parece ser claro: en el valle no hay espacio para todos.

En esta línea, el valle cuenta con comunidades locales que buscan espacios donde subsistir en este escenario hostil, como también sobrevivir a ambientes contaminados y a políticas públicas que replican este modelo (de extracción de materias primas), lo que amenaza con mucha claridad el ethos productivo de diferentes comunidades y que, por lo demás, perpetúa una si-

tuación que vulnera sistemáticamente los derechos humanos⁶.

El Valle del Huasco se constituye, a partir de una serie de políticas estructurales que lo han modelado, en un territorio de sacrificio, en el que todos los problemas (las “externalidades negativas”, hablando en la jerga dominante) de una forma de concebir el desarrollo no han sido cuestionadas, ni han enfrentado barreras institucionales, sino que más bien han contado con un fomento, o al menos una venia institucional, a pesar del evidente descalabro social y ambiental.

Todos estos procesos, que se han llevado a cabo bajo la retórica de la descentralización, se han traducido, en realidad, en una desconcentración de los poderes del Estado, en los que se delega manteniendo el centralismo en las decisiones importantes. Se abre acá un espacio considerable de crítica a la forma como el Estado chileno ha conducido el proceso descentralizador, por lo menos desde un punto de vista territorial, al no acompañarlo mediante un proceso paralelo de creación y de transferencia del conocimiento pertinente a la epistemología del crecimiento económico y del desarrollo territorial⁷.

6/ Principalmente el derecho a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2012).

7/ Para profundizar el tema de la descentralización de Estado referirse a Boisier, S., 1998, Boisier, S., 2007.

Un proceso descentralizador, desde esta perspectiva, implicaría contar con políticas de desarrollo (endógeno) más proteccionistas hacia las regiones; en una visión opuesta al simple y fiel desarrollo de ventajas comparativas, donde el Valle del Huasco parece condenado a la eterna explotación de materias primas.

2

LAS COMUNIDADES, SERVICIO PAÍS Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO

En el contexto descrito, el Programa Servicio País participa de distintas actividades, destacando, entre ellas, la intervención en el borde costero, el trabajo con agricultores y, por último, con la Comunidad Huascoalitina. Intervenciones que a continuación se describen brevemente.

Tomando la intervención del borde costero de la provincia del Huasco, podemos mencionar que, en lo práctico, la intervención se centró en actividades que buscaban convertir actividades mono productivas, como la pesca artesanal, en actividades pluri productivas, donde se incluía el turismo y la gastronomía, buscando una reconversión productiva. La dinámica de trabajo que se replicaba era la “mesa de pesca”, comisión entre públicos y privados, donde los grupos de poder

buscaban validarse frente a los pescadores artesanales, generando lógicas de dependencia hacia las autoridades, bajo una óptica metodológica de mutuo apoyo y democracia.

El trabajo con los agricultores, por otra parte, consistía en el fortalecimiento comunitario a partir de la asesoría a organizaciones comunitarias y, así también, en la participación frente a las instancias en dónde podían tener participación (observaciones frente a proyectos ambientales, mesas del agua o comisiones de empleo).

Por último, el trabajo con el pueblo huascoalitino se alejaba de estas dinámicas pro gobernabilidad, puesto que estas comunidades buscaban consolidar un territorio de auto determinación, y en este objetivo, incluso se hacía necesario demandar al Estado de Chile⁸; sin embargo, paralelamente, trabajaban con fondos gubernamentales y de ONGs ambientalistas.

Como rasgo común de las intervenciones descritas, es importante destacar la sintonía y el entusiasmo de las comunidades locales con estas iniciativas. En efecto, el sector de la pesca artesanal es sumamente vulnerable, debido tanto a los peligros que los pescadores asumen las noches que salen

8/ Este es el caso de la denuncia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evidenciaba la nula injerencia de la comunidad Huascoalitina frente a la aprobación del proyecto Pascua Lama, dentro de su propio territorio soberano.

a pescar, como a la precariedad que enfrenta el sector ante el desarrollo de la pesca industrial. Y lo mismo ocurre con los agricultores, por la inseguridad de contar o no con agua o un ambiente libre de contaminación, ambos factores cruciales para su trabajo.

En este punto es donde consideramos que las políticas macro y sus indicadores asociados pueden chocar en ocasiones con el trabajo que realizan algunas organizaciones sociales con las comunidades. Estas situaciones, que parecen paradojas –la mano izquierda y derecha del Estado enfrentadas⁹, devienen en una relación de interdependencia y complicidad.

Un buen ejemplo, en relación a la agricultura, corresponde a las medidas de mitigación que establece la autoridad para los proyectos de la gran minería en la cordillera o las termoeléctricas en la costa. La primera,

9 / Aludimos a metáfora que Bourdieu establece en relación a los “brazos del Estado”, que bien pueden implementar acciones contrapuestas. El brazo derecho al pretender dinamizar la macro economía frente al brazo izquierdo que, al caso, corresponde a todas las intervenciones de pobreza en que se insertan los profesionales de servicio país: “contradicciones que rayan el límite más extremo de los que experimentan actualmente todos los denominados “trabajadores sociales” (...). Constituyen lo que llamo la mano izquierda del Estado, el conjunto de agentes de los ministerios llamados dispendiosos, que son la huella, en el seno del Estado, de las luchas sociales del pasado. Se enfrentan al Estado de la mano derecha, a los enarcas del ministerio de Hacienda, los bancos públicos o privados y los gabinetes ministeriales” (1999,p, 12).

compitiendo por el uso productivo del agua y la segunda, amenazando los cultivos debido a la contaminación.

Otro ejemplo desde la experiencia con la pesca artesanal, es la invitación del Estado a participar de mesas de pesca, donde a pesar de promover asambleas abiertas de opinión y el fomento productivo, todo se condiciona a legislaciones que no vinculan realmente la participación¹⁰, ni mucho menos cuestionan asuntos estructurales de la pesca artesanal (precariedad laboral, una ley de pesca pro sector industrial).

Por otra parte, los sectores privados invitados a participar en estas instancias desde una lógica de Responsabilidad Social Empresarial¹¹, constituyen en el mediano y largo plazo una amenaza a la posibilidad de existir de otros sectores. De ahí que ofrezcan recursos para la reconversión productiva (principalmente el turismo y capacitaciones para operar maquinaria pesada). De este modo, en esta clase de instancias se toman una serie de iniciativas y medidas que no guardan coherencia entre ellas y que en la práctica mantienen el statu quo.

10 / Este es el caso de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, que condiciona la participación desde la consulta no vinculante, que solo permite “mejorar” los proyectos de inversión, nunca poniendo en duda la realización de estos proyectos.

11 / Este es el caso de la empresa Eléctrica Guacolda, la agroindustrial Agrosuper y la minera Barrick Gold.

La paradoja no solo se vivía en relación a los fines y propósitos de las políticas descritas, sino también a partir de cómo se implementaban estos proyectos sociales, en que las diferentes instituciones se disputaban a los usuarios/ beneficiarios, tal era el caso –siguiendo con la agricultura– de al menos cinco instituciones¹² que trabajaban en el mismo territorio y con el mismo perfil de usuarios. Y, por otra parte, desde las comunidades, al hacerse beneficiarias de estos proyectos bajo una lógica oportunista¹³.

Frente a este contexto general, surgen las siguientes preguntas: ¿qué clase de intervención es factible realizarse en comunidades que marchan al inexorable desastre socio ambiental? ¿Qué puede hacer una comunidad en relación a sus derechos de agua, frente a las presiones de la gran minería? ¿Qué puede hacer la pesca artesanal cuando se cambia el uso de suelos en la costa y se instala una termoelectrica? ¿Y qué pueden hacer los olivicultores frente a la polución producto de la producción de energía contaminante?

12 / Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), Prodesal (Programa de Desarrollo Local), PTI (Programa Territorial Integrado), Cadenas Agroindustriales, Codesser (Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, Ceaza (Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas), etc.

13 / En estos casos, había situación tales como matrimonios en que la mujer aparecía beneficiaria de una institución y el hombre de otra, pese a que de acuerdo a las bases, los beneficios eran excluyentes.

Se trata de preguntas abiertas en territorios en que el crecimiento y el desarrollo se padecen por sectores como los descritos, a partir de los costos sociales y medioambientales. Si bien estos sectores pueden ser eventualmente incluidos desde lo económico a partir de trabajos temporales o en el área de servicios, son excluidos desde lo social. Basta pensar en la clase de empleo al que se puede acceder en la agroindustria o en la minería, mediante relaciones formales y legales, pero fuertemente precarizados.

Como dos caras de una misma moneda, estas comunidades son el reverso de las cifras macroeconómicas y el crecimiento. En palabras de Bengoa,

“no tienen manera de ‘colgarse’ del desarrollo que se está llevando a cabo en el país. Lo ven por la televisión. No hay lazos con el ámbito desarrollado. Pero junto a no ver maneras de ‘colgarse’ del desarrollo, tampoco se tienen las herramientas adecuadas para posibilitar un camino paralelo, definir las ‘vocaciones’ del sector, manejar localmente los hitos del propio desarrollo, establecer programas institucionales que permitan un desarrollo específico, e incluso alternativo, de esa área del país” (1996. p.3).

En definitiva, tal como señala Solimano, la pregunta que enfrentan cotidiana-

namente estas comunidades es: “cómo cuadrar esta construcción hipotética de una aséptica y armoniosa economía de mercado con la evidencia diaria y tangible del capitalismo real” (2012: 68). Lo que al caso corresponde, casi de modo independiente, a que las cosas vayan bien o mal, a una situación muy precarizada y de gran incertidumbre.

Se busca, por ende, superar la pobreza, pero desde una óptica sesgada, orientada especialmente a la empleabilidad y al fomento productivo, sin considerar una resistencia a este territorio de sacrificio construido históricamente en conjunto desde el Estado, la élite empresarial y las comunidades locales, históricamente domesticadas (Zibechi, 2010) e impotentes frente a la dimensión de los cambios por las políticas públicas de turno.

3

SERVICIO PAÍS Y SUS ROLES

En esta clase de contextos, el Programa Servicio País envía a sus profesionales a participar en distintas instituciones y programas gubernamentales. Aquí se produce un primer desajuste, en la medida en que como Fundación y como representantes de una institución de acogida, existe una relación de doble dependencia, en que las directrices de uno y otro pueden coincidir o inclusive estar contrapuestas.

La primera pregunta, entonces, es: ¿cómo se insertan los y las profesionales de Servicio País en las instituciones de acogida? Esto, en la medida que muchas de ellas, también ejercen roles que pueden no compartir necesariamente la visión de pobreza de la Fundación¹⁴.

El profesional SP se enfrenta a esta realidad, como traductor de las demandas de las comunidades –en una labor de intermediación, mediante la formulación de proyectos, por ejemplo– y como la cara amable del Estado y los programas sociales, la de los y las jóvenes del “Chile País”.

El profesional hace con frecuencia de vínculo entre diferentes actores, comunidades e instituciones gubernamentales, lo que implica ejercer un rol bastante específico, en la medida en que trabaja por un lado con la comunidad, al ofrecerles asesorías profesionales que les permiten acceder a la oferta pública de recursos; y trabaja, por otra parte, con el Gobierno, al facilitar su vínculo con las comunidades, ayudando a naturalizar relaciones de dependencia hacia los organismos estatales y las empresas.

Raúl Zibechi (2010, p. 70-71) grafica con claridad las dinámicas que se dan entre el Estado y las comunidades locales, donde los y las profesionales

¹⁴ / En las experiencias de los autores, se contraponen las visiones de la pesca artesanal y agricultores, con la comunidad indígena Huascoalina, que tenía una idea más autónoma y reivindicativa de desarrollo.

de Servicio País son interlocutores: “Se genera la ilusión de que los problemas concretos del barrio, o de la sociedad, pueden resolverse con base en la colaboración de “actores”, que resuelven sus diferencias sin lucha ni confrontación. En este punto hay total confluencia entre empresas privadas o públicas y el Estado: ambos buscan involucrar a los colectivos territoriales en una cultura de colaboración, para llevar adelante acciones positivas concretas que consisten en intervenciones de carácter no estructural que refuerzan la subordinación de los pobres”.

De esta forma, el Estado controla a las comunidades que puedan resultar disruptivas, generalmente aquellas que se encuentran más afectadas por los problemas generados por la visión de desarrollo extractivista, por ejemplo, los pescadores artesanales. Zibechi (2010) y Atria (2013) coinciden en que la institucionalidad por medio del consenso apacigua el descontento, y también la posibilidad de cambio al sistema imperante: “Las instituciones políticas son las formas en que lo polémico del conflicto político es contenido para permitir la discusión y el conflicto político sin que se desate la violencia” (Atria, 2013, p. 22).

La base del funcionamiento de estas instituciones se centra en el paradigma productivo del desarrollo capitalista, que requiere (para la acumulación particular, y por ende, el despojo popular), además del control

de la sociedad, mantener, por un lado, la desigualdad a niveles que no sean tan escandalosos, mediante la superación de la pobreza (Zibechi, 2010), y la puesta en operación del capital mediante el trabajo (Harvey, 2012).

El profesional de Servicio País vive parte de la paradoja de “cuadrar el círculo” de la acción de la mano derecha con la mano izquierda del Estado, y cómo se compatibilizan la vida de las comunidades con los efectos no deseados de la modernización.

Paradojas que se ven acentuadas en la medida en que el trabajo en las comunidades se evalúa a partir de una visión tecnocrática, basada en la construcción de indicadores, que pretenden estar asociados a su eficiencia. Al caso, el punto no es carecer de una evaluación, sino la falta de una adecuada planificación y coordinación intersectorial que pueda redundar en una intervención realmente pertinente al territorio. En este sentido, se percibía una oferta pública diseminada, pero que en la práctica ofrece lo mismo¹⁵.

Así, también resultaba claro para nosotros que había muchos proce-

15/ Bengoa ofrece un ejemplo al respecto: “se percibe la existencia de cuantiosos recursos que se emplean de forma paralela descoordinada, repetitiva y sin efectos reales concretos. Los campesinos nos dicen siempre, ayer pasó la camioneta de otra institución, cada camioneta lleva sus programas, sus técnicas y sus propuestas. Muchas veces no saben lo que los otros hacen y se contradicen. Hablábamos en algunas reuniones de manera burlona, del programa de la “camioneta única” como perspectiva de coordinación” (1996, p.11).

sos que sencillamente no era posible “cuantificar”; en este sentido, tal como señala el PNUD, las “políticas públicas no pueden medirse exclusivamente por la eficacia de sus rendimientos objetivos; deben ser también espacios de reconocimiento, valoración y potenciación de las personas” (2008: 110).

En este sentido, insertos en las instituciones de acogida descritas, relacionándonos con estas comunidades y en el marco de las intervenciones que propone la Fundación para la Superación de la Pobreza, se debía tomar partido y enfrentar las tensiones, entre los requerimientos de las instituciones de acogida, de las comunidades y los objetivos originalmente trazados a partir de los que había que reportar resultados y avances a la Fundación.

4

REFLEXIONES FINALES

Saber cómo se operacionalizan las intervenciones en pobreza, más allá de lo que se plantea institucionalmente o el bagaje profesional de cada cual, fue un gran aprendizaje que permitió entender cómo dialogan territorio, políticas públicas y comunidad en sus distintos niveles, en lo que hemos denominado, genéricamente, como “cuadrar el círculo”.

En este sentido, el texto ha buscado problematizar la pertinencia del Pro-

grama Servicio País y cómo éste está imbricado con la cultura local y los anhelos de la comunidad. El análisis lo hemos hecho tratando de alejarnos de una visión voluntarista así como de los supuestos en el diseño de política que pretenden que éstas se implementan en una tabula rasa.

En lo que respecta a la experiencia con la pesca artesanal, los proyectos de fomento productivo constituían ayudas poco significativas, que buscaban la reconversión del ethos pesquero. Se buscaba hacer útil un sector identificado como atrasado y poco dinámico, sin fomentar ni proteger desde las virtudes del sector. Ante esto, ¿estamos realmente buscando superar la pobreza, o estamos replicando un modelo de intervención estandarizado para los usuarios o clientes de estos programas? Similar situación se vivía en relación a la agricultura.

Al parecer, las políticas públicas que buscan superar la pobreza se diseñan desde una óptica sesgada, orientada especialmente a la empleabilidad y al fomento productivo, pero sin considerar una resistencia a este territorio de sacrificio, construido históricamente en conjunto desde el Estado, la élite empresarial y las comunidades locales históricamente domesticadas, (Zibechi, 2010) e impotentes frente a la dimensión de los cambios por las políticas públicas de turno.

A principios de 2012, la ciudadanía de Freirina, mediante presiones

mediáticas, cortes de caminos y manifestaciones, se levantó en contra del histórico y naturalizado desarrollo, materializado por la planta de alimentos y faenadora de cerdos de Agrosuper. Las presiones terminaron dando la razón a las comunidades locales. Situación que se encuentra en desarrollo, junto a la judicialización de los proyectos Pascua Lama y El Morro, lo que supone un despertar de las comunidades locales, que para el 2009 parecían somnolientas ante el asistencialismo Estatal y la intromisión empresarial. El trabajo, entonces, para la búsqueda real de la superación de la pobreza, ¿no debería estar directamente en relación con las comunidades locales?

¿Las intervenciones en pobreza deberían considerar el inevitable antagonismo de lo político (Mouffe, 2007), inevitablemente presente en las políticas públicas? Es decir, no considerar a las políticas públicas como asépticas, técnicas (y libres de ideología), sino como metodologías que integran los conflic-

tos que se dan entre distintos actores sociales presentes en el territorio. Ante esto, asumiendo los antagonismos y según nuestra experiencia en Servicio País, consideramos que en el caso de nuestra intervención hubiera resultado más pertinente ofrecer a las comunidades locales herramientas de incidencia mediática y jurídica (cortes de ruta, marchas, judicialización de proyectos de inversión, etc.) Pues estas vías han resultado las únicas que se han mostrado como alternativas al statu quo, al territorio de sacrificio. ¿Se debe entonces, avanzar a territorios de resistencia?

Por último, la política pública ha tomado estas formas en el Valle del Huasco, quizá en la medida en que no hay otra alternativa viable al modelo de desarrollo, y se considera que el estilo de vida adoptado por estas comunidades –las de pescadores y agricultores, por ejemplo–, debe ser una expresión refractaria de otras que se constituyen en las hegemónicas, tales como la gran minería, la agroindustria o las termoeléctricas.

Bibliografía

- Atria, F., 2013. La constitución tramposa. Lom, Santiago.
- Bengoia, J., 1996. “Pobreza campesina y desarrollo rural”. Temas Sociales, Vol. 13. Santiago de Chile: Ediciones SUR, noviembre, 1996; 1ª edición. [en línea]. Disponible en: <http://www.sitiosur.cl/r.php?id=253> [obtenido el 17 de noviembre de 2014]
- Boisier, Sergio., 1998. “Chile siglo XXI: ¿Descentralización del Estado o descentralización de la sociedad?” En: Reflexión y análisis sobre el proceso de descentralización en Chile. Ministerio de Planificación y Cooperación.
- Boisier, Sergio., 2007. “Territorio, estado y sociedad en Chile. La dialéctica de la descentralización: entre la geografía y la gobernabilidad.” Tesis Doctoral. Universidad De Alcalá De Henares, España. [en línea]. Disponible en: <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/2113/TESIS%20SBOI%20VERSION%20FINAL.pdf?sequence=1> [obtenido el 10 de noviembre de 2014]
- Bourdieu, P., 1999. “Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal”. Anagrama.
- Dirven, M., 2003. “Entre el ideario y la realidad: capital social y desarrollo agrícola. Algunos apuntes para la reflexión”. En: Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Raúl Atria y Marcelo Siles (eds.). pp. 397-446. CEPAL
- Harvey, D., 2004. “El ‘nuevo’ imperialismo: Acumulación por desposesión”. En Socialist Register. [en línea]. Disponible en: <http://www.biblioteca.cavir.tual.clasco.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf> [obtenido el: 17-11-2014]
- Harvey, D., 2007. Espacios de Esperanza. Akal.

Harvey, D., 2012. El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Akal.

Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2012) Mapa de conflictos socio ambientales en Chile. [en línea]. Disponible en <http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/478/mapa-conflictos.pdf?sequence=4> [obtenido el 24 de marzo de 2015]

Mouffe, C., 2007. En torno a lo político. Fondo de Cultura Económica.

O'Connor, J., 2003. Desarrollo desigual y combinado y crisis ecológica. *Ambient. Soc.* (online). Vol.6. N°2. Pp.9-23.

PNUD., 2008. Desarrollo Humano en Chile Rural. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Smith, N., 1991. "Uneven development: Nature, capital and the production of space". Basil-Blackwell inc. Massachussets.

Solimano, A., 2012. "Capitalismo a la chilena y la prosperidad de las élites" Editorial Catalonia.

Woods, M., 2011. "Rural: Keys ideas in Geography". Routledge.

Zibeche, R., 2010. "Progresismo. La domesticación de los movimientos sociales". Quimantú. Santiago.

SOMOS una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos orígenes se remontan a 1994.

CREEMOS que superar la pobreza que experimentan millones de chilenos y chilenas en nuestro país es un desafío de equidad, integración y justicia social.

CONTRIBUIMOS a la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza.

DESARROLLAMOS nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una parte, desarrollamos intervenciones sociales a través de nuestro programa **SERVICIO PAÍS**, que pone a prueba modelos innovadores y replicables para resolver problemáticas específicas de pobreza y, por otra, elaboramos propuestas para el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a la superación de este problema, tanto a nivel nacional como local. Así desde nuestros orígenes hemos buscado complementar, desde la sociedad civil, la labor de las políticas sociales impulsadas por el Estado de Chile.

Desde nuestros inicios trabajamos en alianza con el Estado de Chile y municipios de las 16 regiones del país. Contamos con financiamiento de entidades privadas y fondos públicos provenientes de los ministerios de Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

superacionpobreza.cl / serviciopais.cl



/superarpobreza



@serviciopais
@superarpobreza



@serviciopais

Con el apoyo del

